



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO



Tesis:

La necesidad de la institucionalización del derecho deportivo a través de la autonomía del derecho al deporte

Autor:

Bach. Vera Mejía Piero Jair Aldhair

Asesor:

Dr. Amador Mondoñedo Valle

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE ABOGADO

Fecha de sustentación:

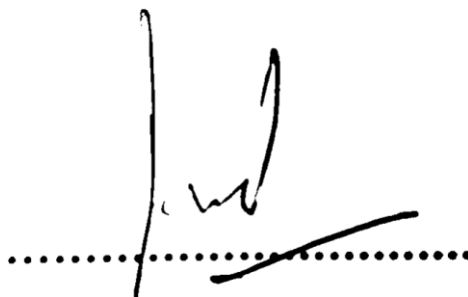
24 de octubre de 2024

Lambayeque, 2024

Tesis denominada: “La necesidad de la institucionalización del derecho deportivo a través de la autonomía del derecho al deporte”, presentada para optar el título profesional de abogado, por:

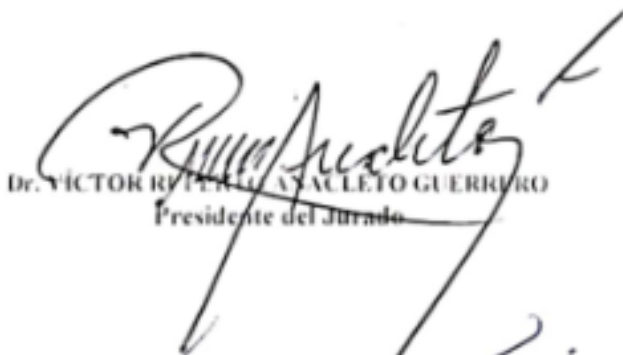


.....
Bach. Vera Mejía Piero Jair Aldhair
Autor



.....
Mag. Mondoñedo Valle Amador
Asesor

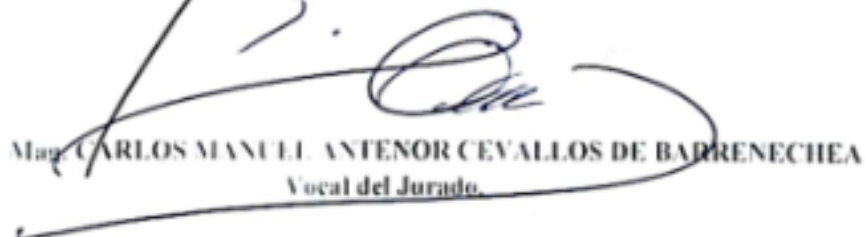
APROBADO POR:



Dr. VÍCTOR RIVAS ACULETO GUERRERO
Presidente del Jurado



Abog. CÉSAR VARGAS RODRÍGUEZ
Secretario del Jurado



Mag. CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA
Vocal del Jurado

DEDICATORIA

Dedicas la presente tesis a mis padres, pues ellos han sido, son y serán, el apoyo que siempre he necesitado para poder afrontar las situaciones más difíciles en las que la vida me ha situado, logrando cumplir una a una las metas propuestas.

AGRADECIMIENTO

No puedo dejar pasar esta oportunidad para darle gracias a Dios, por haberme dado salud y fortaleza, lo cual me permitió llegar hasta aquí.

A mi hermano mayor, por ser siempre mi ejemplo en cada aspecto de mi vida.

A mi novia, por ser ella junto a mis padres, quienes me impulsaron a ser una mejor persona, un gran deportista y un excelente profesional, ya que gracias al amor incondicional que me brindan a diario, se convirtieron en mi inspiración para lograr grandes cosas en esta vida.

A mis maestros, y no me refiero tan sólo a mis maestros universitarios, sino también a los maestros en el ejercicio de la profesión, a mis maestros en la práctica del deporte y a todas las personas que de una u otra manera apoyaron para la realización de esta tesis, mi eterna gratitud estará siempre con ustedes.



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA
UNIDAD DE INVESTIGACION



ACTA DE SUSTENTACIÓN

ACTA DE SUSTENTACIÓN PRESENCIAL N° 90-2024-UI-FDCP

Sustentación para optar el Título de ABOGADO de: **Piero Jair Aldhair Vera Mejía**.
Siendo las 4:30 p.m. del día jueves 24 de octubre del 2024 se reunieron en la Sala de simulación de audiencias 1 de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo", los miembros del jurado evaluador de la tesis titulada: "**La necesidad de la institucionalización del Derecho Deportivo a través de la autonomía del derecho al deporte**", designados por Resolución N° 305-2023-FDCP-VIRTUAL de fecha 7 de julio de 2023, con la finalidad Evaluar y Calificar la sustentación de la tesis antes mencionada, por parte de los Señores Catedráticos:

PRESIDENTE : **Dr. VÍCTOR RUPERTO ANACLETO GUERRERO.**
SECRETARIO : **Abog. CESAR VARGAS RODRÍGUEZ.**
VOCAL : **Mag. CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA**

La tesis fue asesorada por Dr. AMADOR MONDOÑEDO VALLE, nombrada por Resolución N° 46-2022-FDCP-VIRTUAL de fecha 09 de MARZO de 2022.

El acto de sustentación fue autorizado por Resolución N° 652-2024-FDCP-UNPRG de fecha 22 de octubre del 2024.

La tesis fue presentada y sustentada por el bachiller **Piero Jair Aldhair Vera Mejía** y tuvo una duración de 30 minutos. Después de la sustentación y absueltas las preguntas y observaciones de los miembros del jurado; se procedió a la calificación respectiva, obteniendo el siguiente resultado: **APROBADO con la nota de 17 (DIECISIETE) en la escala vigesimal, mención de BUENO**.

Por lo que queda APTO para obtener el Título Profesional de ABOGADO, de acuerdo con la Ley Universitaria 30220 y la normatividad vigente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Siendo las 5:29 p.m., del mismo día, se da por concluido el acto académico tomando la juramentación respectiva y suscribiendo el Acta los miembros del jurado.

Lambayeque, jueves 24 de octubre del 2024


Dr. VÍCTOR RUPERTO ANACLETO GUERRERO
Presidente del Jurado


Abog. CESAR VARGAS RODRÍGUEZ
Secretario del Jurado

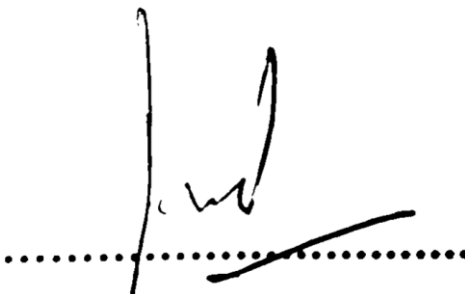

Mag. CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA
Vocal del Jurado.

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS

Yo, Dr. AMADOR MONDOÑEDO VALLE, Docente/ Asesor de tesis/ Revisor del trabajo de investigación del bachiller en DERECHO Piero Jair Aldhair Vera Mejía, Titulada **La necesidad de la institucionalización del Derecho Deportivo a través de la autonomía del derecho al deporte**, luego de la revisión exhaustiva del documento constato que la misma tiene un índice de similitud de 12 % verificable en el reporte de similitud del programa Turnitin.

El suscrito analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Lambayeque, 24 de setiembre del 2024.



Mag. AMADOR NICOLAS MONDOÑEDO VALLE

DNI: 29270773

ASESOR



Bach. Piero Jair Aldhair Vera Mejía

DNI: 74926827

Autor

"LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO DEPORTIVO A TRAVÉS DE LA AUTONOMÍA DEL DERECHO AL DEPORTE"

INFORME DE ORIGINALIDAD

12%

INDICE DE SIMILITUD

11%

FUENTES DE INTERNET

2%

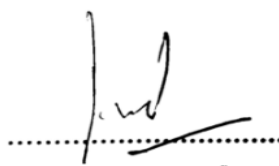
PUBLICACIONES

6%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	revistas.uchile.cl	Fuente de Internet	2%
2	hdl.handle.net	Fuente de Internet	1%
3	carlosclercabogado.blogspot.com	Fuente de Internet	1%
4	Submitted to Pontificia Universidad Catolica del Peru	Trabajo del estudiante	1%
5	vsip.info	Fuente de Internet	1%
6	recursosbiblio.url.edu.gt	Fuente de Internet	1%
7	repositorio.unprg.edu.pe	Fuente de Internet	1%
8	publicaciones.ucatolica.edu.co	Fuente de Internet	<1%



Mag. AMADOR NICOLAS MONDOÑEDO VALLE

DNI: 29270773

ASESOR




Recibo digital


Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por **Turnitin**. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: Piero Jair Aldhair Vera Mejía
Título del ejercicio: Quick Submit
Título de la entrega: "LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECH...
Nombre del archivo: INFORME_FINAL_UNPRG-_TESIS_PIERO_VERA.docx
Tamaño del archivo: 1.85M
Total páginas: 158
Total de palabras: 38,009
Total de caracteres: 212,410
Fecha de entrega: 13-nov.-2024 09:51a. m. (UTC-0500)
Identificador de la entre... 2518302125



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO



Tesis:
"LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO DEPORTIVO A TRAVÉS
DE LA AUTONOMÍA DEL DERECHO AL DEPORTE"

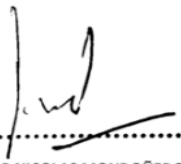
Autor:
Bach. Vera Mejía, Piero Jair Aldhair

Asesor:
Abog. Amador Mondoñedo Valle

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

Fecha de sustentación:
24 de octubre de 2024

Lambayeque, 2024



Mag. AMADOR NICOLAS MONDOÑEDO VALLE
DNI: 29270773
ASESOR

ÍNDICE

DEDICATORIA.....	3
AGRADECIMIENTO	4
ÍNDICE	5
RESUMEN	9
ABSTRACT.....	10
INTRODUCCIÓN.....	11
Capítulo I	14
Diseño Metodológico	14
1.1. Realidad Problemática.....	14
1.1.1. Planteamiento del Problema.....	14
1.1.2. Formulación del Problema.....	16
1.2. Justificación e Importancia del Problema	16
1.2.1. Justificación del estudio.....	16
1.2.2. Importancia del estudio	17
1.3. Objetivos de la Investigación.	18
1.3.1. Objetivo General.....	18
1.3.2. Objetivos Específicos.....	18
1.4. Hipótesis	18
1.5.1. Variable independiente	18
1.5.2. Variable dependiente	18
1.6. Bases conceptuales.....	19

1.6.1. Institucionalización.....	19
1.6.2. Deporte.....	21
1.6.3. Derecho Deportivo	22
1.7. Diseño de Contrastación de Hipótesis	23
1.8. Población y Muestra.....	24
1.8.1. Población.....	24
1.8.2. Muestra	24
1.9.1. Métodos.....	25
1.9.1.1. Métodos generales.....	25
Capítulo II	30
Diseño Teórico	30
2.1. Antecedentes de la Investigación.....	30
2.2. Bases Teóricas.....	33
2.2.1. Derecho Deportivo	33
2.2.1.1. Aproximación conceptual del deporte.	34
2.2.1.2. Recapitulación histórica del deporte.....	35
2.2.1.3. Definiciones del Derecho Deportivo.	38
2.2.1.4. Denominaciones.....	41
2.2.1.5. Ámbito.....	42
2.2.1.6. Características.	43
2.2.1.7. Fuentes.....	45
2.2.1.8. Autonomía.....	50

Análisis y resultados	131
3.1. Investigaciones realizadas	131
3.2. Resultados del análisis sobre la muestra	132
Capítulo IV	140
Contrastación de la Hipótesis	140
4.1. Discusión de los resultados	140
CONCLUSIONES.....	148
RECOMENDACIONES	149
REFERENCIAS	150
ANEXOS	157

RESUMEN

El estudio que se desarrolla en esta tesis es referente al derecho al deporte y su consideración como derecho fundamental, basado en el derecho a la asociación, que pertenece a la primera generación de derecho, todo ello, de acuerdo a la legislación comparada; si bien su reconocimiento constitucional como derecho a la educación física se dio antes, el derecho al deporte también puede ser visto como un derecho de segunda generación; es por ello que, podemos afirmar respecto del derecho al deporte que, este no es solo un derecho fundamental autónomo, sino también una garantía institucional y un conjunto de principios fundamentales del Derecho Constitucional.

Actualmente, en el Perú, el deporte se contempla principalmente como parte de la educación física y la recreación, siendo visto más como un juego y una actividad de entretenimiento social; por tanto, la presente investigación demostrará cómo la falta de un desarrollo normativo apropiado en materia deportiva afecta negativamente el acceso y el desarrollo de las competencias deportivas, tanto para las personas como para las instituciones públicas y privadas, existiendo una necesidad urgente de que el marco legal peruano reconozca el deporte como un derecho constitucional y fortalezca su regulación, con el fin de garantizar un mejor acceso y desarrollo de las actividades deportivas competitivas en el país.

Palabras claves: Constitución, Legislación Peruana, Derecho constitucional, Derecho al Deporte, Derecho Deportivo.

ABSTRACT

The right to sport is considered a fundamental right, based on the right to association, which belongs to the first generation of law, all according to comparative legislation; although its constitutional recognition as a right to physical education was given before, the right to sport can also be seen as a second generation right; that is why, we can affirm with regard to the right to sport that, this is not only an autonomous fundamental right, but also an institutional guarantee and a set of fundamental principles of Constitutional Law.

Currently, in Peru, sport is mainly contemplated as part of physical education and recreation, being seen more as a game and a social entertainment activity, therefore, the present research will demonstrate how the lack of appropriate regulatory development in sports matters negatively affects the access and development of sports skills, both for individuals and for public and private institutions, with an urgent need for the Peruvian legal framework to recognize sports as a constitutional right and strengthen its regulation, in order to guarantee better access and development of competitive sports activities in the country.

Keywords: Constitution, Peruvian Legislation, Constitutional Law, Right to Sport, Sports Law.

INTRODUCCIÓN

La presente investigación se ha denominado “La necesidad de la institucionalización del derecho deportivo a través de la autonomía del derecho al deporte”, misma que ha sido desarrollada en atención a lo observado en la legislación nacional e internacional, ya que, como sabemos, el deporte ha adquirido una creciente importancia en la sociedad contemporánea, convirtiéndose en un fenómeno social, cultural y económico de gran relevancia; en este contexto, la relación entre el Derecho y el Deporte se ha vuelto cada vez más estrecha, como resultado de ello, la práctica deportiva genera diversas consecuencias que repercuten de manera notable en el ámbito jurídico; siendo así, la normativa internacional ha encontrado en el deporte un espacio importante para desarrollar una nueva rama de estudio interdisciplinario: el derecho deportivo.

Así pues, esta tesis tiene como objetivo analizar las múltiples dimensiones que conforman el vínculo entre el Derecho y el Deporte, a través de un enfoque riguroso y sistemático, buscando de esta forma, comprender la constitucionalización del deporte, es decir, el proceso por el cual el deporte ha sido reconocido y protegido en los textos constitucionales de diversos países.

Sin temor a equivocarnos, el deporte se encuentra íntimamente ligado a las relaciones socioculturales de los pueblos; a través del deporte, las personas establecen vínculos y lazos especiales, lo que ha permitido la socialización del ser humano a lo largo de la historia. Paralelamente, el deporte ha evolucionado junto con la sociedad, alcanzando niveles y estándares propios de una actividad empresarial, principalmente debido a su internacionalización, esta evolución abarca aspectos económicos, sociales, culturales y, de manera ineludible, legales.

El objetivo principal de esta investigación es analizar la situación actual del tratamiento del deporte en la Constitución Política del Perú, así como proponer una reforma constitucional que eleve al deporte a la categoría de derecho fundamental, con el fin de fortalecer su desarrollo normativo y garantizar su efectivo ejercicio por parte de la población.

La investigación está dividida en cinco capítulos. En el primero, se establece el marco general de la investigación, incluyendo la definición del problema, los objetivos a alcanzar y las bases conceptuales que fundamentan el estudio; asimismo, se muestra el enfoque, modelo y tipo de investigación. El estudio se basó en la identificación y el análisis de los elementos constitutivos del derecho al deporte, desde una perspectiva técnico-jurídica. Se emplearon métodos de investigación jurídica teóricamente orientada, como el análisis teórico-doctrinal, histórico-jurídico, exegético y comparado.

El segundo capítulo de la tesis comprende el marco teórico, es decir establece las bases conceptuales, explorando la naturaleza de la relación entre el Derecho y el Deporte; el tercer capítulo profundiza en las diferentes dimensiones de esta vinculación, analizando cómo el Derecho regula y da forma a la práctica deportiva.

En los sub capítulos siguientes, la investigación se centró en la constitucionalización del deporte, examinando cómo los Estados han incorporado el deporte en sus marcos jurídicos fundamentales; este análisis permitirá comprender la evolución de los derechos relacionados con el deporte y su importancia en la consolidación de un Estado social, democrático y de Derecho.

En el tercer capítulo se llevará a cabo la discusión y resultados de las herramientas utilizadas como encuestas y entrevistas, teniendo como principal objetivo, la perspectiva de los deportistas profesionales y amateurs, así como de los abogados vinculados al deporte, respecto a la relevancia del deporte como derecho fundamental en nuestra legislación; el resultado obtenido, nos permitirá contar con la fundamentación teórica necesaria para la construcción de una dogmática particular del derecho constitucional al deporte, desde la óptica del Derecho comparado, logrando de esta forma de institucionalización del derecho deportivo en la legislación peruana.

Finalmente, en último capítulo, se realizará la contrastación de la hipótesis, a través de la cual, se revisará de manera amplia, el abordaje que la Constitución de 1979 y la Constitución de 1993 han dado al deporte, identificando los cambios y la evolución en su tratamiento; asimismo, se analizará la necesidad de sistematizar y armonizar la normativa deportiva vigente, a fin de lograr la coherencia y unidad que demanda esta rama del derecho. Cabe precisar que, a través de este estudio integral, se espera contribuir al conocimiento académico y al desarrollo de políticas públicas que fortalezcan la relación entre el Derecho y el Deporte, en beneficio de la sociedad en su conjunto.

Partiendo de los objetivos establecidos, la propuesta de reforma constitucional se fundamentará en la tendencia observada en diversos países de consagrar al deporte como un derecho fundamental, otorgándole un marco de garantías procesales e institucionales que permitan su efectivo ejercicio; de esta manera, se buscará elevar el deporte a la categoría de derecho autónomo, sin que ello implique una contradicción o incompatibilidad con el ordenamiento jurídico nacional e internacional.

El autor.

Capítulo I

Diseño Metodológico

1.1. Realidad Problemática

1.1.1. Planteamiento del Problema

El deporte es un fenómeno que permea la vida humana y trasciende al "deporte rey" como el fútbol. Todos experimentamos emoción al participar en alguna actividad deportiva, ya sea de manera aficionada o profesional, y al apoyar a nuestro equipo o atleta favorito, ya sea asistiendo a eventos en vivo o viéndolos por televisión.

Si bien actualmente el deporte se rige por un método racional de evaluación, competencia y récord, este tiene sus orígenes en el juego; el deporte se encuentra presente en la vida de las personas y en la sociedad de manera generalizada, más allá de los grandes eventos mediáticos como los mundiales de fútbol. Más que una mera actividad física, el deporte tiene una dimensión sociocultural y emocional importante, que nos involucra a todos como practicantes, seguidores o espectadores. Lejos de ser solo una cuestión de rendimiento y resultados, el deporte forma parte de la experiencia humana y de nuestra forma de relacionarnos con el mundo.

El juego y la actividad lúdica son inherentes a nuestra condición de seres vivos, no limitados a la racionalidad humana; de hecho, el juego trasciende la racionalidad, ya que esta lo acotaría únicamente al ser humano. Por eso, algunos autores como Johan Huizinga afirman que el juego es más antiguo que la propia cultura¹. Incluso si reducimos al máximo el concepto de cultura, siempre presupone la existencia de una sociedad humana. En cambio, el juego no tiene esa restricción, pues se origina en nuestra cualidad animal y biológica, más allá de la cultura y la racionalidad.

¹ Huizinga, J. (2020). *Homo ludens*. Editora Perspectiva SA.

El deporte se originó como una actividad meramente lúdica, formando parte incluso de rituales religiosos y políticos en la antigua Grecia. Sin embargo, en el transcurso de la modernidad, el deporte se fue racionalizando y adquirió la forma en que lo conocemos hoy, con competencias mejor estructuradas y delimitadas. Esta breve reseña histórica nos permite comprender la evolución que ha tenido el deporte.

Enfocándonos en la legislación peruana, encontramos que no existe una definición clara del deporte, el cual puede entenderse desde tres vertientes: deporte como juego, deporte como actividad física y deporte como competición. Es la combinación de estos tres aspectos lo que constituye el deporte moderno.

En otro orden de ideas, cabe resaltar también que, el deporte es considerado internacionalmente como derecho fundamental de segunda generación (derecho social) y logramos apreciar que, se encuentra vinculado a otros derechos, como el derecho al ocio (es aquí donde ubicamos su carácter lúdico). Otros derechos sumamente relevantes a los que se encuentra vinculado el deporte son el derecho a la salud y a la educación; existen también otras áreas en las que contribuye la práctica deportiva, por ejemplo, crea y consolida una identidad nacional, forma parte de la cultura, fomenta el desarrollo económico del país, así como también, en el plano internacional, contribuye al fomento de la paz.

Dado que el deporte es considerado un derecho humano fundamental, es necesario que este cuente con una correcta implementación y una adecuada regulación y reglamentación que garanticen su ejecución. Es por esta razón que surge el interés de desarrollar la presente investigación, cuyo objetivo es analizar la necesidad de redefinir constitucionalmente el Derecho al Deporte, a través de una modificatoria del artículo 14° de la Constitución Política del Perú.

Esto permitiría abordar de mejor manera el carácter de competición del deporte. Asimismo, se analizará cómo el mínimo desarrollo normativo en materia deportiva afecta

el acceso, ejercicio y desarrollo del deporte como fenómeno actual en la sociedad peruana, lo cual reduce la posibilidad de una correcta formación y práctica deportiva de los ciudadanos en todas las edades y estratos sociales.

Adicionalmente, se abordará la necesidad de establecer ciertas diferenciaciones en la legislación peruana existente, tales como el Derecho Deportivo Dinámico y Estático, analizando su estructura, ya que dentro de estas clasificaciones coexisten distintas organizaciones de Derecho Privado y Derecho Público.

1.1.2. *Formulación del Problema.*

¿Qué justificaciones jurídicas validas existen para institucionalizar el derecho deportivo a través de la autonomía del derecho al deporte?

1.2. Justificación e Importancia del Problema

1.2.1. *Justificación del estudio*

La presente investigación, será necesaria debido al poco desarrollo normativo y jurisprudencial nacional; siendo así, debemos iniciar indicando que, para referirnos al juego organizado y enmarcado en normas específicas, hemos optado por denominar al deporte como “fenómeno deportivo”, el cual es un fenómeno típico ligado a la actividad humana: incluso antes de referirse al componente de un Estado (el ciudadano), concierne al hombre como tal; naturalmente, la tesis sostenida en este trabajo va en la dirección de reafirmar la autonomía del derecho al deporte, en cuanto se encuentre dotado de legitimidad autónoma y, por lo tanto, independiente de la obligatoriedad de la norma estatal, pero no desligada totalmente de esta.

Por lo tanto, es vital el reconocimiento de un derecho fundamental como es el derecho al deporte en el texto constitucional para garantizar debidamente su ejercicio; de igual forma, no se puede descartar a priori una mejor referencia sobre el derecho al deporte en la Constitución. Los derechos sociales suelen descartarse de plano, al margen de la

justicia de su contenido, por la imposibilidad de concretarse satisfactoriamente en muchos países dado su requerimiento de recursos. Sin embargo, estos derechos sociales no deben considerarse de menor envergadura que los derechos tradicionales. La práctica deportiva conlleva múltiples beneficios: Contribuye a la formación integral del individuo, su desarrollo físico y mental, inculca valores (disciplina, esfuerzo, perseverancia, etc.), crea identidad nacional (como vemos en cada encuentro de las diversas prácticas deportivas, siendo la más popular el fútbol), genera inclusión social, cohesiona a la nación, entre otros beneficios. Asimismo, el deporte es una herramienta para la paz y el desarrollo de las naciones.

Por tanto, la principal razón que justifica la investigación proyectada es la jurídica, puesto que como hemos manifestado en párrafos anteriores, el reconocimiento parcial del deporte como derecho fundamental genera una ineficiente regulación normativa nacional vinculada al mismo.

1.2.2. *Importancia del estudio*

La importancia de la presente investigación radica principalmente en que esta permitirá proponer una modificatoria de la legislación nacional, como la implementación de un Código de Derecho Deportivo Peruano, mismo que, hará una recopilación de las principales normas que afectan al sector del deporte, facilitando su conocimiento de forma accesible y actualizada; de esta forma, se logrará la prevalencia de los derechos fundamentales de los deportistas profesionales; de igual forma, la interpretación de la propuesta de modificatoria de la normativa nacional relacionada al deporte, permitirá configurar una propuesta de cambio que garantice eficazmente el restablecimiento del orden público deportivo a nivel nacional.

1.3. Objetivos de la Investigación.

1.3.1. *Objetivo General*

- Determinar la necesidad de la institucionalización del derecho deportivo a través de la autonomía del derecho al deporte.

1.3.2. *Objetivos Específicos*

- Reconocer la necesidad de la Institucionalización del derecho deportivo en el Perú.
- Determinar que el deporte es un derecho autónomo en la Constitución Política del Perú.
- Realizar un estudio de legislación de los países de mayor desarrollo normativo en el plano deportivo a nivel internacional.

1.4. Hipótesis

El reconocimiento absoluto del deporte como derecho fundamental, logrará la institucionalización del Derecho Deportivo en el Perú.

1.5. Variables

1.5.1. *Variable independiente*

El deporte como derecho fundamental.

1.5.2. *Variable dependiente*

Institucionalización del Derecho deportivo en el Perú.

1.6. Bases conceptuales

1.6.1. Institucionalización

El concepto de institucionalización, destacado en la obra temprana de Luhmann en 1965, se refiere a un proceso de estabilización a dos niveles:

- Nivel estructural: Hay estructuras que están claramente definidas y que sirven para orientar el comportamiento en contextos sociales específicos.
- Nivel de consenso: El contenido de estas estructuras se encuentra debidamente legitimado, es decir, opera sobre un consenso supuesto (Luhmann, 1970).

En resumen, la institucionalización implica que ciertas estructuras sociales están lo bastante establecidas para guiar el comportamiento de los individuos, y que además gozan de un consenso generalizado que les otorga legitimidad.

Cabe indicar también que, el concepto de institucionalización de Luhmann se encuentra influenciado por los trabajos de Helmut Schelsky y Arnold Gehlen; posteriormente, Luhmann incorpora también las ideas de Talcott Parsons sobre la institucionalización en los sistemas de acción.

El institucionalismo tiene paralelamente dos tradiciones principales: La tradición ligada a Émile Durkheim, continuada por Bronislaw Malinowski y una tradición derivada de las ideas de Max Weber.

Adicionalmente, hay otras líneas de desarrollo del institucionalismo, como los trabajos sobre acción racional de James Coleman, y la tradición fenomenológica representada por Alfred Schutz, Peter Berger, Thomas Luckmann y Erwin Goffman; de esta última tradición fenomenológica surge el neo-institucionalismo de John Meyer en los años setenta.

Así pues, se puede señalar que, la institucionalización de una rama del derecho se refiere al proceso mediante el cual dicha área del derecho se consolida como un campo de estudio y práctica autónomo, con un conjunto de principios, normas, instituciones y procedimientos propios, dentro del ordenamiento jurídico.

Algunos ejemplos de ramas del derecho que han experimentado un proceso de institucionalización incluyen:

- Derecho Informático o Derecho de las Tecnologías de la Información: Reconocimiento de derechos como la protección de datos personales y la privacidad en el entorno digital; aprobación de leyes específicas sobre delitos informáticos, comercio electrónico, firma digital, entre otros; establecimiento de organismos reguladores y de control en el ámbito de las tecnologías de la información y desarrollo de tribunales y mecanismos especializados en la resolución de conflictos relacionados con las TIC.
- Derecho del Consumidor: Consagración de los derechos de los consumidores en la Constitución y leyes especiales; creación de agencias y organismos estatales encargados de la protección y promoción de los derechos del consumidor; consolidación de la jurisprudencia y de la doctrina jurídica en torno a los principios y normas del derecho del consumidor; establecimiento de procedimientos y mecanismos especializados para la resolución de conflictos entre consumidores y proveedores.

En todos estos ejemplos, el proceso de institucionalización implica el reconocimiento, la consolidación y la articulación de la rama del derecho como un campo autónomo y especializado, con un conjunto de principios, normas, instituciones y procedimientos propios, plenamente integrado en el ordenamiento jurídico.

1.6.2. Deporte

El deporte, como práctica universal y profundamente enraizada en la cultura y la vida de las sociedades humanas, ha sido objeto legítimo de análisis para las ciencias sociales desde la segunda mitad del siglo XIX. Algunos de los pioneros en este campo fueron:

- a) Herbert Spencer, quien se interesó en la educación física.
- b) Georg Simmel y Max Weber, quienes comenzaron a elaborar análisis sociológicos del deporte.
- c) La antropología, que se interesaba por las funciones socioculturales de los juegos en las sociedades "primitivas".

Sin embargo, estos estudios iniciales continuaron siendo dispersos; la institucionalización y regulación del deporte no se vieron acompañadas de una institucionalización similar en las ciencias sociales del deporte; solo en 1938 se publicó "Homo ludens" de Johan Huizinga, reconocida como la primera obra que busca organizar y sistematizar el análisis sociológico del deporte.

Así pues, existen diversas aproximaciones teóricas al término deporte, algunas más pragmáticas al considerar su polisemia semántica (Diazgranados & Garzón, 2016) o, por su parte, se destaca la definición de García (1990), quien concibe el deporte como "una actividad física e intelectual, humana, de naturaleza competitiva y gobernada por reglas institucionalizadas" (p. 31); de esta forma, el deporte se configura como una actividad competitiva, reglada y de carácter institucional.

Por su parte, la definición de Castejón (2001) agrega más características que abarcan a cualquier disciplina deportiva, definiéndolo como una "actividad física donde la persona elabora y manifiesta un conjunto de movimientos o un control voluntario de los movimientos, aprovechando sus características individuales y/o en cooperación con otro/s,

de manera que pueda competir consigo mismo, con el medio o contra otro/s tratando de superar sus propios límites, asumiendo que existen unas normas que deben respetarse en todo momento y que también, en determinadas circunstancias, puede valerse de algún tipo de material para practicarlo" (p. 17).

Desde el ordenamiento legal internacional, la Carta Europea del Deporte también ofrece una definición, entendiendo el deporte como "todo tipo de actividades físicas que, mediante una participación, organizada o de otro tipo, tengan por finalidad la expresión o la mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones de todos los niveles" (Diazgranados & Garzón, 2016, p. 15).

Además de las definiciones que caracterizan al deporte como una actividad competitiva, reglamentada e institucionalizada, también se reconoce su naturaleza como actividad física, desvinculada de su carácter competitivo. Esta perspectiva del deporte como actividad física se convierte en un elemento clave para los ámbitos educativo y cultural, abarcando también el aspecto personal e individual de la práctica deportiva. En otras palabras, más allá de las definiciones que destacan los elementos competitivos y organizacionales, existe una concepción que entiende el deporte como una actividad física con importantes repercusiones en la educación, la cultura y el desarrollo personal.

1.6.3. Derecho Deportivo

Diversos autores han propuesto definiciones del derecho deportivo desde diferentes enfoques. Algunas de las definiciones más destacadas son: La de Hans Lenk, el cual señala que, el derecho deportivo es el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad deportiva organizada, incluyendo tanto las relaciones entre los deportistas y las organizaciones deportivas, como las relaciones de éstas entre sí y con otras entidades. ²

² Marín Casanova, J. A. (2010). El flexible pensamiento multifacético de Hans Lenk. *Argumentos de razón técnica*, 13, 161-168.

Por su parte, el autor, Álvaro Muga Naredo, señala que, el derecho deportivo es la rama del ordenamiento jurídico que regula las actividades deportivas, los sujetos que intervienen en ellas y las relaciones que se establecen entre estos, con el fin de garantizar el normal desarrollo de la práctica deportiva".

Otra definición claramente acertada es la del autor español Sagardoy Bengoechea (1991), quien en su obra "El Contrato de Trabajo del Deportista Profesional", señala que: "El derecho deportivo es el conjunto de normas jurídicas, principios y valores que rigen la actividad deportiva, con el fin de regular las relaciones entre las personas físicas y jurídicas que participan en el fenómeno deportivo". (p.139-181)

Finalmente, nuestra posición es compartida respecto a la definición brindada por Millán Garrido (2015): "El derecho deportivo es el conjunto de normas e instituciones que regulan la práctica y organización del deporte, así como las relaciones jurídicas que se producen en torno a la actividad deportiva". (p.81)

Estos autores coinciden en definir el derecho deportivo como una rama especializada del ordenamiento jurídico que regula la actividad deportiva, sus organizaciones y actores, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la práctica deportiva. Las definiciones resaltan aspectos como la existencia de normas, principios y valores específicos, así como la regulación de las relaciones jurídicas en torno al fenómeno deportivo.

1.7. Diseño de Contrastación de Hipótesis

En esta investigación, se propone como objetivo general la creación de un Proyecto de Ley que reconozca el deporte como un derecho fundamental en el Perú. Para alcanzar esta meta, se seleccionarán conceptos generales y teorías, así como se incorporarán estudios previos sobre el derecho fundamental al deporte, lo cual permitirá realizar un análisis

integral que justifique nuestra propuesta de modificación constitucional, proporcionando así un sólido respaldo argumentativo a nuestra postura.

Con el marco teórico adecuado y un análisis de la legislación comparada, se podrá desarrollar un criterio fundamentado respecto a la justificación de la modificación constitucional, lo que facilitará la formulación de una propuesta que ofrezca una solución efectiva al problema planteado.

1.8. Población y Muestra

1.8.1. Población

La población de este proyecto de investigación podría estar conformada por:

- La normativa constitucional y legal vigente en Perú relacionada con el deporte.
- Jurisprudencia y precedentes judiciales relevantes sobre el tratamiento del deporte.
- Estudios, informes y propuestas de reforma constitucional y legal en materia deportiva.
- Abogados con conocimiento en derecho constitucional y derecho deportivo.
- Deportistas profesionales y amateurs de cualquier disciplina.

1.8.2. Muestra

Dependiendo de los objetivos específicos de la investigación, la muestra podría incluir:

- Una selección representativa de la normativa constitucional más relevante.
- Jurisprudencia que haya marcado precedentes importantes en el tratamiento del deporte.
- Una muestra de 20 jugadores profesionales de fútbol del Club Piratas FC de la Liga Peruana Profesional de Fútbol de Perú, 10 deportistas amateurs de diversas

disciplinas, 10 abogados en derecho constitucional y derecho administrativo y 10 personas que trabajan en clubes profesionales de fútbol.

- que puedan aportar sus perspectivas y análisis.

La selección de la población y muestra deberá estar debidamente justificada y alineada con los objetivos y alcance de la investigación. Asimismo, se deberán aplicar los criterios de inclusión y exclusión correspondientes para garantizar la representatividad y validez de los resultados.

1.9. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

1.9.1. Métodos

1.9.1.1. Métodos generales.

- **El método inductivo:** Es un enfoque fundamental en la investigación científica que se utiliza ampliamente en el ámbito jurídico para desarrollar teorías y principios a partir de estudios de casos específicos. Este método permite a los investigadores construir conocimiento jurídico a partir de la observación de prácticas legales, decisiones judiciales y comportamientos sociales. (Quinn,1990)
- **Método Sistemático jurídico:** Este método se centra en el análisis del derecho como un sistema interrelacionado, permitiendo entender cómo las normas y principios interactúan entre sí.

En esta investigación, se aplicaría de la siguiente manera : En primer lugar, se buscará la identificación del marco normativo, realizando una compilación y análisis de las leyes nacionales relevantes que regulan el derecho deportivo, incluyendo la ley del deporte, códigos de conducta y regulaciones de federaciones, entre otros; de igual forma, podrán incluirse tratados

internacionales y convenios, como el Código Mundial Antidopaje y la Convención sobre los Derechos del Niño, que mencionan el derecho al deporte; finalmente, se realizará una evaluación de las políticas públicas nacionales que promuevan el acceso al deporte y su alineación con los principios del derecho deportivo.

Por otro lado, cabe resaltar la importancia de analizar la jerarquía de normas y la relación entre diferentes ramas del derecho, esto permite identificar cómo las normas se complementan o pueden entrar en conflicto. (Tello, 2002)

- **Método exegético jurídico:** Este método será aplicado para la interpretación detallada de las normas relacionadas con el deporte y su aplicación, permitiendo un análisis profundo de las disposiciones legales deportivas. En esta investigación, se aplicaría de la siguiente manera: Como primera acción, se realizará un análisis profundo de las disposiciones legales que regulan el derecho deportivo, investigando no solo el texto, sino también el contexto histórico y social que llevó a su creación; asimismo, se pretende relacionar la interpretación de normas en diferentes países para identificar mejores prácticas y enfoques que podrían ser adoptados en el contexto nacional. (Alvarado, 2018)

1.9.2. Métodos específicos.

- **Método Cualitativo:** Este método, permite explorar en profundidad las percepciones, experiencias y opiniones de los actores involucrados en el derecho deportivo, como deportistas, entrenadores y juristas, lo cual permitirá obtener una teoría fundamentada, la cual, es un enfoque de investigación cualitativa que tiene como objetivo desarrollar teorías a partir de datos

empíricos; en lugar de probar hipótesis preexistentes, este método permite que las teorías emerjan de los datos recolectados. (Charmaz, 2006)

- **Método Comparativo:** El método comparativo es innovador, porque busca romper con las restricciones impuestas por las divisiones tradicionales entre métodos cualitativos y cuantitativos; su propuesta de un enfoque integrador permite a los investigadores, examinar similitudes y diferencias entre casos, ayudando a desarrollar teorías y explicaciones más robustas sobre fenómenos sociales. Así pues, la aplicación del método comparativo en la presente investigación, permitirá obtener un análisis profundo y matizado sobre la institucionalización del derecho deportivo y la autonomía del derecho al deporte. Este enfoque no solo facilitará la identificación de mejores prácticas, sino que también ofrecerá recomendaciones informadas que pueden ser útiles para legisladores, federaciones deportivas y otros actores interesados. (Ragin, 1987)

1.9.3. Técnicas.

En el desarrollo de nuestro tema, emplearemos diversas técnicas de recolección de información que nos permitirán establecer los parámetros necesarios para definir nuestra propuesta. De este modo, al concluir, podremos formular recomendaciones fundamentadas en los resultados obtenidos.

- ❖ Análisis de normativa.- Revisar y comparar las leyes y regulaciones que rigen el derecho deportivo en diferentes jurisdicciones a nivel latinoamericano, a fin de comprender cómo se ha institucionalizado el derecho deportivo en diversas legislaciones.
- ❖ Encuesta.- Se llevará a cabo una encuesta dirigida 50 personas, dentro de los

cuales, se encontrarán, veinte (20) futbolistas profesionales del club Piratas FC de la Liga Profesional del Fútbol de Perú ; a fin de obtener opiniones respecto a la institucionalización del derecho deportivo en distintos contextos; dichas respuestas servirán para identificar similitudes y diferencias en percepciones y experiencias.

- ❖ Observación. - Involucrarse en eventos deportivos, reuniones de federaciones o actividades de organizaciones deportivas para observar prácticas y dinámicas en el campo.

La combinación de estas técnicas te permitirá abordar la investigación desde múltiples ángulos, proporcionando un análisis integral sobre la necesidad de la institucionalización del derecho deportivo y la autonomía del derecho al deporte.

1.9.4. Instrumentos

Los instrumentos son los medios auxiliares para recoger y registrar los datos obtenidos a través de las técnicas.

- ❖ Matriz de Análisis Normativo.- Crear una tabla que incluya columnas para el nombre de la normativa, el país o jurisdicción, el objetivo de la norma, su fecha de promulgación y un breve resumen de su contenido; esto facilitará la comparación y el análisis de diferentes marcos legales.
- ❖ Plataforma de Encuestas en línea.- Utilizar la herramienta Google Forms, para crear y distribuir la encuesta, facilitando la recolección y el análisis de datos; cabe indicar que, este cuestionario estructurado incluirá preguntas cerradas (por ejemplo, opciones múltiples, escalas de Likert) y algunas preguntas abiertas, que aborden aspectos sobre la institucionalización del derecho deportivo y la autonomía del derecho al deporte.

- ❖ Diario de Campo.- Permitirá llevar un registro detallado de nuestras observaciones durante eventos deportivos, reuniones de federaciones o actividades relacionadas; incluyendo fechas, lugares, descripciones de lo observado y reflexiones personales sobre lo que se ha visto.
- ❖ Plantilla de Observación.- Elaborar una plantilla que contenga categorías específicas a observar (interacción entre deportistas y autoridades, cumplimiento de normas, toma de decisiones) y espacio para anotaciones.

1.10. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS

Al implementar metodologías de recolección de datos, como encuestas o el análisis de normativa, se realizará un estudio exhaustivo utilizando técnicas de estadística descriptiva. En este proceso, se considerarán aspectos clave como la frecuencia y el porcentaje simple. Posteriormente, se interpretarán los resultados en función del marco teórico previamente establecido. Para facilitar la comprensión de la información, se emplearán herramientas visuales, como tablas de restricciones y gráficos de barras.

Capítulo II

Diseño Teórico

2.1. Antecedentes de la Investigación

La presente investigación se relaciona con el primer antecedente, tomado de la tesis doctoral de Acosta Pérez (2019), titulada "Conflictos jurídicos en el deporte sudamericano, hacia la autonomía normativa y jurisdiccional". En esta tesis, se plantean dos problemáticas principales: La problemática de la autonomía de una rama del Derecho, en este caso del denominado Derecho Deportivo o "lex sportiva", considerada como el conjunto de normas jurídicas, privadas y públicas. Esta problemática es analizada desde dos perspectivas:

- La autonomía normativa, que es la capacidad de emitir normas jurídicas.
- La autonomía jurisdiccional, que es la posibilidad de juzgar la aplicación de dichas normas, sin interferencia relevante de otros ordenamientos o sistemas jurídicos.

El problema del pluralismo jurídico, el cual sostiene que el poder público no es la única fuente de formación de normas. Por el contrario, pueden coexistir distintas fuentes de elaboración de leyes, más o menos subordinadas a la autoridad oficial. Esto permite distinguir entre, el pluralismo moderado y el pluralismo "rígido" o "puro".

Es necesario citar también la tesis de Bruno Di Pietro (2015), titulada "La justificación, la obligatoriedad del Derecho Deportivo y la Justicia Deportiva en los ordenamientos italiano y español: una interpretación con Sergio Cotta y Bruno Romano". En esta tesis, el autor señala que, respecto a la problemática derivada del deporte, no existe nada matemáticamente calculable, ya que se trata de cuestiones

muy abiertas a las que es legítimo dar soluciones diferentes. Asimismo, el autor plantea la interrogante sobre si el Derecho Deportivo tiene la verdadera naturaleza de la ley o si, aunque se le denomina derecho, en realidad es otra cosa.

La conclusión a la que llega el autor es importante, puesto que el Derecho Deportivo, a través de la garantía material y procesal de los motivos de la igualdad ontológica y diferencia existencial en el contexto de la relación deportiva, es una verdadera ley en la medida en que sirve para permitir la "convivencia" en el ámbito deportivo. Esto dota de viabilidad a la investigación trazada, ya que cubre uno de los aspectos de la misma.

De igual forma, la tesis de Acero (2012), titulada "Los efectos jurídicos en el ámbito del derecho laboral respecto de los jugadores del fútbol profesional colombiano tras la entrada en vigencia de la Ley N. ° 181 de 1995 hasta el año 2012", plantea el siguiente problema de investigación: ¿Qué efectos jurídicos ha producido la entrada en vigencia de la Ley 181 de 1995 (Ley del Deporte) hasta el año 2012 respecto de los jugadores del fútbol profesional colombiano en el marco del derecho laboral individual, colectivo y de la seguridad social?

El objetivo general de dicha tesis es establecer los efectos jurídicos que ha producido la Ley N. ° 181 de 1995 hasta el año 2012 con relación a los jugadores del fútbol profesional colombiano en el ámbito del derecho laboral individual, colectivo y de la seguridad social.

En cuanto a la hipótesis, el autor indica que los efectos jurídicos de la Ley N. ° 181 de 1995 hasta el 2012 han implicado un reconocimiento de garantías y derechos que antes no existían para los jugadores de fútbol profesional colombiano. Esto incluye aspectos como los parámetros para la organización del deporte asociado y la

inspección, control y vigilancia de los clubes de deportistas profesionales, lo cual ha tenido incidencia en el pago justo y oportuno del salario a los jugadores de este deporte.

Asimismo, la tesis de Mayra Alejandra Gamarra Vergara (2016), titulada "Los beneficios sociales otorgados por un club deportivo a los futbolistas profesionales sin estar expresamente previstos en los contratos registrados ante la autoridad administrativa y su implicancia con el principio de irrenunciabilidad de derechos en el Perú", realiza una exhaustiva investigación sobre los beneficios sociales que le corresponden a un futbolista profesional.

La autora estudia la Ley Especial con la que cuentan estos deportistas y el procedimiento administrativo para registrar sus contratos de servicios profesionales ante las instancias correspondientes. Además, analiza los principios fundamentales del Derecho que se aplican a la prestación laboral de los futbolistas profesionales. De esta manera, Gamarra Vergara (2016) determina que existe un marco normativo deficiente, no solo para el fútbol profesional, sino también para el deporte en general a nivel nacional. Este hallazgo brinda sustento a la investigación actual, la cual busca proponer una modificatoria de la normativa vinculada al deporte.

Finalmente, en la tesis de pregrado de Hindley Einstein Diaz Guevara (2019), titulada "Régimen legal de la contratación de los menores de edad como jugadores profesionales de fútbol en el Perú, bajo la esfera del reglamento y estatuto de la FIFA", el autor concluye que: Nuestro país posee una gran legislación y a su vez ha suscrito diversos tratados internacionales con la finalidad de proteger al menor de edad como sujeto de derecho. De esta manera, el Estado ha incorporado a la Constitución y a la doctrina jurisprudencial el reconocimiento y la protección especial de los menores en

el ámbito de las relaciones jurídicas deportivas, como es el caso de la contratación de jugadores menores de edad profesionales.

Sin embargo, tal como se desarrollará a lo largo de la presente investigación, esta protección especial y reconocimiento de los menores como sujetos de derechos en el ámbito deportivo no se podrá concretar sin antes realizar una modificatoria que subsane las deficiencias del marco normativo existente en el Perú.

2.2. Bases Teóricas

2.2.1. *Derecho Deportivo*

En este capítulo nos adentraremos en todo lo concerniente al Derecho Deportivo; iniciaremos con la historia de la palabra Deporte, los antecedentes de esta rama y como ha ido evolucionando hasta la actualidad, como está receptado el Derecho al Deporte en nuestra Constitución Nacional, la estrecha relación que tiene con los Derechos Humanos, para finalizar, se realizará un análisis relacionado a la autonomía de esta materia, seguidamente se definirán los sujetos que están involucrados en el ámbito deportivo y las fuentes de esta rama del Derecho.

La institución del deporte trasciende las fronteras nacionales, exigiendo la creación de un derecho universal fundamentado en principios, medios y objetivos que son igualmente aplicables en todo el mundo, y regulado por normativas de carácter internacional. Este enfoque confiere al derecho deportivo una significancia que, en determinados aspectos, puede superar la de muchas otras ramas del derecho. (Perry,2002, pág.20)

Así pues, la disciplina deportiva se concibe como una estructura piramidal que surge de la combinación de individuos y se eleva hacia un liderazgo universal y exclusivo; esto revela la amplitud y profundidad del derecho, que exige la instauración

de procesos específicos para mantener la esencia de la organización y la eficacia operativa. Desde otra perspectiva, se puede identificar el desarrollo de un derecho deportivo organizado, que incluye un marco legal estatal que regula la actividad deportiva, así como un derecho social deportivo formado por normativas creadas y aplicadas por las propias entidades deportivas. (Montoro, 1997, pág. 553)

La idea principal de este capítulo es facilitar al lector una noción básica del deporte y su estrecha vinculación al derecho contemporáneo; para así, lograr conseguir una mejor interpretación y entendimiento de la parte restante del trabajo.

2.2.1.1. Aproximación conceptual del deporte.

Pretender realizar un consenso respecto al concepto del deporte es infructuoso, ya que el fenómeno deportivo se transforma constantemente, en cuanto a sus manifestaciones y significados; desde distintas perspectivas se han elaborado diferentes construcciones teóricas que tratan de explicar la naturaleza y función social del deporte.

La educación física y el deporte son consideradas “dimensiones esenciales de la cultura y la educación que deben desarrollar las aptitudes, la voluntad y el dominio de sí mismo de cada ser humano y favorecer su plena integración en la sociedad”, la continuidad de la actividad física y de la práctica deportiva durante toda la vida, debe ser promovida por el Estado por medio de una “educación global, permanente y democratizada”. (UNESCO, 1978)

El informe de la Organización de las Naciones Unidas titulado “Deporte para el Desarrollo y la paz. Hacia el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, define al deporte como cualquier modalidad de actividad física que contribuya al buen estado físico, al bienestar mental y a la interacción social; entre

esas modalidades de actividad física se encuentran el juego, la recreación, el deporte informal (organizado o competitivo) y los juegos o deportes autóctonos

Según el diccionario de la Real Academia Española (1983), deporte significa: “Actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. Recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre.”

Asimismo, el uso del término "deporte", cual proviene de un poema en francés del autor Carl Diem (1966); la traducción de este poema expresa que “los franceses lo practican por entretenimiento, por diversión y para fortalecer el cuerpo”; cabe indicar que, la palabra “diversión” en francés se escribe “desporter”, de la cual se deriva el término “deporte” en español y, al acortar una sílaba, “sport” en inglés.

Robles (2009) señala que, en la actualidad, el concepto de Deporte se ha dividido en varias categorías que hacen referencia de manera específica a diferentes ámbitos; entre estas categorías se encuentran el deporte escolar, recreativo, competitivo, educativo, de iniciación, adaptado y, por último, el llamado “Deporte para todos”. Es importante destacar que esta última denominación surgió como un eslogan y como una reivindicación del derecho a la realización de actividad física y deporte³, dado que, hace algunos años, no todos tenían acceso a la práctica deportiva.

2.2.1.2. Recapitulación histórica del deporte.

Desde sus comienzos, el deporte ha estado profundamente ligado al contexto sociocultural de las comunidades, a través de este, las personas han podido crear

³ Sánchez Bañuelos, F. (2000). Análisis del deporte en edad escolar y una alternativa para el futuro. In Actas del I Congreso Nacional de Deporte en edad escolar (pp. 63-79)

vínculos significativos, integrándose en eventos donde la habilidad, la inteligencia y la destreza determinan el éxito y la figura del ganador. Aquellos que no lograban el triunfo esperaban las siguientes competiciones para demostrar sus habilidades y alcanzar la victoria deseada; todo lo relacionado con el deporte le ha permitido convertirse en uno de los instrumentos más efectivos para el desarrollo humano y la unión de las naciones, siendo en la actualidad un importante elemento de identidad cultural y cohesión social.

Por otro lado, El juego, es una actividad natural, podemos apreciarlo en el reino animal, todos los animales compiten, sin embargo, el ser humano es la única especie que practica deporte, y lo hace para demostrar sus capacidades; siguiendo esta premisa, el filósofo holandés John Huizinga (1972), afirma: “El juego es más viejo que la cultura, pues por mucho que estrechemos el concepto de éste, presupone siempre una sociedad humana y los animales han esperado a que el hombre les enseñe a jugar” (p.11)

Como fenómeno histórico, el deporte ha jugado un papel crucial en el desarrollo de la cultura humana⁴, evolucionando en paralelo a esta y manteniendo una conexión estrecha con la realidad social; algunos deportes, en particular el fútbol, no solo congregan a grandes multitudes, sino que también generan emociones y acciones que pueden tener diversas consecuencias. Por esta razón, la conducta de deportistas y aficionados ha sido objeto de numerosos estudios en las áreas de sociología, psicología y antropología; estos estudios han dejado en claro la importancia del

⁴ Blanco, E., Barranco, R., Bermejo, J. (2002). *Las Leyes del Deporte de la Democracia: Bases para una Ley Siglo XXI*. Editorial Dykinson SL (p.21)

deporte para la humanidad, evidenciando que va más allá de ser una mera actividad física; es, en realidad, un estilo de vida en constante transformación.

Acerca de los orígenes del deporte, se toma como punto de partida a la antigua Grecia y Roma⁵, pues es allí donde se dio nacimiento a la práctica de los Juegos Olímpicos. En un principio, el deporte colectivo fue el más utilizado; en las civilizaciones asiáticas y americanas se practicaban juegos grupales, la individualidad no era una característica del deporte en esa época, pues se creía que, a través de estos, se lograría la integración de las personas, desarrollar el trabajo en equipo y generar un mayor sentido de responsabilidad colectiva; todo ello significaba que el deporte tendría ya una relación con la magia y la religión de las culturas antiguas, ya que en muchas de estas, los deportes practicados tenían como consecuencias la supervivencia del más hábil, es decir, el dominio del más fuerte sobre el más débil, transformando al deporte, no sólo en una lucha entre hombres, sino también en parte del folklore de los pueblos, al igual que su música, canciones, bailes, cuentos, entre otros.

El deporte ha superado todo tipo de transformación, llegando así a franquear las fronteras de la mera recreación; el deporte es una actividad profesional en la que la inversión económica marca su norte⁶. En efecto, el deporte es una enorme empresa, un negocio millonario o una de las industrias de mayor envergadura a nivel internacional, debido a la gran cantidad de actividades que convergen en este, como las profesiones tradicionales, unos simples oficios hasta llegar a la ciencia y tecnología,

⁵ Los primeros Juegos Olímpicos, tal y como los conocemos en la actualidad, tuvieron lugar en Grecia en el año 1892, en la pequeña ciudad de Olimpia. Se organizaban, como ahora, cada cuatro años, y en ellos se desarrollaban todas las prácticas deportivas conocidas hasta ese momento.

⁶ Acuña, N. (2005). *“El fútbol, hoy más que un deporte, un negocio”*. Derecho, Banca y Sociedad. Lima, Perú (p.23-26)

es esta la que ha ganado un mayor campo de desarrollo y la que ha generado un mayor número de puestos de trabajo relacionados al deporte.

Por ello, no resultaría errado afirmar que el deporte constituye, indefectiblemente, unos de los hechos más importantes de la sociedad contemporánea, formando parte esencial de la vida y la cultura, como en las sociedades antiguas, convirtiéndose en un estilo de vida para muchos y a la que el derecho viene cada vez prestándole mayor atención para establecer un correcto ordenamiento legal.

2.2.1.3. Definiciones del Derecho Deportivo.

El derecho deportivo enfoca los distintos aspectos que presenta el deporte en sus diversas manifestaciones, ya que como institución genera entre otras cosas, un derecho disciplinario, un derecho consuetudinario y un derecho estatutario⁷; sin embargo, este surgimiento de obligaciones legales no puede sobrepasar la esencia misma de dicha actividad, no dejando de lado el aporte que brindan disciplinas tales como la economía del deporte, la sociología del deporte, la antropología del deporte, la psicología del deporte, la medicina del deporte, entre otras, que estas realizan al deporte y lo convierten en un fenómeno de la vida social.⁸

El derecho deportivo es la disciplina que se encarga de abordar el fenómeno deportivo desde las distintas vertientes del derecho, y a la vez posibilita generar intercambios interdisciplinarios que permiten analizar con mayor amplitud y riqueza científica todas las manifestaciones del objeto de estudio: el deporte.⁹

⁷ Loupe, J. (1930). *Les Sports et le droit*. París, Editorial Librairie Dalloz (p. 31).

⁸ Clerc, C. (2012) Derecho del Deporte o Derecho Deportivo. Su autonomía. *Revista de Derecho de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile*, (2), 17–34

⁹ Gil Domínguez, A. (2001). El derecho al deporte y el derecho del deporte. *Cuadernos de Derecho Deportivo*, (1), 34.

Para la presente investigación, es preciso recoger las definiciones expuestas por diversos autores a nivel latinoamericano; en Argentina, el maestro Daniel Crespo(2006), sostiene que el ordenamiento jurídico deportivo constituye un sistema normativo especial donde confluyen normas de distinto rango y origen, algunas provenientes del derecho común y otras eminentemente deportivas; la autonomía científica y didáctica de la materia jurídico deportiva y la necesidad de su estudio diferenciado y especializado, también refleja, por ejemplo, los intentos de reforma de la estructura jurídica de los clubes de fútbol de la Argentina” (p.19)

Por otro lado, en Brasil, el autor Valed Perry (2002) sostiene que: “El derecho deportivo es un complejo de normas y reglas que rigen el deporte en el mundo entero y cuya inobservancia puede acarrear la marginalización total de una asociación del concierto mundial deportivo”. (p.19)

Así, las normas se basan en una tradición consuetudinaria que puede abordarse desde un enfoque técnico, alineándose con un empirismo característico de cada práctica y estableciendo reglas específicas; estas normas son cruciales para la organización de eventos y sus respectivas disputas, y se desarrollan de manera gradual, mayormente documentadas en textos de referencia. Con el tiempo, se adoptan y respetan, convirtiéndose en principios que regulan cada modalidad de competencia deportiva.

Esto se encuentra intrínsecamente relacionado con los problemas y circunstancias que surgen, así como con los cuestionamientos que emergen de los espectáculos en los que participan los competidores, tanto a nivel individual como colectivo, en disciplinas como el ajedrez, el tenis, el fútbol o el voleibol, entre otros.

En síntesis, bajo nuestro análisis, el derecho deportivo puede ser considerado como un conjunto de normas que regulan el deporte en el planeta, cuyas reglas son obligatorias, con la posibilidad que entidades insurgentes que han incumplido esas reglas puedan ser desafiadas y marginadas del ámbito deportivo mundial, y que corresponda la aplicación de una sanción como reprimenda mayor y que se lo coloque fuera del ámbito de la justicia.

En el mismo sentido, no debe perderse de vista la necesaria referencia al ordenamiento federativo y reglamentario internacional como marco de la incuestionable globalización del derecho deportivo, y la incesante generación de negocios jurídicos que se desarrolló en ese contexto.¹⁰

En la actualidad existen por lo menos diez categorías distintas de prácticas deportivas:

- a) Los deportes olímpicos, como el básquetbol, la natación, el atletismo.
- b) Los deportes cuyas principales competencias no son los Juegos Olímpicos: el béisbol, el fútbol, el fútbol americano, el tenis.
- c) Los deportes de la naturaleza: caminatas, corridas de orientación, vuelo libre.
- d) Los deportes de aventura donde el riesgo es el componente imprescindible: montañismo, bicicross, motociclismo.
- e) Los deportes derivados de las artes marciales: yudo, karate.
- f) Los deportes interactivos o intelectuales: ajedrez, billar, aeromodelismo.
- g) Los deportes de identidad cultural: capoeira, sumo, críquet.

¹⁰ Frega Navia, R. (2005). Presentación. *Cuadernos de Derecho Deportivo*, (2), 13.

- h) Los deportes de expresión corporal: danza deportiva, patinaje, patinaje artístico, aeróbica.
- i) Los deportes derivados de otros deportes: futsal, paddle.

En nuestra opinión, el Derecho Deportivo es una rama del Derecho compuesta por el conjunto de normas que regulan la actividad deportiva en su integridad que tiende a proteger a la persona en dichas prácticas teniendo en mira una finalidad social.

2.2.1.4. Denominaciones.

Para referirnos a esta rama del derecho, es importante destacar que se han utilizado diversas denominaciones, sin embargo, el término "Derecho Deportivo" como tal, fue empleado por primera vez en 1933 por el autor italiano Cesarini Sforza en su monografía sobre la revisión judicial de ciertas sanciones disciplinarias del Jockey Club de Italia. En esta obra, Sforza invocaba el institucionalismo de Santi Romano, argumentando que cada organización o institución se identifica con un ordenamiento jurídico autónomo. En consecuencia, la comunidad deportiva genera su propio derecho y establece relaciones jurídicas basadas en principios y formas distintos a los del derecho estatal, los cuales son, además, autosuficientes.

Ese año, marcó un hito para las denominaciones de esta área del derecho, empleando distintas expresiones, tales como: Derecho Deportivo, Derecho del Deporte, legislación deportiva y demás; en Brasil por ejemplo, se le ha denominado como “Direito do Desporto”, “Sports Law” en los países del Common Law, “Sportrecht” en Alemania, “Droit du Sport” en Francia, “Diritto Sportivo” en Italia; sin embargo, en nuestro trabajo utilizaremos indistintamente las expresiones Derecho del Deporte o Derecho Deportivo como equivalentes.

2.2.1.5. Ámbito.

La legislación se encarga de regular la disciplina deportiva en relación con los derechos y obligaciones de todos los actores involucrados, incluidos deportistas, espectadores y organizaciones; asimismo, establece normas sobre la infracción de las reglas del juego y la responsabilidad obligatoria por los daños causados durante la práctica deportiva, entre otros aspectos. Estas cuestiones son abordadas de manera específica por el derecho deportivo, lo que confiere a esta rama un contenido rico y diversas áreas de desarrollo profesional. Su ámbito se centra principalmente en el asesoramiento a instituciones deportivas, deportistas profesionales, entrenadores y agentes de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), así como en la gestión de contratos de patrocinio, transferencias de jugadores, negociación de contratos laborales en el ámbito deportivo, explotación del derecho a la imagen y la defensa de los derechos de los deportistas menores de edad, entre otras actividades.

Es por ello que, podemos señalar que, en principio al hablar de Derecho Deportivo, debemos distinguir al Derecho Objetivo Deportivo y al Derecho Deportivo Subjetivo; el primero es la norma o conjunto de normas que dan origen al segundo, o mejor dicho, el Derecho Deportivo Objetivo, es la norma o conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta humana en relación con la organización y práctica del deporte, así como los sujetos que se vinculan a dicha actividad y que en ello, dan origen y fijan el alcance de las relaciones jurídico-deportivas que surgen entre las personas en sociedad; mientras que por su parte, el Derecho Deportivo Subjetivo Deportivo, es la facultad poder o autorización que deriva de la norma o conjunto de normas jurídicas deportivas, que tiene una persona para actuar de determinada manera o exigir a otra persona(individual o colectiva, pública o privada)un específico

comportamiento en relación con la organización o práctica del deporte y sus diversas manifestaciones.

2.2.1.6. Características.

Como bien lo expresa Gamero (2012, p.57), “las normas que regulan el deporte no pueden analizarse como bloque monolítico orientado a regular una sola manifestación de la actividad deportiva, sino que se integran en una gran variedad de regulaciones o grupos normativos que persiguen fines distintos y se articulan por tanto mediante normas diferentes”.

En este contexto, al abordar el derecho deportivo, es fundamental reconocer la complejidad de las normas jurídicas que regulan la actividad deportiva en diferentes ámbitos del derecho. Cada hecho o acto jurídico relacionado con el deporte estará sujeto a una regulación específica y se aplicará de manera particular según la rama del derecho pertinente. Así, coexistirán normas de carácter público y privado que rigen la actividad deportiva, lo que convierte este tema en un campo amplio y complejo que demanda un análisis profundo desde la perspectiva jurídica.

Cuando hablamos de las características del derecho deportivo, podemos decir que se trata de un derecho: especial, nacional e internacional, multidisciplinario, interdisciplinario y dinámico. En primer lugar, el Derecho Deportivo es especial debido a que, como ya se indicaba líneas arriba, su objeto de estudio es una materia específica: la conducta del hombre con relación al deporte y, como consecuencia de ello, todo lo que se le vincula, es decir, su entorno. Asimismo, el Derecho Deportivo es nacional, pues se conforma por normas internas de cada país y también es internacional, toda vez que se conforma por normas internacionales, primordialmente contenidas en reglamentos, estatutos y códigos de las

organizaciones internacionales (como el Comité Olímpico Internacional o las Federaciones Internacionales), y también en convenciones internacionales como la que corresponde al dopaje en el deporte.

De igual forma, se dice que el Derecho Deportivo es multidisciplinario, debido a que sus principales temas también pueden ser analizados desde diferentes áreas del conocimiento humano, por ejemplo, a la luz de la sociología, de la ciencia de la organización (administración), de las ciencias de la comunicación, de las ciencias biológicas, de las ciencias médicas, de la historia, etc. Es también, el Derecho Deportivo es interdisciplinario, pues para comprender en profundidad sus normas, éstas deben ser relacionadas con otras áreas del conocimiento, como las arriba señaladas, es decir, para entender cabalmente el contenido de las normas, dichas ciencias son un referente necesario.

Por último, el Derecho Deportivo es dinámico, debido a los diversos cambios que presenta día a día la materia deportiva, lo que en ocasiones tiene que ser reconocido por el propio derecho. Por ejemplo, hace varios años atrás no se hablaba de dopaje en el deporte y ante dicha situación, el derecho se tuvo que pronunciar.

De esta manera, cualquiera sea la perspectiva desde la que se analice el derecho deportivo, se aplicarán de manera particular distintos regímenes jurídicos a las relaciones que surjan con ocasión del deporte: cuando se trate de entidades de naturaleza pública les serán aplicables las normas de derecho administrativo; si se trata de las obligaciones que surgen producto de las ganancias obtenidas, serán aplicables las normas en materia de derecho tributario; si se busca establecer el régimen disciplinario y de responsabilidad por los daños que se puedan presentar con ocasión del deporte, se aplicará el derecho penal o de responsabilidad civil según sea

el caso. Sin embargo, y para efectos del presente texto, nos centraremos en las relaciones jurídicas que se presentan entre las entidades deportivas (cualquiera sea su denominación) y los deportistas, las cuales, si surgen dentro de la ejecución del deporte profesional, estarán regidas por el derecho laboral.

2.2.1.7. Fuentes.

Según Guillermo Borda, la expresión “fuentes del derecho” se interpreta en tres sentidos distintos. En un sentido filosófico, se refiere a la esencia suprema de la idea del Derecho; en este contexto, el preámbulo de la Constitución Peruana invoca la protección de Dios como la fuente de toda razón y justicia. Desde una perspectiva histórica, las fuentes del derecho aluden a los antecedentes, tanto nacionales como extranjeros, que han influido en la formación de un orden jurídico específico; así, se sostiene que las fuentes de nuestro Código Civil incluyen el derecho romano, la legislación española y el Código Napoleón, entre otros. Finalmente, el término se aplica a las normas o preceptos del Derecho positivo, de los cuales emergen derechos y obligaciones para las personas.

De esta forma, se llaman fuentes del derecho a los modos como se manifiesta el derecho; los medios a través de los cuales se exterioriza, o se presenta revelando su contenido y sus mandatos. (Cifuentes, 1988, p.4) Las fuentes se clasifican en formales y materiales, las formales tienen obligatoriedad debido a su fuerza extrínseca, relacionada con el órgano que las creó, es decir, cuentan con autoridad por sí mismas, dejando de lado la validez justa o racional de su contenido.

Las fuentes materiales carecen de autoridad por sí mismas, pero al reflejar la veracidad de sus principios y la justicia o conveniencia de sus soluciones, logran convencer y llevar a los órganos con poder a adoptarlas para su aplicación; estas

fuentes son indirectas, ya que no tienen valor propio, sino que es su mérito intrínseco lo que impulsa a los órganos a otorgarles eficacia y autoridad.

Entre las fuentes clásicas se encuentran la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina; hoy en día, también se reconoce como fuentes, los Principios Generales del Derecho, la equidad, los convenios colectivos de trabajo, entre otros.

Por su parte, las fuentes formales incluyen: la ley en sentido amplio o material, la costumbre conforme a la ley (*secundum legem*), la costumbre en ausencia de ley (*praeter legem*), y la jurisprudencia en plenarios o de casación. En cambio, las fuentes materiales comprenden: la doctrina de los autores, la jurisprudencia no vinculante, y la costumbre contraria a la ley

En materia de Derecho Deportivo quedan comprendidos dentro del concepto de fuente:

- Las Constituciones Políticas.
- Las leyes emanadas del Poder Legislativo o leyes *strictu sensu*.
- Los reglamentos emanados del Poder Ejecutivo con el fin de regular en detalle las leyes.
- Las ordenanzas municipales.
- La costumbre.
- Los Principios Generales del Derecho
- La jurisprudencia.
- La doctrina.

A continuación, analizaremos las fuentes del Derecho Deportivo más importantes:

- **La ley.** - En el ámbito del Derecho Deportivo, es innegable que la ley constituye la principal fuente formal, ya que, ante la ausencia de un marco jurídico deportivo integral, es necesario recurrir a las leyes generales para resolver los casos que se presentan. Las leyes específicas del Derecho Deportivo, por su parte, son una fuente clave a la que se debe acudir prioritariamente para la resolución de conflictos que surjan en el ámbito deportivo.

En el Perú, existe un conjunto normativo que regula el derecho deportivo nacional, este marco incluye tanto normas generales, que establecen los principios fundamentales del derecho deportivo, como normas especiales que regulan de manera específica las relaciones deportivas. En términos formales, el deporte es una materia que trasciende los regímenes políticos, estando regulado tanto en contextos autocráticos como democrático.

Por tanto, se puede señalar que la ley, como fuente del derecho deportivo, se divide en dos ámbitos: uno correspondiente a la normativa estatal y otro a la normativa privada; la primera proviene del Estado, mientras que la segunda emana de las asociaciones deportivas privadas. Ambas son relevantes y se complementan de manera evidente, respetando el orden jerárquico de las normas; aunque cada disciplina deportiva cuente con sus propios estatutos o reglamentos, estos deben estar en consonancia con la legislación vigente y con la necesidad de coherencia organizativa que exige el propio.

- **Los reglamentos.** - Los reglamentos emitidos por federaciones y asociaciones deportivas, tanto nacionales como internacionales, constituyen una fuente importante de la materia, ya que ellos no se limitan a las normas

de la competencia deportiva, sino que también legislan cuestiones que se refieren al ámbito laboral o comercial del deporte.

- **La costumbre.** - Existen tres tipos de costumbre: Praeter Legem , que se aplica en situaciones no previstas por la ley, con el fin de llenar vacíos legales; Contra Legem , cuando la costumbre supera la norma escrita y llega a derogarla por falta de uso; y Secundum Legem , donde una norma consuetudinaria obtiene su vigencia a partir de una disposición legal, encontrando su solución en la costumbre.

Independientemente de si la práctica deportiva es competitiva o no, se realiza bajo reglas aceptadas globalmente, las cuales son suficientes tanto para la práctica privada como para las competiciones organizadas por federaciones nacionales. (Kresalja, 2006, p.17) Estas reglas, adquiridas con el tiempo, definen ganadores y perdedores, y el carácter consuetudinario de dichas normas es uno de los aspectos más relevantes en el marco normativo del deporte.

La costumbre sigue siendo una fuente fundamental de derecho en las relaciones deportivas, ya que sus usos y prácticas deben tomarse en cuenta tanto para premiar a los ganadores como para resolver conflictos de intereses. Esto cobra aún más relevancia en un ámbito jurídico en constante desarrollo, que debe enriquecerse con las experiencias y la práctica diaria de sus actores.

En palabras del maestro Joao Lyra(1952): “La costumbre en el derecho deportivo es un derecho creado por las masas, a diferencia de la ley, que es un derecho creado por las elites; jugando así un papel importante en razón

que se encuentra en proceso de normalización. En este orden de ideas a falta de norma legal expresa puede aceptarse la aplicación de la costumbre, como ha venido sucediendo en materia deportiva. Los profesionales del derecho, magistrados, árbitros tienen que descender al submundo de las costumbres populares y de la convivencia de los pueblos, cuya capacidad creadora es uno de los más bellos ejemplos”. (pp. 14, 15, 28 y 29)

- **Los Principios Generales del Derecho.** - El deporte, como institución, posibilita la creación de normativas específicas para cada una de sus disciplinas, lo que permite un comportamiento que se ajusta a los estándares convencionales. Sin embargo, la universalidad es lo que fundamenta la esencia de cada marco normativo, ya que el deporte trasciende las fronteras de los países. En efecto, el derecho deportivo se guía por principios internacionales codificados y por principios generales que han evolucionado a lo largo del tiempo. Estos principios, tanto específicos como generales, abarcan un ámbito que es complejo, dinámico y variable, caracterizándose por la creciente profesionalización de la actividad deportiva en todas sus disciplinas.
- **La jurisprudencia.** - Las resoluciones judiciales que provienen de diferentes tribunales nacionales, de otros países, de los Estados de la Unión Europea o de organismos jurisdiccionales federativos tienen una importancia crucial en esta etapa del Derecho Deportivo; esto se debe a que el desarrollo de esta rama está estrechamente relacionado con la función de dichos tribunales, que son responsables de resolver los conflictos que surgen entre los diversos actores. Por consiguiente, la jurisprudencia se considera también una fuente del Derecho Deportivo.

- **La doctrina.-** Perú presenta una normativa inadecuada en el ámbito de la teoría deportiva, en contraste con países como Colombia, Brasil o España; esta situación limita de manera evidente la consolidación de principios y la relevancia de criterios jurisprudenciales, por esta razón, la doctrina aplicada a la práctica y sus consecuencias en el ámbito deportivo es generalmente la que se deriva por analogía de otros derechos afines; sin embargo, dada la especificidad de este derecho, las soluciones que se ofrecen no siempre son las más adecuadas.

Aunque las opiniones doctrinales no son vinculantes, las obras de los autores suelen ser referenciadas en las sentencias y, en ocasiones, en los fundamentos de la legislación misma. Por ello, en los últimos años, el Derecho del Deporte ha sido enriquecido por obras especializadas y artículos sobre temas específicos de gran relevancia para los profesionales del derecho.

2.2.1.8. Autonomía.

El derecho deportivo se caracteriza por ser un ámbito jurídico voluntario y autónomo, dado que tanto aficionados como profesionales eligen someterse y adherirse a las reglas del deporte que practican, así como a las normas que ellos mismos crean dentro de sus respectivas organizaciones. (Lyra, 1952, p.14,15,28 y 29)

Como bien sabemos, la palabra autonomía deriva del vocablo originario de la lengua griega: *autos*, que significa igual a sí mismo, y *nomos*, que significa ley. Se puede interpretar como una independencia, un acto de gobernar por sus propias reglas; el término autonomía de por sí, es el término por excelencia para definir la naturaleza de esta rama del derecho; la autonomía deportiva está referida principalmente a una independencia administrativa, es decir, a la facultad reconocida

por el Estado declarando su obligatoriedad y para regirse por las propias leyes y particularidades referidas a su actividad.

Sobre la reconocida autonomía aplicable al Derecho Deportivo, diversos autores advierten que, dicha “autonomía” no es más que una aplicación de una pluralidad de normas de derecho constitucional, administrativo, penal, civil, comercial, laboral, mismas que se adaptan a la peculiaridad del fenómeno deportivo; esta peculiaridad, respecto a la vinculación de las normas de carácter deportivo con otras ramas del derecho, requiere de un estudio particular, el cual se denomina, Derecho del Deporte, al cual nos referiremos brevemente en capítulos posteriores.

A criterio personal, consideramos que el Derecho Deportivo orienta su autonomía a las relaciones sociales necesarias en un ordenamiento jurídico hecho a base de normas claras y precisas. Así pues, es importante la posición adoptada por Gabriel Real Ferrer (1991), quien considera que: “Para lograr predicar la autonomía de una disciplina jurídica, deben concurrir las siguientes circunstancias: un ámbito de la realidad bien acotado (autonomía objetiva), un conjunto de principios propios (autonomía conceptual o dogmática) y la existencia de un conjunto de normas y relaciones homogéneas”. (p.207)

Un ámbito de la realidad bien delimitado implica la existencia de un conjunto de relaciones sociales que, por su naturaleza y características específicas, requieren un ordenamiento jurídico propio para alcanzar un determinado nivel de desarrollo; el deporte, como fenómeno social, ha dado lugar a este ordenamiento de manera espontánea. Este marco normativo deportivo consiste en un conjunto de reglas que forman un sistema coherente, además de reflejar una cierta uniformidad en las relaciones y normas que lo constituyen; esta uniformidad se evidencia en que ambos

buscan optimizar el funcionamiento del deporte y regular las interacciones que persiguen un mismo objetivo (Domínguez, 2001)

Pablo Barbieri reconoce implícitamente la autonomía de esta rama cuando sostiene que: “El Derecho Deportivo es la rama del Derecho que se ocupa del estudio de las relaciones jurídicas derivadas del deporte”¹¹; de este concepto se pueden extraer los siguientes contenidos de la disciplina.

- a) Relaciones jurídicas entre los deportistas y los clubes, federaciones o asociaciones.
- b) Relaciones jurídicas entre los clubes y las asociaciones, federaciones y confederaciones que los agrupan.
- c) Relaciones jurídicas entre asociaciones, federaciones y confederaciones nacionales y aquellas supranacionales que los agrupan.
- d) Régimen jurídico de los deportistas amateurs y profesionales.
- e) Reglamentos de la práctica de los distintos deportes.
- f) Sanciones disciplinarias y recursos procesales contra las mismas.
- g) Daños y perjuicios derivados de la práctica del deporte.
- h) Daños y perjuicios derivados del espectáculo deportivo.
- i) Relaciones contractuales generadas en torno al deporte, por ejemplo, el contrato de espectáculo deportivo, espónsores, publicidad, merchandising.
- j) Responsabilidades civiles y penales derivadas de delitos y cuasi delitos cometidos en espectáculos deportivos.
- k) Derecho de imagen del deportista.
- l) Legislación nacional e internacional.

¹¹ Barbieri, P. (2005). *Fútbol y Derecho*. Editorial Universidad, 2ª Edición.

m) Régimen jurídico de las entidades deportivas y tratamiento de su insolvencia.

El derecho deportivo, aunque es una rama en desarrollo, se enriquece con aportes del derecho civil, administrativo y laboral, con el tiempo, estas contribuciones legislativas y jurisprudenciales darán lugar a la creación de una identidad propia para el derecho deportivo. Juan Barrachina (2001) argumenta que el derecho deportivo busca autonomía dentro del ordenamiento jurídico, a pesar de estar compuestos por normas derivadas de otras áreas del derecho; a medida que avanza el tiempo y se generan nuevos aportes normativos, es evidente que este conjunto normativo especializado desarrollará sus propios principios, diferenciándose de otras ramas del derecho. Sin embargo, existe una parte de la doctrina que cuestiona la autonomía del derecho deportivo, argumentando que carece de conceptos, categorías y principios propios, ya que su regulación depende de diversas ramas del derecho, como el civil, comercial, laboral y administrativo.

2.2.1.9. Principios.

El ordenamiento jurídico deportivo se compone de un conjunto de reglas que forman un sistema normativo coherente, evidenciando una homogeneidad en las relaciones y normas que lo constituyen. Esta homogeneidad se refleja claramente en los objetivos que persiguen dichas normas, por ello, es esencial establecer una regulación de la actividad deportiva profesional que se alinee con la normativa del país en el que se desarrolla, asegurando así su sostenibilidad y continuidad en el tiempo.

Contemplando el ordenamiento jurídico deportivo colombiano, podemos apreciar que existen principios propios del Derecho Deportivo, dichos principios no buscan sino la autonomía conceptual de esta rama; dentro de los cuales podemos

mencionar los siguientes: Subordinación al ordenamiento constitucional, reconocimiento, protección y promoción del deporte como derecho colectivo, la Promoción Estatal, la No discriminación, una Tutela Jurídica Eficaz, necesaria y proporcional, el Acceso a la Jurisdicción y finalmente, la Especialidad.

Ahora bien, si contextualizamos dichos principios a la normatividad peruana, podemos apreciar que la disciplina deportiva sintetiza la función jurisdiccional en los principios, contemplados en el artículo 139° de la Constitución Política del Perú: legalidad, irretroactividad de normas sancionadoras, retroactividad de normas favorables al infractor, non bis in ídem, proporcionalidad, defensa, presunción de inocencia, ejecución inmediata de las sanciones administrativas y Pro Competitione.

Por otro lado, el ordenamiento jurídico deportivo de manera general, reconoce ciertos principios que, a lo largo de los años, han tomado mayor cabida dentro de la normativa nacional, siendo aquellos, los siguientes:

- a) **Principio de Primacía de la Realidad Deportiva.** - La relación de trabajo no depende necesariamente de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en la que el trabajador (deportista) se encuentra colocado. Es por ello que la doctrina y la jurisprudencia, se orienta a que la aplicación del derecho del trabajo dependa cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuando de una situación objetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento aparecen circunstancias claras y reales, suficientes para contrarrestar las estipulaciones pactadas por las partes, por no corresponder a la realidad presentada durante el desarrollo del acto jurídico laboral.

Es evidente que dicho supuesto, no es aplicable en la realidad peruana, sin embargo, la aplicación de los principios deportivos es claramente mejor aplicada en la realidad latinoamericana; así pues la sentencia del 30 de enero de 2019 de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, reconoce que en función del principio de primacía de la realidad sobre las formas, la relación con los jugadores de fútbol debe regirse por un contrato de trabajo, que entre otras obligaciones genera el pago a aportes de seguridad social.

Es esencial aclarar el principio previamente mencionado: el principio de primacía de la realidad sobre las formas tiene su fundamento en el artículo 53° de la Constitución Política Colombiana, que reconoce la desigualdad entre trabajadores y trabajadores; para que se considere existente una relación laboral, es suficiente demostrar la presencia de elementos como la prestación personal de servicios, la subordinación continua del trabajador al empleador y la remuneración por el servicio prestado, esto permite presumir que la relación contractual se rige por un contrato de trabajo.

Es principio, tiene especial similitud con el principio de primacía de la realidad en el derecho laboral peruano, el cual, es un principio implícito en nuestro sistema jurídico, derivado de la naturaleza protectora de nuestra Constitución, debido a que, en caso exista discrepancia entre la realidad práctica y lo que se establece en los documentos, se debe dar preferencia a lo que realmente ocurre en la práctica, es decir, a los hechos; referido a la presente investigación, y vinculándola a la normativa peruana, podríamos considerar a los deportistas profesionales como trabajadores, los cuales, podrían hacer valer sus derechos, a través de la aplicación supletoria de la norma referida a los derechos laborales de los trabajadores.

- b) **Principio Par Conditio.-** Es uno de los principios que rigen el derecho deportivo¹², y se refiere directamente al equilibrio competitivo que debe mantenerse en toda competición. Este principio es crucial para maximizar la incertidumbre en los resultados de los encuentros deportivos, lo cual es un elemento esencial de esta actividad.

Para alcanzar una definición precisa de su contenido, es fundamental analizar el significado de estas palabras, lo que nos permitirá entender el verdadero sentido de este principio en el derecho deportivo. En este contexto, la palabra "par" en latín significa igual o emparejar, mientras que "conditio" se traduce como condición.; por lo tanto, "par condición" se refiere a la condición de igualdad o emparejamiento entre dos o más elementos, ya sean situaciones, objetos o personas; en el caso del deporte, nos referimos a dos o más competidores.

Un concepto análogo se presenta en el derecho comercial concursal, donde se menciona el par conditio creditorum, que busca asegurar un tratamiento equitativo para todos los acreedores durante el proceso concursal. En este contexto, el tratadista Francisco Reyes (1999) señala que: "El principio de igualdad se manifiesta en la máxima latina par conditio omnium creditorum, la cual subraya la necesidad de ofrecer un tratamiento homogéneo a todos los acreedores que participan en el proceso.

En la doctrina norteamericana, el concepto de par conditio se refiere al "equilibrio competitivo" o "igualación de las fortalezas del juego competitivo", y ha sido objeto de un análisis exhaustivo como el principal argumento para justificar excepciones a las leyes antimonopolio. Este principio es crucial en el ámbito deportivo,

¹² Real Ferrer, G. (1990) *Bases y Principios del Derecho del Deporte*, Universidad de Lleida (pág. 21)

considerado como una actividad económica, ya que su organización busca determinar quién es el mejor competidor, cuanta mayor incertidumbre haya sobre los resultados de los encuentros, mayor será el interés de los aficionados.

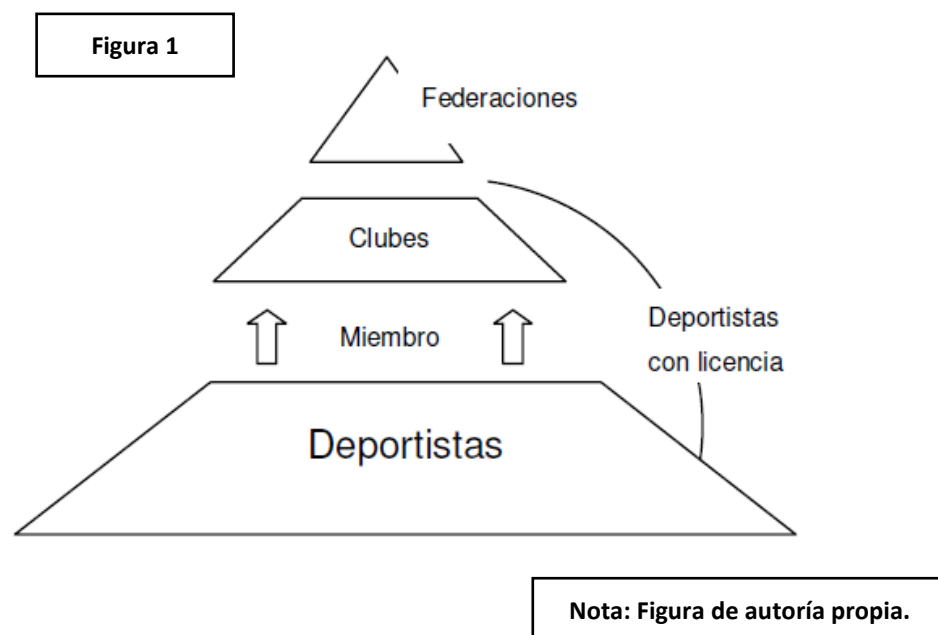
Además, es fundamental que el estudio de la actividad económica en el deporte profesional tenga en cuenta las particularidades de esta industria. Los clubes dependen mutuamente en el proceso de producción de resultados. Si no se imponen restricciones a la competencia, se podría generar un efecto adverso en la industria, ya que es esencial mantener un equilibrio económico entre los participantes para asegurar una competencia justa y atractiva.

- c) **Principio del Monopolio Territorial.** - Bajo este principio, el deporte se entiende como una actividad empresarial específica, influenciada por el principio de monopolio; esto se manifiesta en que las organizaciones deportivas de ámbito territorial superior reconocen a las de ámbito territorial inferior y viceversa; además, en un territorio o jurisdicción determinada, solo se puede reconocer a una asociación específica, lo que refuerza esta estructura monopolística.

Lo anterior implica que, en el deporte asociado, tanto en Perú como en cualquier parte del mundo, solo puede existir una asociación deportiva por cada modalidad que se encargue de organizar la competencia oficial de su disciplina en su respectivo ámbito territorial. Esta asociación tiene la facultad de reconocer oficialmente a entidades de niveles territoriales inferiores. A diferencia de otras actividades, el deporte ha evolucionado bajo esta estructura, que adopta la forma de una pirámide, donde en la cima se encuentra la federación internacional correspondiente. Esta estructura se mantiene gracias al principio de monopolio territorial, que se refleja en la universalización y unificación de las reglas del juego

de cada disciplina, y bajo la cual se rige el deporte tanto en Europa como en Sudamérica.

En este sistema, es claro que los deportistas no son miembros directores de las Federaciones, aunque pueden formar parte de los clubes, su vinculación con el movimiento deportivo se formaliza a través de un sistema de licencias. Esta relación puede representarse gráficamente de la siguiente manera:



Esta estructura ilustra cómo los deportistas, a través de sus clubes, se conectan con las federaciones, destacando que su relación es indirecta y mediada por el sistema de licencias.

Es indudable que el principio del monopolio ha propiciado históricamente el crecimiento de las federaciones internacionales; por ello, un aspecto fundamental de este principio es la prohibición general incluida en los estatutos de las asociaciones de mayor jerarquía, que impide a las asociaciones de menor rango participar en competencias o eventos deportivos no autorizados por ellas.

En la actualidad, solo existe una asociación oficial en cada ámbito territorial, la cual cuenta con el reconocimiento de la federación superior y es la única responsable de gestionar su disciplina en esa jurisdicción. El profesor Real Ferrer (2013) argumenta que, esta resulta estructura esencial para el deporte, ya que, para determinar al campeón absoluto de una competencia, esto solo puede lograrse dentro de un marco organizativo de este tipo, que es fundamental para la esencia de la competición. (p.21)

- d) **El Principio de Fair Play o Juego Limpio.** - Este principio está referido a la exigencia moral que toda actividad o práctica relacionada con el deporte debe tener en cuenta, esta exigencia moral ha sido denominada, FAIR PLAY.

El Fair Play no implica únicamente una obligación moral, sino también está íntimamente ligado al respeto por las normas escritas y al espíritu de las mismas, por ello Renson (2009) afirma que: “El desarrollo y la expansión del Fair Play ha sido una importante contribución que el deporte ha hecho a la ética y a la pedagogía” (p.5); el indiscutible aporte a la pedagogía queda evidenciado en el propio origen educativo del deporte moderno, el cual situaba al Fair Play como medio para expandir el carácter y la moral cívica de la burguesía inglesa del siglo XIX.

El Fair Play guía y establece el horizonte moral de quienes día a día desarrollan su actividad entorno al hecho deportivo; este papel está más ligado a la realidad, ya que, en la práctica, es regulado por el Comité Internacional de Fair Play (en adelante CIFP) de la Unesco (Grosset & Attali, 2011), dicho comité establece una concreción de Fair Play que, lo relaciona con fundamentación ética, tratando de cristalizar sus valores y principios más fundamentales.

La concreción e institucionalización del Fair Play que propone el C.I.F.P. tuvo sus orígenes en las diferentes declaraciones del barón Pierre De Coubertin, entre ellas, la más resaltante, su famosa “Carta del Fair Play”; sin embargo, de un modo más reciente e influyente para el deporte actual, la *Declaración del Fair Play* ha sido actualizada por el Consejo Internacional de Deporte y Educación Física, organización relacionada con la U.N.E.S.C.O. y con quien conjuntamente creó el Comité Internacional de Fair Play en el año 1963.

Esta institucionalización de la ética del deporte, responde a las necesidades de regulación y desarrollo constante del fenómeno deportivo, ya que, como bien sabemos el derecho deportivo está constantemente sometido a fuertes presiones externas que necesitaban ser controladas; es decir, el Fair Play, nació como respuesta a la necesidad de preservar la esencia del deporte o lo que en la terminología aquí empleada se definiría como el bien interno por el que cobra sentido y legitimidad social.

Desde esta perspectiva, se afirma aquí con Morgan (1994) que: “*Sin fair play lo que se entiende por deporte no lo es*” (p.31-39); es decir, cuando bienes externos como el dinero, el poder, la popularidad, la fama, etc., se erigen como intención principal de la práctica, esa conducta no responde a lo que es realmente el deporte, sino que se trata más bien de otro tipo de actividad que, aun siendo similar en apariencia, es radicalmente distinta en esencia.

2.2.1.10. Sistema Deportivo Nacional.

Para poder hablar íntegramente de un Sistema Deportivo Nacional, debemos mencionar en primer lugar a la Política Deportiva Nacional; la política es la búsqueda

de lo que es aceptable o útil para la sociedad, dicho de otra forma, es la determinación del bien común.

El deporte representa desde esta perspectiva, una realidad científica incuestionable, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los individuos, luchar contra los males que deterioran la sociedad (drogas, alcoholismo, delincuencia, entre otros); por lo tanto, su fomento y desarrollo constituye uno de los objetivos políticos del estado.

En un contexto político democrático las decisiones importantes para el deporte pasan por el parlamento y se discuten públicamente, enmarcándose de manera coherente dentro de un conjunto de medidas que permiten un mejor desarrollo de esta actividad; es así como resulta casi imposible un divorcio entre la política deportiva y la política general del país, el deporte en su aspecto mayoritario no cuenta con autonomía, debido a las múltiples necesidades que afronta y a las múltiples ayudas que precisa para su crecimiento.¹³

2.2.1.10.1. Instituto Peruano del Deporte (IPD).

De acuerdo con el artículo 6° la Ley N.º 28036 – Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, el Sistema Deportivo Nacional (SISDEN), es un conjunto de organismos públicos y privados, estructurados e integrados funcionalmente, que articulan y promueven el desarrollo del deporte en general a nivel nacional, regional y local, encabezado por el Instituto Peruano del Deporte.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) es el organismo responsable de implementar una política deportiva a nivel nacional y actúa como la entidad rectora

¹³ Reyes-Bossio, M. A. (2006). Política deportiva: factores reales del sistema deportivo. Liberabit Revista Peruana de Psicología, 12, 87-94. <https://www.researchgate.net/publication/28235542>.

del sistema deportivo en el país; se trata de un organismo público descentralizado con rango ministerial, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, y cuenta con autonomía técnica, económica, funcional y administrativa para llevar a cabo sus funciones.

El IPD, en coordinación con los organismos del sistema deportivo nacional y las direcciones regionales, tiene la tarea de formular e implementar políticas en las áreas de deporte, recreación y educación física; además, se encarga de organizar, planificar, promover, coordinar, evaluar e investigar el desarrollo del deporte, la recreación y la educación física en todas sus disciplinas, modalidades, niveles y categorías.

Para mayor estudio, respecto a la estructura orgánica del IPD, se tiene que, de acuerdo al artículo 9º de la Ley N.º 28036 – Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, establece la estructura orgánica del Instituto Peruano del deporte, la cual permite cumplir a este, con sus funciones en materia de promoción, fomento, coordinación, supervisión y desarrollo del deporte nacional en sus diferentes niveles y modalidades.

Así pues, tenemos: Alta Dirección, conformada por la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia General; Órganos de Asesoramiento, dentro de los cuales encontramos a la Oficina de Asesoría Jurídica, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; Órganos de Apoyo, conformados por la Oficina de Administración, Oficina de Recursos Humanos, Oficina de Abastecimiento, Oficina de Contabilidad y Finanzas; los Órganos de Línea, integrados por la Dirección Nacional de Deporte de Alto Rendimiento, Dirección Nacional de Deporte para Todos, Dirección Nacional de Infraestructura Deportiva, Dirección

Nacional de Desarrollo Deportivo y Dirección Nacional de Educación Física y Deporte Escolar; finalmente, tenemos a los Órganos Desconcentrados conformados por los Proyectos Especiales y las Direcciones Regionales del IPD. Cabe indicar que, las principales modificatorias a dicha estructura orgánica se han dado en los últimos años para adecuarla a los nuevos retos y prioridades del ámbito deportivo peruano.

Por su parte, el artículo 8º de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte establece las funciones del IPD, mismas que, mencionaremos brevemente:

- Formular y dirigir políticas en deporte, recreación y educación física.
- Elaborar y aprobar el presupuesto y plan de inversiones.
- Desarrollar, aprobar y supervisar el Plan Nacional del Deporte.
- Coordinar planes de acción con el Consejo del Deporte Escolar para promover la actividad física y el deporte escolar.
- Fomentar la formación de deportistas, entrenadores y agentes deportivos.
- Estimular la participación del sector privado en la promoción del deporte.
- Colaborar con diversas instituciones para realizar actividades deportivas y recreativas en sus respectivos ámbitos.
- Reconocer a las Federaciones Deportivas Nacionales que cumplan los requisitos de ley.

Una de las funciones del Instituto Peruano del Deporte (IPD) es apoyar a las federaciones deportivas nacionales con recursos económicos y supervisar su uso para asegurar que se alineen con las multas establecidas por la ley; sin embargo, el presupuesto anual no se distribuye equitativamente entre todos los deportes, lo que genera una problemática actual.

Los deportistas deben buscar recursos para sí mismos, apelando a la buena voluntad de personas y empresas privadas para cubrir sus entrenamientos, pasajes y participación en torneos. Esta situación, lamentablemente común en muchos deportes a nivel nacional, se debe a la falta de una política estatal adecuada que organice y equilibre el apoyo a todas las disciplinas.

La discrepancia con la realidad es evidente, ya que en Perú no se implementan efectivamente las políticas deportivas, aunque existan intenciones, su funcionamiento es insuficiente. El IPD, siendo un organismo del Consejo de Ministros, no recibe el apoyo necesario para cumplir los objetivos establecidos en el plan nacional cada año.

La deficiente gestión del sistema deportivo nacional ha contribuido a la crisis del sector, que opera bajo patrones ineficaces, impidiendo un desarrollo sostenible. El organismo rector ha utilizado de manera ineficiente los recursos escasos, concentrando el gasto en su sede central (Lima) sin generar un impacto significativo. Esto refleja la falta de planes de desarrollo coherentes y la improvisación de sus gestores. Sin duda, la crisis económica y la falta de desarrollo del país están a la base de la misma, puesto que han afectado negativamente, por un lado, los cimientos deportivos del país y, por otro, la capacidad financiera de los clubes.

2.2.1.10.2. Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte (CSJDHD).

Es un órgano autónomo del Instituto Peruano del Deporte (IPD) encargado de administrar la justicia deportiva y de otorgar a los Laureles Deportivos del Perú, la máxima distinción para deportistas de alta competencia y dirigentes deportivos.

Dentro del Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honor (CSJDHD), se encuentra la Defensoría del Deportista, una instancia autónoma creada para proteger

los derechos e intereses de los deportistas, quienes pueden presentar quejas por actos u omisiones de los organismos que integran el Sistema Deportivo Nacional.

Entre las facultades del Consejo, se incluye la emisión de resoluciones relacionadas con la justicia deportiva y la supervisión de los órganos de justicia del sistema, así como la creación de normas procesales y precedentes de cumplimiento obligatorio. Además, pueden formular recomendaciones para mejorar la administración de justicia deportiva, las cuales deben ser implementadas por las federaciones notificadas en un plazo razonable, informando al CSJDHD sobre su cumplimiento.

En cuanto a su composición, el CSJDHD está integrado por siete miembros elegidos por un período de dos años, a propuestas de las siguientes entidades que integran el sistema deportivo: Dos miembros propuestos por las federaciones deportivas nacionales, un miembro propuesto por el Comité Olímpico Peruano, dos miembros ex deportistas calificados de alto nivel y de trayectoria ejemplar, un miembro propuesto por el Colegio de Abogados de Lima, un miembro que represente a las facultades de derecho de las universidades públicas.

2.2.1.11. Justicia Deportiva.

2.2.1.11.1. Definiciones.

El deportista, profesional o amateur, sabe que, a lo largo de su carrera, mantiene el compromiso de velar por el correcto cumplimiento de las normas que le son impuestas en la práctica competitiva; en caso de infringir el orden deportivo que se comprometió a respetar, la consecuencia será, la imposición de una sanción por su comportamiento.

Los organismos disciplinarios del deporte, que forman parte de lo que se denomina la justicia deportiva, son los encargados de velar por el correcto cumplimiento de las normas, es decir que estas se cumplan, sean impuestas y finalmente terminen siendo ejecutadas.

La Justicia en el deporte se organiza en torno a un entramado normativo que tiene por objetivo garantizar la resolución de conflictos o la incertidumbre jurídica que se presentan en el ámbito deportivo, sea en materia de encuentros, torneos, competencias o contiendas del interés de los sujetos relacionados con la actividad deportiva.

En ese orden de ideas, se precisa que: “(...) en los clubes deportivos (entidades de corte asociativo sin ánimo de lucro) las cuestiones o divergencias de tipo “asociativo” se dirimen, normalmente, en los tribunales de justicia ordinarios. Para el ámbito disciplinario deportivo quedan aquellas cuestiones o bien relacionadas con la competencia deportiva o bien relacionadas con la conducta deportiva general. Un incumplimiento estatutario o reglamentario en un club o en una federación deportiva era directamente enviada a la jurisdicción civil”.

Por tal motivo, consideramos que la implicancia que tengan los clubes y las ligas deportivas con relación a sanciones para sus asociados, por haber incurrido en alguna infracción de orden deportivo, no son parte de lo que denominamos justicia deportiva, por el contrario, tal injerencia de los clubes y las ligas deportivas se encuadra dentro de las facultades que el marco estatutario que esta le reconoce.

Actualmente, muchas de las controversias deportivas, comprenden materia litigiosa, sin embargo, diversas asociaciones internacionales que lo tutelan han intentado mantener dichas controversias de acorde a su legislación nacional

deportivo, dicho de otra manera, resuelven sus controversias al margen de lo regulado en los ordenamientos jurídicos de los Estados donde se desarrolla la actividad deportiva y dentro de lo que puede denominarse sistemas de autorregulación.

2.2.1.11.2. Clases.

a) Justicia Interna Deportiva.

Los problemas que surgen en las organizaciones deportivas son de carácter privado, y sus soluciones se gestionan de acuerdo con el estatuto de cada entidad de manera interna. Esto incluye la posibilidad de imponer sanciones a los socios que opten por acudir a los tribunales para proteger sus derechos. Estos sistemas de justicia interna también son adoptados por las organizaciones deportivas internacionales, y se conocen como sistemas de autodefensa en la resolución de conflictos.

En las instituciones deportivas, prevalece la potestad de autoprotección, que se aplica a aquellos que tienen una relación directa con la organización y su funcionamiento, asegurando el cumplimiento de sus deberes y obligaciones. Esta potestad de protección es de naturaleza general y busca salvar el orden social de la organización.

b) Justicia Administrativa Deportiva.

La justicia administrativa deportiva es realizada por las federaciones nacionales. Actúan como primera instancia respecto a faltas y transgresiones en materia deportiva cometidas por sus afiliados, dirigentes de clubes deportivos, ligas y deportistas. En estos casos, el CSJDHD actúa como segunda instancia.

c) Justicia Jurisdiccional Deportiva.

El artículo 139° de nuestra Constitución establece los principios y derechos de la función jurisdiccional, entre los cuales se destacan:

- Unidad y exclusividad de la función jurisdiccional : No puede existir ninguna jurisdicción independiente, salvo la militar y la arbitral. No se permite el proceso judicial por comisión o delegación.

La exclusividad de la función jurisdiccional corresponde al Poder Judicial, con las excepciones mencionadas. Por lo tanto, las decisiones de los órganos de las instituciones deportivas se enmarcan en el ámbito administrativo, no en el jurisdiccional.

La jurisdicción se entiende como el poder específico que tienen ciertos órganos estatales para resolver conflictos de intereses. Así, este poder jurisdiccional no es competencia de los órganos de las instituciones deportivas ni de los órganos administrativos destinados a resolver conflictos en el ámbito deportivo y, en su caso, a sancionar faltas disciplinarias. La autoridad jurisdiccional recae únicamente en el Poder Judicial y en los órganos que señala la Constitución.

2.2.2. La Constitucionalización del Deporte

2.2.2.1. Dimensiones del vínculo entre el Derecho y el Deporte.

Debido al crecimiento inimaginable del deporte en los últimos treinta años, esta estrecha relación, del derecho y el deporte, ha evolucionado con el tiempo hasta convertirse en un vínculo apasionado que se ha extendido de manera obvia y

contrastable, a tal punto, que hoy en día, doctrinaria y legislativamente, ya no se discute como si ocurría, posiblemente hace algunos años atrás, sobre la existencia de un Derecho del Deporte.

Personalmente, creo que es descortés e igualmente contraproducente limitar la idea de derecho deportivo o derecho del deporte, sólo a aquellas cuestiones que se relacionan con la producción normativa de carácter federativo, como hubo el debate anterior, ahora agotado, sobre si podría considerarse una nueva especialidad.

La proyección de la relación entre deporte y derecho es también resultado de la continua expansión del deporte, que ha dado lugar a nuevas organizaciones, nuevas disciplinas y una mayor internacionalización de sus competencias, esto ha llevado al descubrimiento de que el deporte y el derecho deben complementarse para poder existir; incluso dentro del deporte, las situaciones que se pueden presentar dependen de la disciplina de que se trate, ya sea por sus reglas, por la forma en que se han desarrollado sus competencias, entre otros factores, que siempre son necesarios al momento de un conflicto.

Entonces, un acontecimiento deportivo ya requiere tal nivel de especialización que no es suficiente desde la perspectiva del derecho laboral, por ejemplo, o del derecho civil o mercantil, o incluso del derecho penal, exigir ya una especialidad; esta no es una competencia basada en incumbencias, al contrario, cuando se trata de la búsqueda de una mayor justicia, el sentido principal de la ley, la adecuación de las normas, ya sea en su etapa de preparación, como para su aplicación o interpretación.

De esta forma, procedemos a enumerar con alguna mayor precisión, las distintas circunstancias en las cuales el Deporte, requiere del Derecho, a medida que crece y se desarrolla:

2.1.1.1.1. *El Deporte como Derecho.*

En esta dimensión, el deporte está estrechamente con el patrimonio cultural de cada comunidad y se considera un hecho social espontáneo y arraigado en la vida diaria, su uso fortalece los vínculos comunitarios y la identificación entre sus miembros; en este punto también se consideran las actividades relacionadas con el ocio que tienen una influencia positiva significativa en la calidad de vida de los miembros de la comunidad.

Desde este punto de vista, la intervención de los organismos públicos en el ámbito de la educación física debe centrarse en asegurar que todos tengan acceso a ella dentro de un proceso educativo más amplio; los beneficios que aporta el deporte son fundamentales para el desarrollo completo de la personalidad de cada individuo, por lo tanto, las autoridades deben abordar la educación física con la misma importancia que la educación intelectual, ya que es un elemento clave de la formación integral.

También podemos incluir los valores que fomenta la participación en el deporte, como el respeto a las reglas y a los funcionarios que las hacen cumplir, el trabajo en equipo y la cooperación que se requiere cuando el deporte se practica en grupo o equipo, la responsabilidad, el sacrificio y la tolerancia, como, así como valores que en general promuevan la inclusión social y la convivencia.

Ahora bien, si analizamos los beneficios que genera para la salud, tengamos en cuenta que, cuando hablamos de beneficios para la salud, no solo nos referimos a la salud física sino también a la salud mental; la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó las "Recomendaciones globales sobre actividad física para la salud" en

2010, basándose en la observación de que el comportamiento sedentario es la cuarta causa de muerte en todo el mundo.

Pero además el deporte, contiene elementos que los transforman en apasionante y muy atractivo, dicha peculiaridad puede generar enorme demanda de personas ávidas de practicarlo, disfrutarlo o mirarlo, determina en ciertos niveles su profesionalización, es decir genera que exista un grupo de deportistas dedicados a la práctica deportiva como su actividad profesional, excluyente. Lo que sea que los fanáticos adoren del espectáculo que ofrece este tipo de evento deportivo, también puede producir liderazgos positivos o modelos de popularidad, útiles también para la identidad, muchas veces, de la comunidad; en este tipo de eventos deportivos el objetivo pasa a ser la mejora de un determinado récord o barrera física, o el deseo de competición.

El deporte entonces tiene una conexión directa con el desarrollo de una persona y por eso lo reconocemos como un derecho, incluso ha sido aceptado en el derecho internacional de derechos humanos; en nuestra investigación, únicamente enumeramos algunos de los tratados o resoluciones de organizaciones internacionales que lo hacen; así pues, tenemos a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que expresa en su artículo 24° :“Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre...”; debemos considerar comprendidas las actividades deportivas y recreativas. De igual forma, el artículo 26°, menciona dentro del derecho a la educación, la formación integral del hombre, a la cual, contribuye la actividad deportiva y de recreación. En lo concerniente específicamente al derecho al deporte, su consagración internacional se inicia con el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 1976; allí se dispuso que: “Los Estados Partes

en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.

La importancia que se reconoció a este derecho, derivó dos años más tarde en la Carta Internacional de Educación Física y Deporte, adoptada por la UNESCO en París, en el año 1978; entre otros, los puntos tratados en dicha reunión fueron los siguientes:

- La práctica de la educación física y el deporte constituye un derecho fundamental para todos (art.1º).
- La educación física y el deporte constituyen un elemento esencial de la educación permanente dentro del sistema global de educación (art.2º).
- Los programas de educación física y deporte deben responder a las necesidades individuales y sociales (art. 3º)
- La enseñanza, el encuadramiento y la administración de la educación física y el deporte deben confiarse a un personal calificado y debe contarse con instalaciones y materiales adecuados (arts. 4º y 5º); entre otros apartados más.

Anterior a esa Carta Internacional, pero no con la claridad de esta, aunque sí con la misma naturaleza declarativa, en el marco del Consejo de Europa, fue aprobada en 1975 en Bruselas por la Conferencia de Ministros Europeos responsables de Deporte, la Carta Europea Deporte para Todos: documento que en su artículo 1º establece: “Todo individuo tiene derecho a participar en el deporte”. Al ser el término participar, más amplio y ambiguo y, con ello, poder incluir actividades pasivas frente al deporte y no necesariamente activas, destacando la importancia de su existencia, pero no la forma en que se reconocía el derecho.

Con una redacción similar a la del párrafo anterior, con la inclusión de tres descripciones, respecto a lo que incluye dicha participación, el 24 de septiembre de 1992, el Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó la Carta Europea del Deporte en la que se establece de manera expresa la práctica del deporte como derecho de todos; dicho documento no tiene la naturaleza de tratado, por lo que no es jurídicamente obligatorio, pero establece compromisos que deben asumir los 47 Estados europeos que participan en dicho Consejo.

Posterior a los documentos antes referidos, la Carta Olímpica (1996) incluyó por primera vez en su texto, como octavo principio fundamental que: “La práctica del deporte es un derecho humano. Toda persona debe tener la posibilidad de practicar deporte de acuerdo con sus necesidades”. Aunque el texto más actualizado de la Carta Olímpica (2011) establece: La práctica del deporte es un derecho humano. Toda persona debe tener la posibilidad de practicar deporte sin discriminación de ningún tipo y dentro del espíritu olímpico, que exige comprensión mutua, espíritu de amistad, solidaridad y juego limpio.

Cabe indicar que este documento, tiene una naturaleza aún menos vinculante jurídicamente para los Estados, ya que no es aprobado en el seno de un órgano multilateral internacional como lo es la Organización de Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la Organización de Estados Americanos o la Unión Africana, sino por un organismo encargado de promover el olimpismo en el mundo y de coordinar las actividades del llamado Movimiento Olímpico.

De manera específica, se trata de una organización constituida bajo las leyes suizas a manera de asociación, con lo cual, no tiene sustento en ningún tratado, sino en la referida Carta Olímpica y las representaciones de cada país son más a modo

asociativo que de tipo diplomático, esto es, sin facultades para generar normas jurídicas vinculantes para los Estados, aunque sí obligaciones para sus asociados. Pese a ello, la Carta Olímpica es el documento que en el ámbito internacional reconoce de manera más clara y expresa hasta hoy (septiembre 2015) a la práctica del deporte su calidad de derecho humano.

En ese orden de ideas, la Convención sobre los Derechos del Niño, contiene disposiciones en las que este derecho se reconoce de forma categórica. Vale la pena señalar aquí que el artículo 31.1° de la indicada Convención, señala que “los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes”.

Finalmente, ONU reconoce la capacidad del deporte para apoyar el desarrollo en una resolución del año 2003 titulada "El deporte como medio para promover la educación, la salud, el desarrollo y la paz"; todo ello ha resultado en el reconocimiento constitucional de este Derecho a través de leyes generales para la promoción o desarrollo del deporte por parte de los Estados en diversas naciones del mundo.

Con todo lo anterior, parece quedar claro que la práctica del deporte es considerada de forma mayoritaria a nivel mundial como una actividad que requiere de regulación, antes que un derecho de las personas, sólo en algunas constituciones de la región latinoamericana y en algunos documentos internacionales sin fuerza vinculante se ha venido reconociendo como un derecho de las personas, como un derecho humano.

2.1.1.1.2. El Derecho para la Organización del Deporte.

Desde sus inicios, el deporte ha sido visto como una forma de recreación y ocio; sin embargo, a medida que se ha extendido su práctica y características, un gran número de personas se han interesado y comprometido con él, por lo que hoy en día el deporte no sólo es una actividad recomendable sino también una forma de fomentar el crecimiento tanto personal como profesional; siendo así, se han establecido organizaciones dedicadas a la promoción y gestión del deporte como resultado de la percepción del deporte como una herramienta para el desarrollo humano y, recientemente, como un medio para generar retornos financieros. estas organizaciones se vieron obligadas a crear estructuras cada vez más complejas y con reglas mucho más organizadas debido al crecimiento exponencial y complejo de los distintos deportes, lo que les ha permitido convertirse en verdaderas instituciones deportivas.

En ese sentido, cabe señalar que, una organización deportiva es una estructura organizativa compleja que se define como "un grupo de personas que comparten intereses, al menos en cuanto a la práctica, promoción, desarrollo y posibilidad de resolver inquietudes particulares orientadas a la práctica deportiva"¹⁴; dichas inquietudes particulares, serán resueltas a través de las normas que regulen el reconocimiento de las personas jurídicas en cada jurisdicción, dando origen de esta forma a la organización y regulación a las instituciones deportivas, afirmando de esta forma que, es el Derecho quien permite la organización del mundo del deporte.

El ámbito deportivo es un sistema extenso y regulado por leyes que incluye a deportistas profesionales, entrenadores, técnicos deportivos, jueces, profesionales de

¹⁴ Sancho, J., Piqueres, J., & Manzano, M. (2002). *La gestión deportiva: clubes y federaciones*. INDE Publicaciones

la medicina deportiva y otras profesiones, directivos, profesionales de la comunicación social, funcionarios de las federaciones deportivas y entidades deportivas estatales y departamentales, entre otros. Los componentes del ámbito deportivo incluyen tanto a personas físicas como a personas jurídicas, además del Estado, como ente regulador (cabe recalcar que este, no forma parte de la organización deportiva como tal, pero tiene un rol importante en este ámbito).

La institucionalización del deporte, por otro lado, ha sido beneficiosa para su práctica, pero también ha llevado a la aparición de nuevos actores que no son deportistas y se especializan en la gestión administrativa del deporte y la representación, esta unificación de eventos deportivos ha aumentado el interés público por el deporte y su práctica a través de la organización. Debido a esto, se han creado diversas formas de organización entre los participantes de diferentes ramas del deporte que comparten intereses similares. En la actualidad, se pueden identificar principalmente las siguientes: Sociedades deportivas, Asociaciones de organizaciones deportivas, Federaciones deportivas nacionales e internacionales.

En su significado más amplio, una organización deportiva se refiere a una federación nacional compuesta por asociaciones y clubes deportivos, estas federaciones nacionales se agrupan para constituir federaciones internacionales, las cuales se definen como las entidades encargadas de la administración y gestión cotidiana de las actividades deportivas a nivel internacional¹⁵. Cada federación internacional actúa como la máxima autoridad global en su respectivo deporte.

Es importante precisar también que la organización deportiva, desde su creación, hasta sus niveles más amplios, es en general de naturaleza privada y que el

¹⁵ Hernández, R. A. (2005). *Gestión y Administración de las organizaciones Deportivas* (Vol. 26). Editorial Paidotribo.

Estado, tal y como se indicó en párrafos anteriores, no constituye un actor directo de esta estructura, sino únicamente un regulador; sin embargo, con la intervención Estatal a través del Instituto Peruano del Deporte, adscrito al Ministerio de Educación, el deporte sí posee cierta connotación pública, por lo que su naturaleza no se restringe exclusivamente al ámbito privado, considerando además que está regulado por un ente público.

Podemos citar en el otro extremo de la pirámide organizacional del Deporte, al Comité Olímpico Internacional, la forma organizativa máxima del deporte a nivel mundial; esta es una organización internacional no gubernamental, con sede en Lausana (Suiza), sin fines de lucro, constituida como asociación dotada de personalidad jurídica, reconocida por decreto del Consejo Federal suizo de fecha 17 de septiembre de 1981; esta, representa el más claro ejemplo de la evolución de la organización deportiva, ya que, el primer objetivo de esta entidad era la coordinación del evento cumbre del deporte cada cierto tiempo: los Juegos Olímpicos.

En la dimensión anterior valoramos la importancia de los Estados en la necesidad de garantizar el Deporte como un Derecho; aquí, sin embargo, es el Derecho quien le brinda soporte jurídico a toda la construcción autónoma que el Deporte ha edificado una y otra vez. Como podemos ver, la Ley es la que permite el reconocimiento de cada institución deportiva, fija los parámetros que tendrán sus estatutos, garantizando desde ellos, su vida democrática, su orden interno, cómo serán sus relaciones, y también permite su propia organización, protección y fortalecimiento.

2.1.1.1.3. *El Derecho y la Regulación de la práctica deportiva.*

El Derecho es el instrumento legal que proporciona las herramientas y construcciones jurídicas necesarias para establecer las normas y establecer los marcos dentro de los cuales se desarrollarán las competencias en cada disciplina deportiva, tanto a nivel local como nacional, o internacional; en la definición de deporte, coincidimos en que su actividad debe estar sujeta a normas que establezcan límites para la competencia.

En razón de ello, surgen ciertas interrogantes: ¿Cómo se organizarán las competencias? ¿Qué reglas se establecen? ¿Qué categorías o edades se permitirán? Todo esto se regulará según las normas de cada autoridad en cada disciplina y se establecerá según sus estatutos y facultades.

Ahora bien, en la gran mayoría de países del mundo, con notorias excepciones, enfatizan con frecuencia la importancia de los derechos humanos, a través de sus discursos político-sociales, aunque ciertamente, ello es bueno e incluso necesario para asegurar que un mensaje sea bien recibido, a pesar de que la realidad demuestre lo lejos que está el hecho de que esas palabras se transformen en algo concreto y efectivo para todos.

Bajo esa perspectiva, reconocer derechos en los textos legales, de tratados o constituciones, se ha convertido en la parte más simple de la ecuación, a fin de demostrar interés y compromiso con los derechos humanos; ese reconocimiento no va acompañado de las garantías necesarias para que la expectativa de derecho sea una real posibilidad de exigencia y protección cuando el derecho reconocido es tan amplio, poco claro o complicado, que concretar su contenido requerirá extensos debates en

diversas áreas antes de su implementación efectiva en el mundo jurídico, aunque sea una actividad, atributo, condición o característica inherente a la naturaleza humana¹⁶

En consecuencia, es importante que las normas de origen nacional (Constitución, leyes, reglamentos) reconozcan los derechos humanos en el complejo mundo de hoy, ello en razón que, es una expectativa formal, tener derechos humanos reconocidos en normas de origen nacional o normas de origen internacional (tratados) de las cuales se componga el sistema jurídico de un país.

Así, el reconocimiento de derechos es tan sólo el primer paso: la formalización por medio del derecho de una actividad, atributo, condición o característica inherente a la naturaleza humana; primer paso de gran importancia, pues es con éste con el que se inicia el camino, los pasos siguientes, en mucho dependen del derecho del que se trate, por lo que no me atrevo a generalizar si en todos los casos es fácil o difícil su efectiva puesta en marcha.

Las leyes que permiten la práctica de los deportes son fundamentales, al igual que la estructura organizativa de las instituciones involucradas; estas entidades proporcionan los mecanismos necesarios para supervisar las acciones disciplinarias de los participantes en cada actividad. Las normas que regulan las sanciones, las consecuencias de su incumplimiento, los intérpretes de dichas normas, la composición de los Tribunales de Disciplina y sus designaciones, así como otras políticas e instituciones diseñadas para prevenir o resolver disputas entre deportistas durante la práctica deportiva, son igualmente cruciales.

¹⁶ Castilla K. (2015): El derecho humano a la práctica del deporte. Una propuesta desde y para la Constitución mexicana, *Fair Play: Revista de Filosofía, Ética y Derecho del Deporte*, 6(2), 97-103.

2.1.1.1.4. *El Derecho y las Relaciones entre los sujetos deportivos y de estos con terceros.*

Ya vimos la importancia del Derecho, tanto en la organización del deporte como en la regulación de la práctica deportiva, en esta dimensión, resaltamos que, a través del Deporte también se regulan las relaciones en general, entre los propios sujetos deportivos y aquellas que también deban mantener estos con terceros; a veces serán reguladas por los mismos estatutos que le dieron reconocimiento a la institución, por ejemplo, en el caso de los socios de un club.

En determinados contextos, existen disposiciones federativas específicas, como el fichaje de un deportista, que le permiten participar en actividades deportivas bajo la regulación de una federación, representando a un club que lo integra en su plantilla; este proceso a menudo involucra a agentes deportivos.

Las relaciones pueden ser de carácter amateur o, en otros casos, profesionales, dependiendo de las mismas regulaciones; cuando las leyes de cada estado lo reconocen, estos modelos contractuales se clasifican como contratos laborales. Lo mismo se aplica a árbitros y entrenadores, quienes pueden desempeñar roles técnicos o físicos; además de ello, los deportistas interactúan con terceros, y las regulaciones legales que rigen estos contratos pueden ser de naturaleza comercial o civil, sin embargo, es fundamental que todas estas relaciones se enmarquen en un contrato, donde la figura de los agentes deportivos adquiere una importancia significativa.

La figura de los agentes deportivos es relativamente nueva; antes de eso, los deportistas manejaban sus propias negociaciones de intereses; estos obtuvieron reconocimiento como figuras públicas en la década de 1960, cuando demostraron la capacidad de reunir un número considerable de seguidores, recursos y fervor; es en

ese año que el abogado estadounidense Mark McCormack, funda la empresa de representación de atletas más grande del mundo en ese momento, International Management Groups (IMG); esta empresa es una organización de gestión internacional que presta servicios a figuras del deporte y celebridades, que revolucionó las negociaciones entre los deportistas y los interesados. Entre las hazañas logradas por McCormack como presidente de IMG se encuentra, la tarifa de 500 dólares por partido cobrada por Arnold Palmer (Golfista estadounidense, considerado uno de los grandes jugadores de la historia por sus numerosas victorias en grandes torneos a nivel mundial desde 1955), los partidos de exhibición en China entre los tenistas Jimmy Connors (N.º 1 del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales en nueve ocasiones durante los años 1974 a 1983 y Top 10 durante 16 años entre 1973 y 1988) y Bjorn Borg (considerado como uno de los mejores tenistas masculinos de la historia del tenis); finalmente y no por ello menos importante, concretó la contratación de Edson Arantes do Nascimento, conocido mundialmente como Pelé, por parte del New York Cosmos.

Hoy en día, el 95% de los deportistas, independientemente del deporte que practiquen, tiene un representante que negocia desde contratos con empleadores, patrocinios, uso de imagen hasta aspectos económicos, laborales e incluso personales; los representantes en el fútbol al igual que en cualquier deporte, se consideran permitidos. Las negociaciones avanzan hasta que cada parte obtiene una ventaja, ya sea un contrato laboral o la transferencia de derechos deportivos; por tanto, podemos considerar la representación como un fenómeno jurídico que libera al interesado en un negocio jurídico de tener que negociar, celebrar o incluso ejecutar siempre un contrato, permitiéndole así delegar algunos, varios o todos.

2.1.1.1.5. *El Derecho en la prevención y resolución de conflictos en el Deporte.*

El conflicto, como motor y expresión de las interacciones humanas, es crucial para el desarrollo de cualquier estructura social y representa una oportunidad de crecimiento en el ámbito deportivo, se puede afirmar que el conflicto actúa como el principal catalizador de la práctica deportiva competitiva, con efectos que impactan directamente en la economía y en diversas manifestaciones socioculturales de las comunidades, por lo tanto, el conflicto, especialmente en el contexto deportivo, no puede ser erradicado por completo; imaginar una disciplina deportiva sin conflictos no solo es una utopía, sino que también sería perjudicial, ya que eliminaría una fase fundamental en el desarrollo y la evolución del deporte.

Como hemos señalado previamente, el deporte moderno surgió al margen del Estado, con un origen asociativo privado, fue la iniciativa de las personas la que dio lugar a las reglas de las diversas disciplinas y a la formación de clubes, que posteriormente se unieron en federaciones, aceptando finalmente someterse voluntariamente al Comité Olímpico Internacional (COI). Esta organización privada ejerce competencias normativas sobre el reconocimiento de federaciones y la regulación de las reglas deportivas, siendo las federaciones las entidades más capacitadas para comprender, diseñar y organizar actividades deportivas.

Sin embargo, al igual que en cualquier organización o asociación, pueden emerger situaciones que perturben el funcionamiento interno, eventos imprevistos que comúnmente denominamos conflictos. Es crucial resaltar que, a pesar del continuo desarrollo de esta área y de las aportaciones del derecho deportivo, el conflicto permanece como una constante; se puede afirmar que es una característica inherente al deporte; por ende, la habilidad para gestionar estos conflictos es

fundamental para alcanzar los objetivos y obtener resultados positivos dentro de las instituciones, ya que si alguna parte del andamiaje organizacional no opera conforme a lo establecido, no se logrará una verdadera eficiencia en la ejecución de lo planificado.

El deporte y los conflictos pueden analizarse dentro del marco de la teoría del conflicto¹⁷; las exclusiones basadas en la definición de los términos no ayudan a comprender el aspecto conflictivo del deporte ni a comprender el conflicto en general; asimismo, las investigaciones sobre una variedad de temas complejos, desde la competición en deportes hasta la resolución o la incitación de conflictos a través del deporte, que se basan en nociones básicas de causalidad con repercusiones para los modelos derivados de la etología y la psicología, que han proporcionado información importante sobre la agresión y la violencia. Los resultados del análisis de deportes y conflictos, rara vez se interpretan debido a que, podrían indicar la existencia de problemas en el sistema que requieren un análisis sociológico más profundo.

Una forma de conflicto es la competencia deportiva entre dos o más partes para lograr superioridad en un juego de destreza física y de estrategia; algunos autores lo denominan *Kampfspiel* (Simmel, 2023, p. 141-153), mientras que otros autores señalan su calidad de actividad metódica e ininterrumpida y lo clasifican como pseudo-conflicto (Beals y Siegel, 1966)

Hay quienes sostienen que las competiciones deportivas brindan una forma de manejar los conflictos, por ello es que, se considera como una guerra sin armas¹⁸, una paz en suspenso o como algunos autores alemanes le denominaban la “*Friede auf*

¹⁷ Gil, R. J. (2012). Una aproximación a la Teoría Crítica del Conflicto Social de Karl Marx. *Revista Filosofía, política y economía en el Laberinto*, 37(1), pp. 33-43.

¹⁸ Goodhart, P & Chataway, C. (1968), *War without weapons*, Editorial WH Allen.

Zeit”¹⁹, que no es sino, una forma favorable de resolver los conflictos, que se enfocaba en la mediación como una herramienta central que puede hacer una gestión correcta y precisa de los conflictos dentro del ámbito deportivo y ampliar su uso dentro de las instituciones deportivas, centrándose principalmente en los intereses de las partes y la resolución de diferencias de manera pacífica.

Siendo así, el Deporte procura medios alternativos a la resolución de los mismos, en general, de la misma manera que en la organización, el mundo del deporte defiende su autonomía, y ha ido generando una construcción piramidal a nivel internacional, que también procura que los conflictos deportivos se resuelvan fuera de los tribunales ordinarios, promoviendo procedimientos de solución de conflictos; a diferencia del procedimiento judicial, estos procedimientos tienen principios que brindan confianza y certeza a las partes. Entre ellos se destaca la voluntariedad de acudir al procedimiento debido a la neutralidad del tercero, la confidencialidad del procedimiento, la rapidez y la reducción de costos. La negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje son algunos de los métodos planteados y utilizados por algunos autores como Hicks, 1993; Cornelius y Faire, 1995 y Jares, 1995, para resolver conflictos; estas seis formas tradicionales de afrontar los conflictos son:

- La evitación: El conflicto no se aborda, por lo que sigue sin resolverse.
- La negociación: La resolución de un conflicto se logra mediante la compatibilización de los intereses de las diferentes partes involucradas, alcanzando un acuerdo intermedio. No hay vencedores.

¹⁹ Schelsky, H. (1973), *Friede auf Zeit : die Zukunft der Olympischen Spiele*, Editorial A. Fromm.

- La acomodación: Para evitar un conflicto que les pueda perjudicar, una de las partes involucradas en el mismo se despreocupa de sus intereses y acepta las propuestas del otro, aunque estas sean diferentes a las propias.
- La competición: Cuando una de las partes involucradas en un conflicto prioriza sus intereses sobre los de la otra parte, ignorando o ignorando las necesidades de la otra parte y sin estar dispuesta a negociar.
- El arbitraje: Cuando una tercera persona, con reconocida autoridad, interviene para la resolución del conflicto y no está involucrada en él, impone una solución. El inconveniente de esta táctica radica en que podría generar situaciones injustas que podrían generar más conflictos.
- La conciliación o mediación: Cuando una tercera persona con cierta autoridad interviene de manera imparcial para ayudar a resolver el problema.

Los mecanismos de resolución de conflictos están intrínsecamente relacionados con la normativa tanto nacional como internacional, es importante resaltar que, en el ámbito global, existen organizaciones dedicadas a identificar y gestionar los conflictos que pueden surgir durante la práctica deportiva. El principal referente internacional en este contexto es el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS/CAS), cuyo nombre varía según el idioma; este tribunal no solo ejerce funciones jurisdiccionales, sino que también establece tribunales ad hoc, cuyas decisiones son vinculantes, equiparables a las sentencias judiciales para las partes involucradas. Además, el TAS/CAS desempeña un papel consultivo, ofreciendo asesoría y apoyo a organizaciones y deportistas que lo requieran. A nivel nacional, cada país cuenta con un organismo responsable de resolver conflictos entre entidades o deportistas; en varios países de Latinoamérica, estos organismos son los Tribunales Nacionales del

Deporte, que tienen la competencia para abordar infracciones disciplinarias en el ámbito deportivo.

En Perú y en otros países de Latinoamérica con poca normatividad deportiva, es fundamental que la autoridad competente se comprometa con la regulación del deporte para fomentar una legislación más robusta y establecer instituciones dedicadas a garantizar el cumplimiento de las normas en el ámbito del Derecho Deportivo; los ciudadanos tienen derecho a la justicia, y las leyes establecen cómo las instituciones o tribunales pueden ayudar a las personas a resolver los conflictos en los que se ven involucrados diariamente, es así como las personas pueden acudir a los tribunales para presentar una denuncia o demanda y solicitar el inicio de un procedimiento judicial, que es donde una autoridad competente decide la solución de un conflicto.

Además, las leyes permiten a los ciudadanos explorar otras formas de resolución de conflictos que ofrecen la misma protección legal que un proceso judicial; estos procedimientos no confrontativos facilitan a los ciudadanos la resolución de sus disputas de manera más pacífica, contando con la intervención de un tercero neutral e imparcial.

2.2.2.2. La Consolidación Constitucional del Derecho al Deporte.

La Constitución, es la norma fundamental que regula el ordenamiento jurídico de un Estado, cuya función principal es establecer la normativa que rige el poder político del mismo. (Loewenstein, 1982, p. 149) Entendemos entonces al Estado como una entidad jurídica que se ubica en un ámbito geográfico específico y ejerce autoridad sobre un conjunto de personas, dicho Estado, a su vez, posee una serie de obligaciones y deberes que están establecidos constitucionalmente.

Algunos legisladores señalan que las constituciones son un estilo de contrato social escrito, un contrato de convivencia de cosas, que no se pueden decidir y cosas que se deben decidir, todo ello con el fin de garantizar los derechos y la paz de la comunidad.

Así pues, el concepto de Constitución puede abordarse desde dos perspectivas: material y formal; desde el punto de vista material, la Constitución consiste en la organización estructural y sustancial del estado en una realidad concreta, el cual, por el mismo hecho de existir, posee una Constitución; este es un concepto de carácter político, que deriva de la propia naturaleza del Estado. (Palomino, 2007, p.227-242)

En ese orden de ideas, el concepto formal de Constitución la define como una norma jurídica que tiene como función regular el poder político, este enfoque se centra en el "deber ser", a diferencia del concepto material; por lo tanto, mientras mayor sea la semejanza entre la Constitución en sentido material (la organización real del Estado) y la Constitución en sentido formal (la norma jurídica), mayor será el nivel de constitucionalismo de ese país y, por ende, mayor el respeto al Estado de Derecho. La distinción entre la Constitución material y formal es clave para entender el grado de constitucionalismo efectivo en un Estado.

Así pues, la Constitución opera como la norma fundamental que justifica, limita y organiza el poder del Estado, establece parámetros a la actuación del Estado, (Castillo, 2009, p.12-13) definidos por los derechos fundamentales de las personas y por un conjunto de principios, conceptos e instituciones. Además, la norma constitucional determina la organización interna del Estado, especificando las atribuciones y funciones de los diversos órganos y entidades que lo componen.

Dicho ello, en la gran mayoría de los sistemas jurídicos contemporáneos, se asume que la Constitución es la norma política y jurídica fundamental, la cual, sirve de base y fundamento para toda la sociedad; es como una "norma de normas", por consiguiente, la Constitución se convierte en un auténtico derecho, que debe ser considerado como una norma invocable por y ante todos los operadores jurídicos, la cual, goza de fuerza vinculante, tanto para las entidades públicas como para los particulares en general.

Por otro lado, el carácter normativo y jurídico de la Constitución implica que, no debe considerarse únicamente como una norma programática y declarativa, sino que, al contrario, sus disposiciones son de aplicación directa. Esto significa que no hay que hacer distinción entre una efectividad inmediata o diferida de la Constitución, especialmente en relación con los derechos fundamentales que en ella se reconocen, de hecho, algunos de estos derechos están directamente sustentados en la propia norma constitucional, sin que sea necesario contar con leyes de desarrollo posteriores para su efectividad.

Así pues, todos los derechos consagrados constitucionalmente, especialmente aquellos catalogados como derechos fundamentales, deben contar con los instrumentos de protección y garantía establecidos en el propio texto constitucional; estos instrumentos pueden tener diversos niveles de intensidad y efectividad y así, cada derecho constitucional tendrá sus propias garantías, las cuales se derivarán de su inclusión específica en la Constitución y de la función que la Carta Magna les atribuye. (Freixes & Remotti, 2002)

La constitucionalización de determinados derechos ha evolucionado de acuerdo a las concepciones ideológicas, políticas y filosóficas que han sustentado los

diferentes modelos de Estado a lo largo de la historia; en cada momento histórico, los textos constitucionales han positivado los derechos relacionados con las principales cuestiones de interés general y particular de ese período. Entre estos derechos, aquellos de carácter social, como el derecho al deporte, han adquirido una importancia creciente particularmente a partir de la segunda mitad del siglo pasado.

Por otro lado, debemos recordar que, el derecho al deporte se asocia estrechamente al derecho clásico a la libertad de asociación de los ciudadanos, que forma parte de la primera generación de derechos fundamentales, los derechos civiles y políticos. Es importante señalar que este derecho también debe correlacionarse con el derecho al logro de la felicidad; se trata de un derecho humano clásico, pero que ha sido olvidado en cierta medida, ya que fue reconocido en la Declaración de Independencia de Estados Unidos de 1776, mientras que el objetivo de la "felicidad de todos" existía en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia en 1789, sin que haya sido incorporado explícitamente en los textos constitucionales posteriores.

La Constitución de la Unión Soviética de 1936 fue la primera en incluir el deporte como uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos, específicamente, en el artículo 126º del capítulo sobre derechos y deberes básicos, se reconoció el derecho de los ciudadanos a agruparse en organizaciones sociales, entre las cuales se mencionaron explícitamente las organizaciones deportivas. A pesar de las importantes restricciones impuestas a los derechos humanos en la práctica, el nuevo Estado soviético buscó legitimarse a través de una Constitución que consagraba derechos fundamentales, incluyendo el derecho al deporte.

Según la teoría alemana de las tres dimensiones de los derechos fundamentales, el derecho al deporte tiene una doble naturaleza: Una dimensión negativa, ello implica que el Estado debe abstenerse de intervenir o impedir la práctica deportiva individual de los ciudadanos y una dimensión positiva/social, la cual conlleva la obligación del Estado de otorgar a los ciudadanos las facilidades socioeconómicas necesarias para que puedan hacer deporte. Es decir, el derecho al deporte no se limita a un mero derecho civil de no interferencia estatal, sino que también tiene un carácter de derecho social, donde el Estado debe proveer los medios y oportunidades para que los ciudadanos puedan ejercer efectivamente este derecho.

Inicialmente, las constituciones no tendían a consagrar explícitamente un derecho al deporte, sino que más bien se referían al fenómeno de la educación física como parte de la educación pública integral; durante esta etapa inicial de sistematización indirecta del deporte en las constituciones (hasta 1968), el deporte se entendía más como un medio o componente de la educación pública en su dimensión física y armónica, sin llegar a reconocerse aún como un derecho autónomo.

Fue recién en 1968, con la Constitución de la República Democrática Alemana, cuando se incluyó de manera explícita el deporte entre los contenidos constitucionales, marcando un punto de inflexión en el reconocimiento del deporte como un derecho fundamental.

Asimismo, conforme al párrafo 2 del artículo 16º de la Constitución griega de 1975, la cultura, en su acepción de enseñanza, representa una misión primordial del Estado heleno, cuyo propósito, entre otros objetivos, es la instrucción física de los ciudadanos griegos; en este sentido, la gimnástica, es decir, la educación física,

constituye parte integral del proceso educativo en todos los niveles del sistema de enseñanza.

De igual forma, el párrafo n.º 09, señala que: “El deporte está bajo la protección y la supervisión superior del Estado. El Estado subvenciona y controla a las uniones de las asociaciones deportivas de todo género, según lo especificado por la ley, misma que, también estipula la disposición de los reforzamientos dados cada vez a las uniones subvencionadas según su destinación”.

La formulación neutral aquí empleada resulta típica de la consagración constitucional de los derechos de segunda generación, dado que, el legislador constitucional ha evitado deliberadamente introducir disposiciones explícitas en torno a los derechos sociales de los particulares. Resultaría menos complejo entonces, institucionalizar una competencia pública, incluso bajo la forma de una obligación especial del Estado, la cual normalmente se encontraría en estrecha conexión con el supuesto derecho de los interesados al disfrute de las actividades protegidas por las autoridades estatales.

Además, debemos señalar también que, el reconocimiento expreso y claro del derecho al deporte se concretó por primera vez en Latinoamérica, específicamente en la Constitución cubana de 1976, en su entonces artículo 51º (posterior a la reforma constitucional de 1992, su contenido íntegro pasó a ser el del artículo 52º), ubicado en el también entonces capítulo VI (actual capítulo VII, después de la reforma), denominado “Derechos, deberes y garantías fundamentales”, se reconoció, sin ambigüedad alguna, que: “Todos tienen derecho a la educación física, al deporte y la recreación”.

Con ello se dio inicio a una sistematización innovadora del deporte en las Constituciones que continuó con la Constitución portuguesa, promulgada también en el año 1976, que en su artículo 79º, inscripto en el capítulo III “Direitos e deveres culturais”, a su vez del título III “Direitos e deveres econômicos, sociais e culturais”, estableció que: “Todos têm direito à cultura física e ao desporto”; debe precisarse que, la prioridad histórica en el reconocimiento constitucional expreso del derecho al deporte corresponde a la Constitución cubana de 1976, a pesar de que un sector de la doctrina, en particular la europea, haya atribuido esta primicia a la Constitución portuguesa del mismo año.

En cuanto al ámbito latinoamericano pueden destacarse los casos de Perú (1979, artículos 38º y 255.3, y del cual nos encargaremos a detalle más adelante), Honduras (1982, artículos 123º y 174º), Guatemala (1985, artículos 91º y 92º), Nicaragua (1987, artículo 65º), Brasil (1988, artículos 24º y 217º), Colombia (1991, artículos 52º y 300º), Paraguay (1992, artículos 84º y 168º), nuevamente Perú (1993, artículo 14º), Ecuador (1998, artículos 49º y 82º), Venezuela (1999, artículos 111º, 184º y 272º), nuevamente Ecuador (2008, artículos 24º, 39º, 45º, 264º, 340º, 381º, 382º, 383º y en las disposición transitoria primera), Bolivia (2009, artículos 104º, 105º, 300º y 304º), República Dominicana (2010, artículo 65º) y, recientemente, México (con la reforma de 2011, en el actual artículo 40º.).

De esta forma, se logra apreciar que, se le ha otorgado una mayor atención constitucional al deporte, lo que nos permite afirmar que, el deporte, tanto en el contexto latinoamericano como en el internacional, es un contenido fundamental dentro del constitucionalismo contemporáneo, en constante progreso normativo.

Así pues, para entender la dimensión de la constitucionalización del deporte y su transformación jurídica en el siglo XXI, es necesario poner en contexto cual es la manifestación y su implicación en el desarrollo humano, en sus distintas formas; es que la consagración del deporte como un derecho fundamental guarda una estrecha relación con otros derechos que consagran y consolidan la democracia, como son: derecho a la vida, salud, educación integral, cultura, trabajo, igualdad, asociación y, por supuesto a la tutela judicial efectiva. Por eso, se hace tan necesaria la correcta interpretación constitucional en la vida deportiva de un Estado, y que se apegue a los supremos valores constitucionales para consolidar el Estado social, democrático y de derecho, evaluando, en primer término, los presupuestos de autonomía del derecho al deporte y su categorización en una de las categorías de los derechos fundamentales.

2.2.2.2.1. Autonomía normativa del Derecho al Deporte y su relación con el Derecho Deportivo

El deporte constituye, sin duda alguna, uno de los fenómenos sociales y económicos más importantes surgidos en los últimos 200 años; tanto en su vertiente de práctica personal, ocasional o cotidiana, como en su aspecto de espectáculo de masas, el deporte suscita el interés creciente de la población y en su entorno, genera un complejo entramado de relaciones jurídicas de singulares características no suficientemente estudiadas.

Así mismo, es factible abordar una definición legal del deporte, sin embargo, sería necesario saber con certeza cuando nos ubicamos frente a situaciones que les resulte aplicable el Derecho Deportivo; en ese sentido, existen autores como Real Ferrer, quien utiliza una posición institucionalista para definirlo, conforme a lo cual sería posible enmarcar a la actividad deportiva dentro de un aspecto legal normativo.

Siguiendo esta perspectiva, debido a la importancia con la que cuenta el deporte actualmente, los estados se han visto en la necesidad de otorgarle una correcta regulación, iniciando por las Constituciones; teniendo así, el Estado la obligación de cumplir con una de sus funciones relacionadas al deporte, como es la de fomentarlo.

Siendo así, toda institución, concebida como un grupo que cuenta con una idea directriz común y organizada jerárquicamente para concretarla, da lugar al nacimiento de normas jurídicas que constituyen el denominado ordenamiento; en este contexto, el ordenamiento jurídico de las instituciones deportivas se ha ido edificando a través de los años, exenta de toda intervención estatal, puesto que , todo ordenamiento jurídico dispone de una cierta medida de autonomía, que se distingue por un mínimo incomprensible de separación de otros sistemas de derecho.(Bielsa, 2003, p.26)

En ese orden de ideas, si queremos hablar respecto a la autonomía de este ordenamiento jurídico, es necesario comenzar por identificar los elementos que definen esta autonomía, como son, los presupuestos de la autonomía y la aparición de normas jurídicas diferentes a aquellas emanadas del poder estatal, denominadas para un mejor estudio, las normas deportivas.

2.2.2.2.1.1. Presupuestos de autonomía.

A nivel global, durante los últimos cien años, el deporte ha adquirido una perfecta organización en red, lo cual ha dado origen a un sistema jurídico originario y extra estatal, que prevé las más diversas relaciones jurídicas que se forman en torno a la práctica del deporte; asimismo, se puede decir que, dicho ordenamiento jurídico es originario, puesto que, no existe otro ordenamiento superior del que tome su legitimidad y en el cual se respalde para lograr imponer su coacción.

Su legitimidad deriva de su surgimiento voluntario y tradicional, así como del apoyo existente basado en conexiones deportivas que unen a individuos y organizaciones involucradas en el deporte global; por su parte, el carácter coercitivo, se encuentra en la posición de que, ese otorgamiento de poder, permite que el derecho del deporte proyecte su imperio sobre casi la totalidad de las relaciones jurídicas en el ámbito deportivo.

Sin embargo, actualmente, aún es debatible si existe un “derecho deportivo” como rama autónoma de la ciencia jurídica, de la cual, su estudio se logrará mediante la sistematización de sus conceptos y principios, así como la ordenación sistemática de las normas que lo integran.

La cuestión que trata esta investigación dejaría de tener sentido, si, en primer lugar, no aceptáramos la existencia de esa rama autónoma e independiente del derecho; sin embargo, la cuestión no es intrascendente, dado que nuestra postura se contrapone con la de aquellos que no ven en las normas jurídicas aplicadas al deporte sino la adecuación, a un hecho social contemporáneo, de normas provenientes de ramas del derecho ya existentes.

Ahora bien, es preciso citar a aquellos autores que comparten nuestra posición respecto a la autonomía aplicable al Derecho del Deporte; esta, es explicada por el maestro Real Ferrer (1991), el cual considera que, para que pueda reconocerse la autonomía a una disciplina jurídica, deberán concurrir ciertos elementos, los cuales son: un conjunto de principios propios, denominado también como autonomía conceptual o dogmática; así mismo, la existencia de un grupo de normas y relaciones homogéneas y finalmente, un ámbito de la realidad bien acotado (autonomía objetiva).

Los tres elementos mencionados en el párrafo anterior se encuentran a lo largo del estudio de esta investigación; el ámbito de la realidad bien acotado significa que, existe todo un conjunto de relaciones sociales, las cuales, por su naturaleza y especificidad, requieren y/o exigen un ordenamiento jurídico propio para alcanzar un determinado nivel de desarrollo; por otro lado, la existencia de un grupo de normas y relaciones homogéneas, presupone un conjunto de reglas, es decir, un conjunto sistemático de normas, el cual, deberá expresar al mismo tiempo una cierta homogeneidad, por cuanto este, pretende el pleno funcionamiento y mejora del deporte, pues regula relaciones que se dirigen al mismo fin. (Gil, 2001)

Por otro lado, autores como Palma Fernández, Cazorla Prieto y Rodríguez Bereijo, señalan que, para justificar la autonomía de una rama del Derecho, deben verificarse los siguientes criterios: Una base social diferencia sobre la que proyectar normas de un ordenamiento (denominado también como “Ámbito Social acotado”), unas normas que regulan específicamente dicho fenómeno social y principios generales de los que emanan las normas o reglas particulares (principios jurídicos propios).

Principalmente, analizaremos dos de los tres criterios mencionados anteriormente. El primer criterio, referente al ámbito social acotado, se refiere a un conjunto de relaciones sociales que, por su naturaleza y características, requieren un ordenamiento jurídico específico para su desarrollo; esto es evidente en el deporte, aunque no en todas sus manifestaciones, para encontrar la base social que demande un ordenamiento propio, no debemos buscarla en la práctica voluntaria de actividades físicas comunes realizadas por cualquier ciudadano con fines individuales, sino,

debemos enfocarnos en el denominado deporte de rendimiento²⁰, que es un proceso selectivo basado en la competición e incluye, además de los propios deportistas, a diversas personas físicas y jurídicas, entre otros.

Es por ello que, derivado del primer criterio surgen conceptos como sociedad deportiva y ciudadanos deportivos; cuando nos referimos a sociedad deportiva, estamos hablando de aquella que puede ubicarse en el deporte organizado federativo, local y/o internacional, en donde, el club o la asociación deportiva de primer grado, constituyen la base de una pirámide, en cuya cima se encuentran las federaciones deportivas internacionales, este conjunto de entidades deportivas al cual nos referimos, se constituye en un estilo de cuerpo social distinto a cualquier otro, y precisa de un conjunto de normas que regulen sus relaciones.

Antes de explorar el concepto de ciudadanos deportivos, es fundamental destacar que, a diferencia del ciudadano común, quien se sujeta a las leyes estatales desde su nacimiento sin haberlas elegido, el ciudadano deportivo opta por participar en la práctica deportiva. Esta elección implica que el individuo, al ejercer su actividad física, se somete a un ordenamiento colectivo que regula dicha práctica.

El ciudadano deportivo se define como la persona física que adopta el rol de deportista y obtiene su "carta de ciudadanía deportiva" al suscribir una licencia que lo habilita para practicar su deporte. Sin embargo, es crucial enfatizar que esta licencia, como acto de habilitación, establece una relación indirecta entre el deportista y la federación que la concede; para que esta relación se formalice, el deportista debe estar afiliado a una asociación deportiva, la cual, a su vez, está vinculada a una federación.

²⁰ Aguirre-Loaiza, H. H., Ayala, C. F., & Bermúdez, S. R. (2015). La atención-concentración en el deporte de rendimiento. *Educación física y deporte*, 34(2), 409-428.

A través de este sistema de afiliaciones, se llega a la cúspide, donde se encuentran las federaciones deportivas internacionales y el Comité Olímpico Internacional.

En relación a ambos conceptos, es preciso indicar que, no debemos confundir a quienes verdaderamente son considerados como ciudadanos deportivos o deportistas que forman parte de una sociedad deportiva; por ejemplo, los dirigentes deportivos, no se encuentran vinculados al ordenamiento jurídico deportivo, puesto que, el hecho de contar con un contrato de asociación de un club, en su mayoría asociaciones civiles sin fines de lucro, no significa que, necesariamente que sus socios se encuentren sometidos a las normas jurídicas de otra asociación; por su parte, los entrenadores deportivos tampoco forman parte de esta sociedad deportiva, puesto que, contar con un contrato de trabajo y/o la especialidad de la tarea de estos, vinculada a la participación deportiva de su empleador, no es vínculo jurídico suficiente para hacerlo partícipe de la sociedad deportiva, se podría decir que, pertenece a esta, pero únicamente de hecho; finalmente, respecto a los árbitros deportivos, los cuales son contratados bajo diversas modalidades de contratación, para ejercer la tarea de aplicar, dentro del terreno, campo y/o espacio de juego, las normas del ordenamiento jurídico deportivo; estas modalidades, si no se encuentran acompañadas de una autorización para la práctica deportiva, entonces, no podría considerárseles como ciudadanos deportivos.

Respecto al tercer criterio para justificar la autonomía de una rama de la ciencia jurídica, los principios generales de los que emanan las normas o reglas particulares o denominados también, principios jurídicos propios, es preciso indicar que, para que una rama del derecho pueda existir de forma autónoma e identificable, debe contar con principios jurídicos que inspiren al creación de normas; siendo así, ha jugado un papel trascendental la jurisprudencia del Tribunal Arbitral du Sport o

Tribunal de Arbitraje Deportivo (en adelante TAS), en el descubrimiento de principios rectores del Derecho del Deporte, el cual ha clasificado los principios en mención, en tres categorías principales, los principios de organización sustancial de la actividad deportiva competitiva, los principios organización institucional y los principios de organización normativa; contribuyendo así a una concreción idónea del concepto de sociedad deportiva.

Por otro lado, el autor argentino Pablo Barbieri (2005), reconoce implícitamente la autonomía de esta rama del derecho, cuando sostiene que: “El Derecho Deportivo es la Rama del Derecho que se ocupa del estudio de las relaciones jurídicas derivadas del deporte”; de dicha afirmación se han logrado extraer ciertos contenidos tales como: Derecho de imagen del deportista, daños y perjuicios derivados de la práctica del deporte, régimen jurídico de los deportistas amateurs y profesionales, entre otros.

Cabe precisar también que, tal y como se mencionó en párrafos anteriores, parte de la doctrina internacional, niega la existencia del derecho del deporte, y con ello, el carácter autónomo del mismo, basado principalmente en el hecho que, se encuentra desprovisto de principios, categorías y conceptos propios, puesto que, la regulación deportiva, se nutre de las distintas ramas del derecho como el derecho civil, comercial, laboral y administrativo.

Sin embargo, citando lo sostenido por el autor español Juan Barrachina (2001): “el derecho deportivo pugna por ser autónomo en el ordenamiento jurídico a pesar de estar integrado por normas que proceden del Derecho Civil, Derecho Administrativo y Derecho Laboral”; bajo nuestro análisis, consideramos que, con el tiempo y el aporte jurisprudencial y legislativo suficiente, no existirá duda que, este

conjunto particular de reglas, adquirirá personalidad propia, tendrá principios generales propios, y se volverá tan peculiar, comparado con el resto del ordenamiento jurídico nacional e internacional.

No podemos dejar de lado que, el deporte ha nacido y se ha desarrollado a espaldas del Estado, estableciendo una comunidad a nivel mundial, en cuya cima se encuentran las Federaciones Deportivas Internacionales, las cuales, para asegurar su permanencia a lo largo del tiempo, tiene como laborar principal elaborar reglas para el ejercicio y organización del deporte; dando origen de esta forma a un Derecho Deportivo, un derecho que no es igual a ningún otro conocido actualmente.

No obstante, en la actualidad, el ordenamiento deportivo no puede distanciarse de las normas estatales, dado que ambos conforman una unidad estructurada, intransigente y con un propósito común. Esta interconexión permite identificar dos esferas lo suficientemente sólidas como para legitimar el derecho del deporte como una rama autónoma dentro del sistema jurídico.

Dicho ello también, hace notar que, el Derecho Deportivo, presenta una dicotomía público-privada en la generación de sus normas, puesto que, algunas de ellas, provienen de la actividad legislativa del Estado y otras surgen en instituciones privadas que reglamentan el desarrollo del deporte; en razón de ello, no podemos clasificarlo ni dentro del derecho público ni dentro del derecho privado, puede decirse que es un derecho de naturaleza mixta, radicando allí un sustento más para reafirmar su autonomía.

Por lo tanto, sostenemos que este incipiente Derecho Deportivo, cuyo estudio comenzó hace apenas una década, ha alcanzado un desarrollo tan significativo que sería erróneo cuestionar su autonomía, y mucho menos su existencia como tal.

2.2.2.2. *El derecho humano a la práctica del deporte.*

Reconocer derechos a nivel legal o constitucional ciertamente ha sido más sencillo que asegurar los mecanismos y garantías necesarios para que esos derechos puedan ser realmente exigibles y protegidos en la práctica. Muchas veces, el mero reconocimiento formal en los textos legales no va acompañado de los recursos, instituciones y procedimientos adecuados para que las personas puedan ejercer y defender esos derechos de manera efectiva.

Efectivamente, el simple reconocimiento formal de derechos en leyes, tratados o procedimientos legales se ha convertido en una manera relativamente sencilla para que los actores políticos puedan expresar su preocupación y compromiso nominal con los derechos humanos; sin embargo, este reconocimiento normativo no necesariamente va acompañado de las garantías y mecanismos reales que se requieren para que esos derechos puedan ser efectivamente exigibles y protegidos.

En ese contexto, la mera expectativa de que un derecho sea respetado se convierte más bien en un reclamo y una defensa, ya que los derechos suelen ser amplios, ambiguos o complejos, lo que lleva a largas disputas en diversos ámbitos antes de que puedan ser implementados de manera concreta en el sistema jurídico, a pesar de que deriven de la propia naturaleza humana.

Por lo tanto, existe una expectativa formal de que los derechos humanos estarán garantizados en las normas nacionales e internacionales que conforman el sistema legal de los países. No obstante, lamentablemente, la realidad demuestra que esto no siempre se cumple en la práctica de manera efectiva.

En otro orden de ideas, algunos derechos reconocidos suelen ser tan amplios, ambiguos o complejos, que requieren de largos debates y procesos para definir su

alcance y contenido concreto antes de poder materializarlos en el mundo jurídico, a pesar de que esos derechos sean inherentes a la naturaleza humana. Esto evidencia que el reconocimiento normativo no es suficiente por sí solo, sino que se necesitan garantías y mecanismos firmes para que los derechos humanos dejen de ser solo retórica y se vuelvan realidades concretas y efectivas para todas las personas.

Así pues, el reconocimiento de los derechos es el primer paso para formalizar en derecho las acciones, bienes, costumbres y condiciones de las personas, porque aquí es donde comienza el proceso, dado que el siguiente paso depende en gran medida de la ley aplicable, por tanto, no es posible generalizar si la implementación es fácil o difícil en todos los casos.

En el caso específico del derecho a la práctica del deporte, que es el derecho humano relevante para esta investigación, el desarrollo de este ámbito se inició a nivel internacional con la aprobación de la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte el 21 de noviembre de 1978, este documento fue aprobado en el marco de la 20ª reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); sin embargo, la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte no puede ser clasificada jurídicamente como un tratado internacional, por lo tanto, su aprobación no genera obligaciones internacionales de carácter jurídico vinculante para los Estados que la adoptaron; en su lugar, la Carta establece únicamente deberes de carácter genérico y político, así como un respaldo moral de la comunidad internacional hacia el reconocimiento del derecho a la práctica deportiva. En dicha Carta, de manera expresa, en cuanto a lo que a la investigación interesa, se establece: 1.1. Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física y al deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad. El derecho a desarrollar las facultades físicas,

intelectuales y morales por medio de la educación física y el deporte deberá garantizarse tanto dentro del marco del sistema educativo como en el de los demás aspectos de la vida social.

Aún antes de la aprobación de la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte de 1978, en el marco del Consejo de Europa se había aprobado en 1975 en Bruselas la Carta Europea Deporte para Todos; esta Carta, si bien no tenía la misma claridad que la del año 1978, también tenía una naturaleza declarativa y no vinculante jurídicamente. En su artículo 1º, la Carta Europea establece que "Todo individuo tiene derecho a participar en el deporte", sin embargo, el término "participar" resulta más amplio y ambiguo, ya que podría incluir tanto actividades deportivas activas como pasivas de espectador.

Por lo tanto, si bien destacamos la importancia de la existencia de este antecedente, consideramos que la forma en que se reconocía el derecho al deporte en esta Carta Europea no era tan precisa y contundente como en la Carta Internacional de 1978.

Posteriormente, el 24 de septiembre de 1992, el Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó la Carta Europea del Deporte. Esta Carta tiene una redacción prácticamente idéntica a la Carta Europea Deporte para Todos de 1975, pero con la inclusión de tres descripciones sobre lo que se entiende por "participar" en el deporte; de igual forma, se establece de manera expresa que la práctica del deporte es un derecho de todas las personas. Al igual que los documentos anteriores, esta Carta Europea del Deporte tampoco tiene la naturaleza jurídica de un tratado internacional, por lo que no es legalmente vinculante, sin embargo, este documento sí

establece compromisos que deben asumir los 47 Estados europeos que participan en el Consejo de Europa, a pesar de carecer de fuerza jurídica obligatoria.

Posterior a los documentos anteriores de 1975 y 1992, en el año 1996 la Carta Olímpica incluyó por primera vez en su texto, como octavo principio fundamental, lo siguiente: "La práctica del deporte es un derecho humano. Toda persona debe tener la posibilidad de practicar deporte sin discriminación de ningún tipo y dentro del espíritu olímpico, que exige comprensión mutua, espíritu de amistad, solidaridad y juego limpio"; cabe mencionar que el texto más actualizado de la Carta Olímpica, el de 2011, mantiene esta declaración sobre el deporte como un derecho humano.

Ninguno de los tratados internacionales de derechos humanos, ya sean de alcance global o regional, reconoce de manera expresa que la práctica del deporte sea un derecho humano; Lo más cercano a dicho reconocimiento son las disposiciones contenidas en dos convenciones de las Naciones Unidas: La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en sus artículos 10º y 13º, que abordan el acceso de las mujeres a la educación física y al deporte; y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en su artículo 30º, que trata sobre la participación de las personas con discapacidad en actividades recreativas, artísticas y deportivas; sin embargo, estas convenciones no establecen de manera explícita que el deporte sea un derecho humano fundamental, sino que lo enmarcan en el contexto de la no discriminación y la igualdad de oportunidades.

Si bien no se declara de manera expresa el derecho al deporte como un derecho humano fundamental, estas disposiciones de los tratados internacionales implican que toda persona, sin discriminación, tiene el derecho a acceder y practicar el deporte; es decir, el derecho al deporte se reconoce de manera implícita, aunque no

como un derecho autónomo, sino como un derecho específico vinculado a la no discriminación y la igualdad de oportunidades.

No obstante, ninguno de estos tratados internacionales ha llegado al punto de reconocer de forma explícita e independiente el derecho a la práctica del deporte como tal, sigue sin existir un reconocimiento expreso y autónomo del derecho al deporte en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Es posible que la falta de un reconocimiento expreso del derecho a la práctica del deporte en los tratados internacionales de derechos humanos se deba a dos razones: La responsabilidad que conlleva el reconocimiento de este derecho, lo cual podría explicar la renuencia a incluirlo de manera explícita; y la consideración de que no es necesario un reconocimiento formal y detallado de este derecho, tal vez porque se lo subsume dentro de otros derechos o porque se entiende implícitamente.

Si bien es cierto que, en los textos constitucionales de diversos países, tanto en América como en Europa, se menciona el tema del deporte, el enfoque predominante no es el de reconocerlo como un derecho de las personas, sino más bien como un deber del Estado o de ciertas autoridades en cuanto a su fomento, promoción y subvención; en esta investigación, proporcionamos una amplia lista de ejemplos de constituciones que recogen el deporte en esos términos, como una responsabilidad de los poderes públicos, pero no como un derecho subjetivo de los ciudadanos; entre los países mencionados se encuentran Brasil, Bulgaria, Chile, España, Guatemala, Grecia, Honduras, Hungría, Panamá, Paraguay, Rumania, Turquía, Ucrania y Suiza.

Por otro lado, hay investigadores que consideran que los mandatos constitucionales dirigidos a los poderes públicos para fomentar, apoyar y subvencionar el deporte, como ocurre en el caso de España, cumplen una función

similar a la de las normas que reconocen el derecho a la práctica deportiva de manera explícita; esto forma parte importante de los debates sobre el reconocimiento de los derechos fundamentales, aunque no es el foco central de esta investigación.

A pesar de eso, no se comparte esa posición desde un punto de vista estrictamente jurídico-constitucional, debido a que, esos mandatos constitucionales ven al deporte como un objeto que el Estado debe desarrollar y del cual sólo se pueden beneficiar algunas personas, como parte de una política pública o como herramienta para alcanzar otros derechos. Es decir, no lo asumen como un derecho que se deba garantizar a toda persona; de igual forma, estos mandatos no establecen el contenido esencial del derecho a la práctica deportiva, ni quiénes serían sus destinatarios, ni cuáles serían sus alcances y límites, tal como sí debería hacerse en el caso de un reconocimiento expreso del deporte como un derecho humano.

Queda entonces que, a pesar de que la mayoría de las constituciones de los países mencionados, se enfocan en el deber estatal de fomentar y promover el deporte, existe un menor número de países que han dado el paso de reconocerlo expresamente como un derecho fundamental de los ciudadanos. Su análisis se concentrará en fundamentar por qué el deporte debería tener ese estatus de derecho humano, al menos en el contexto peruano.

2.2.2.2.3. *Concepción constitucional del Derecho al Deporte en la Constitución Política del Perú.*

Debemos recordar que, el primer paso para la constitucionalización del deporte en el Perú, lo brindó la constitución de 1979, en su capítulo IV (referido a la educación, ciencia y cultura), cuyo artículo 38º indicaba: “«El estado promueve la

educación física y el deporte, especialmente en que no tiene fines de lucro. Le asigna recursos para difundir su práctica”.

En una primera etapa, el Estado Peruano se había enfocado en el deporte principalmente como una actividad de entretenimiento, en su esfera no lucrativa, esto se evidencia en la promulgación de la primera Ley General del Deporte, bajo el amparo de la Constitución de 1979, la cual, fue posteriormente sustituida en una primera fase por la Ley N.º 27159, también conocida como la Ley General del Deporte; y en una segunda etapa, ya definitiva por la legislación deportiva actual, con la Ley N.º 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte.

En esa primera aproximación al deporte por parte del Estado, centrada en su aspecto de entretenimiento y ocio no lucrativo, demuestra que en aquella época el enfoque estatal sobre el deporte era más limitado, sin considerar aún otras dimensiones más amplias del fenómeno deportivo; en ese orden de ideas, algunos autores, afirman sobre el deporte que: «ha dejado de ser una mera manifestación de la capacidad lúdica del ser humano, convirtiéndose en un fenómeno complejo que caracteriza a la sociedad en que vivimos» (Carreño, 2009, p.112-113), y se ha convertido en una de las razones primordiales de protección por el derecho.

Coincidimos en esta investigación con dicha afirmación, y también señalamos que, el Estado, en consonancia con los principios constitucionales, reafirma su apoyo al deporte de formación, es decir, aquel que las personas practican como medio de desarrollo integral, pues no solo forma el cuerpo, sino también el alma; así pues, el deporte entendido desde esta perspectiva educativa tiene importantes repercusiones sociales y contribuye al desarrollo de valores; por su parte, en su faceta cultural, el

deporte se vincula con derechos como la libertad, la búsqueda de la realización personal y el pleno conocimiento de nuestra personalidad.

Sin embargo, el texto señala que la acepción del deporte es más amplia que esta dimensión formativa y cultural, puesto que, no podemos negar que la actividad deportiva tiene implicaciones en múltiples ámbitos jurídicos, como el civil, penal, administrativo, internacional, procesal, laboral, entre otros. (Osterling, F. y Castillo, M, 2003)

El deporte no solo tiene relevancia en los ámbitos culturales y educativos, sino que también genera implicaciones jurídicas en materia de responsabilidad, tanto en el campo del derecho civil como del derecho penal. Por lo tanto, la dimensión jurídica del deporte va más allá de estos aspectos y debe ser examinada de manera integral y con un enfoque constitucional a través de los derechos fundamentales en mención, prestando especial atención a las cuestiones de responsabilidad que puedan surgir en el marco de la actividad deportiva, pues la situación actual es que numerosos accidentes no se imputa la responsabilidad del mismo a nadie (Piñeiro, 2008), siendo esto una vulneración al derecho fundamental de la integridad física y a la vida.

No debemos olvidar la responsabilidad del Estado en brindar oportunidades a todo ser humano que lo necesite para insertarse en la vida a través del trabajo, el Estado debe otorgar estas oportunidades no solo a través de la educación, sino también del deporte; en la medida en que se niegue esta posibilidad al ciudadano, este se encontrará habilitado para exigirla.

En otras palabras, la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso de todos los ciudadanos a oportunidades de desarrollo, ya sea a través del trabajo, la educación o el deporte, si el Estado incumple con esta responsabilidad, los ciudadanos

estarán habilitados para exigir el cumplimiento de este deber y es bajo el principio de solidaridad humana que se puede asegurar una sociedad verdaderamente desarrollada. (Salazar, 2005)

Ahora bien, en la Constitución Política del Perú de 1993 se reconocen una serie de derechos fundamentales, los cuales, a través de un análisis estructurado de las normas constitucionales (García, 1998), podemos comprender el verdadero contenido del artículo 2°, el cual establece que "Toda persona tiene derecho: 1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar [...]". Los fundamentos de este artículo constituyen la base del trabajo presentado y del deporte como un derecho constitucionalizado; el texto afirma que el derecho a la vida es uno de los pilares fundamentales en los que se sustentan varios otros derechos. Además, el derecho a la vida no se limita a una prohibición de matar", sino que tiene un contenido integral, es decir, el derecho a la vida va más allá de la mera preservación física y abarca aspectos como la identidad, la integridad moral, psíquica y física, así como el libre desarrollo y bienestar de la persona.

En ese sentido, el primer apartado del artículo 14° de la Constitución Peruana establece que "La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte". La investigación presentada se enfoca específicamente en los dos últimos términos mencionados: la educación física y el deporte; se indica que ambos buscan mantener en las mejores condiciones nuestro propio organismo. (Rubio, 1999)

Por un lado, se define la educación física como el conocimiento teórico y aplicado sobre el propio cuerpo y el entorno en que se desarrolla (Bernaes, 1999, p. 222), pues educar al cuerpo implica autoconocimiento, conservación de la salud física

y la promoción del máximo bienestar posible a las personas. Por otro lado, se afirma que el deporte es un medio de realización que permite alcanzar el bienestar y desarrollo, beneficiando al individuo y a la comunidad mediante la disciplina, valores, compromisos, y metas. (Varsi-Rospigliosi, 2008, p.79)

A estos planteamientos, agregamos lo analizado en los diferentes escenarios, hechos y situaciones deportivas que ha atravesado el país, así como las dificultades para implementar programas de deporte para todos; por ello, se reafirma la necesidad de fortalecer las instituciones legales en materia deportiva, bajo el amparo constitucional.

De ello, podemos colegir que, el deporte cumple un rol importante en la vida social, existiendo una relación indisoluble entre el deporte y el Estado; esto se refleja en el fundamento 16 de la sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N.º 03574-2007-PA/TC-LIMA, que establece: "La finalidad de la educación es lograr el desarrollo integral de la persona humana a través de instrumentos como el deporte. Dicha actividad está orientada a desarrollar y mantener nuestro organismo en las mejores condiciones, a efectos de alcanzar no sólo mejoras físicas y biológicas, sino también intelectuales y espirituales".

Asimismo, se afirma que uno de los fines de la currícula nacional es "la estimulación de la práctica de los deportes, que capacite para el desarrollo físico". (García, 1998, p.146) Esto permite inferir que la educación, a través del deporte, tiene una proyección social como parámetro de desarrollo humano (Capcha, 2013); por tanto, el deporte en el Perú, es considerado un indicador estimulante para la personalidad humana y uno de sus roles fundamentales es el educativo, junto a otros derechos conexos.

2.2.2.2.4. *Concepción constitucional del Derecho al Deporte en el Derecho Comparado.*

Es importante indicar que, a nivel internacional, el deporte ha sido considerado un facilitador de la paz, el desarrollo y la protección de los derechos humanos, tal es así que, algunas Organizaciones Internacionales (OOII), han identificado al deporte como una actividad útil para la consecución de ciertos objetivos propios del Derecho Internacional contemporáneo. Algunos de estos objetivos mencionados son:

- La paz: El deporte se considera una herramienta que puede contribuir al logro de la paz a nivel internacional.
- El desarrollo: El deporte se reconoce como una actividad que puede promover y facilitar el desarrollo de las personas y las comunidades.
- La promoción de los derechos humanos: El deporte se identifica como un mecanismo que puede ayudar a la promoción y protección de los derechos humanos a nivel global.

El caso de las Naciones Unidas (ONU) es paradigmático en cuanto al reconocimiento del deporte como una herramienta útil para el desarrollo y la paz. Algunos aspectos a destacar: La ONU contó durante un tiempo con una Oficina del Deporte para el Desarrollo y la Paz, evidenciando su interés en este ámbito. En 2008, el Secretario General de la ONU nombró a un asesor especial sobre esta cuestión, reforzando su compromiso; sin embargo, el 4 de mayo de 2017, el Secretario General anunció el cierre de la Oficina del Deporte, lo que generó críticas por parte de algunos sectores.

Sin embargo, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas también reconoce el potencial del deporte como un "facilitador" de la paz y el entendimiento a nivel internacional, teniendo como aspectos claves, afirmar que el deporte contribuye cada vez más a hacer realidad el desarrollo y la paz, promoviendo la tolerancia, el respeto, el empoderamiento de mujeres, jóvenes y comunidades, así como los objetivos en materia de salud, educación e inclusión social. Esto refleja un consenso en torno a la idea de que el deporte es una herramienta muy útil que puede ayudar a impulsar y concretar los esfuerzos de la Comunidad Internacional para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la Agenda 2030.

De igual forma, se reconoce que el deporte tiene un carácter transversal, lo que le permite servir a la consecución de varios de los objetivos planteados en la Agenda 2030, más allá de su dimensión puramente deportiva, siendo algunos de estos, los siguientes:

- Objetivo 3 - Salud y bienestar: El deporte tiene una clara vinculación con este objetivo, al contribuir a la mejora de la salud física y mental de las personas.
- Objetivo 4 - Educación de calidad: El deporte debe ser considerado como parte integral de una educación de calidad, inclusiva y equitativa, ya que puede aportar importantes beneficios en este ámbito.
- Objetivo 5 - Igualdad de género: El deporte puede servir como una herramienta eficaz para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas.
- Objetivo 16 - Paz, justicia e instituciones sólidas: El deporte puede contribuir a la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas, fomentando valores como el respeto, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos.

El vínculo entre el deporte y la promoción de los derechos humanos ha sido explícitamente reconocido y reivindicado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Específicamente, el Consejo de Derechos Humanos ha instado, a través de sus resoluciones, a la promoción del conocimiento, la comprensión y la aplicación de la Declaración Universal de Derechos Humanos mediante el deporte y el ideal olímpico, esto significa que el Consejo de Derechos Humanos ha hecho un llamado expreso a utilizar el deporte y los valores olímpicos como herramientas para difundir y hacer efectivos los principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Por su parte, en nuestra opinión, la UNESCO constituye hoy en día la organización internacional más relevante en el ámbito de la cooperación en materia de deporte, por dos razones específicas: Por un lado, debido a la amplitud de cuestiones que se han abordado en su seno; es decir, la UNESCO ha tratado una gran variedad de temas relacionados con el deporte en el marco de su trabajo. Por otro lado, debido al grado de integración de las autoridades deportivas en los esquemas de cooperación formalizados por la Organización, esto significa que las autoridades deportivas están fuertemente involucradas y participan activamente en los esquemas de cooperación impulsados por dicha organización internacional.

Se debe destacar también que, en relación con el papel de la UNESCO en el ámbito deportivo, esta se ha sumado al consenso sobre la utilidad del deporte como una herramienta que promueve la paz, ayuda a la resolución de conflictos, y fomenta la integración social y el desarrollo económico en diferentes contextos geográficos. Asimismo, la UNESCO se ha involucrado en la promoción de la igualdad y la lucha contra la discriminación de género en el deporte. Es decir, la UNESCO reconoce el valor del deporte como un instrumento para promover la paz, resolver conflictos,

fomentar la inclusión social y el desarrollo económico, así como para impulsar la igualdad de género en el ámbito deportivo.

En otro orden de ideas, es preciso referirnos a otra organización internacional que ha generado aportes de manera significativa al deporte a nivel internacional, como es el Consejo de Europa. Esta organización fue la primera organización internacional que identificó el deporte como un ámbito que requería reforzar la cooperación internacional a nivel regional; el trabajo realizado por esta, en dicho sentido ha sido verdaderamente fructífero, dando como resultado un conjunto de tratados internacionales que imponen obligaciones a los Estados miembros para erradicar ciertos fenómenos que afectan negativamente a la práctica deportiva, la salud de los deportistas y el disfrute de los aficionados; así pues, el Convenio europeo contra el dopaje en el deporte fue adoptado el 16 de noviembre de 1989 y completado unos años más tarde por el Protocolo adicional de 12 de septiembre de 2002.

Finalmente, a medida que se avanza en esta investigación se va perfilando la idea del papel crucial que tiene el Estado a la hora de promover, garantizar y proteger el derecho al deporte; este se convierte, así, en el principal promotor del fenómeno deportivo, la manera en que esta misión estatal se concreta y se lleva a cabo varía dependiendo de cada nación y de cómo se percibe el deporte en las respectivas Constituciones.

En el derecho constitucional comparado, el derecho al deporte suele estar anexo a otro derecho, como el derecho a la educación, a la salud, al ocio o al esparcimiento, o también puede ubicarse como un derecho fundamental autónomo. Es decir, el derecho al deporte puede estar contemplado de forma anexa a otros derechos o bien con la categoría de derecho fundamental independiente, dependiendo

de cómo se ha regulado en los diferentes ordenamientos jurídicos nacionales. Teniendo en cuenta lo anterior, seleccionamos cuatro ordenamientos jurídicos comparados que dan luces de la importancia del derecho al deporte

2.2.2.2.4.1. España.

El caso de España merece una mención especial en esta investigación, debido al gran desarrollo que ha experimentado en materia deportiva en los últimos 30 años. La máxima norma del ordenamiento deportivo español se encuentra en el artículo 43º, numeral 3, de la Constitución de 1978, que establece lo siguiente: "Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del tiempo de ocio." Es decir, la Constitución española establece que los poderes públicos tienen la obligación de fomentar la educación física, el deporte y la adecuada utilización del tiempo de ocio por parte de la ciudadanía.

El precepto constitucional que establece la obligación de los poderes públicos de fomentar la educación física, el deporte y la adecuada utilización del tiempo de ocio, fue una novedad introducida por los constituyentes españoles de 1978. Esta inclusión en la nueva Constitución española no resultó sorprendente, ya que el año anterior se había celebrado la Asamblea General del Deporte en Madrid, en la cual, diversos participantes habían defendido la necesidad de constitucionalizar el derecho al deporte, de modo que los ciudadanos pudieran exigir al Estado los equipamientos y ayuda necesaria para poder ejercer este derecho. (Blanco, 2006, p.46)

En los años posteriores a la aprobación de la Constitución de 1978, el legislador español se encargó de profundizar y desarrollar la normativa deportiva. La primera expresión de este proceso fue la aprobación de la Ley 13/1980, conocida como

la Ley General de Cultura Física y Deporte, esta ley consagró los principios básicos que rigen la actuación de los poderes públicos y las entidades territoriales en materia deportiva, así como la integración de la educación física en el sistema educativo (Spartero, 2009, p.72)

La ley también estableció que el órgano encargado de la gestión deportiva a nivel estatal es el Consejo Superior de Deportes, el cual opera de manera descentralizada y cuenta con una estructura participativa que involucra a todos los estamentos deportivos y administraciones territoriales (Blanco, 2006, p.56); además, se otorgó a las federaciones deportivas un papel instrumental como colaboradoras del poder público.

Posteriormente, la Ley 13/1980 fue modificada por la Ley 10/1990, conocida como la Ley del Deporte; si bien esta nueva ley mantuvo los principios y la estructura orgánica de la anterior, profundizó en el desarrollo de normativa dirigida a reforzar la enseñanza de la educación física como parte integral de la formación educativa, así como en la regulación del deporte profesional y de espectáculo.

Además de la legislación principal que se ha mencionado, el ordenamiento jurídico deportivo español se complementa con una serie de normativas adicionales, entre las que se destacan:

- El Real Decreto 1835/1991 sobre Federaciones Deportivas Españolas: Esta norma regula el funcionamiento y la organización de las federaciones deportivas a nivel nacional.
- El Real Decreto 1591/1992 sobre Disciplina Deportiva: Esta norma establece el régimen disciplinario aplicable a las infracciones cometidas en el ámbito deportivo.

- El Real Decreto 1363/2007 que establece la Ordenación General de las Enseñanzas Deportivas: Esta norma regula la formación y capacitación de los profesionales del deporte.
- El Real Decreto 971/2007 sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento: Esta norma define los criterios y mecanismos de reconocimiento y apoyo a los deportistas de élite en España.

El encuadramiento sistemático del artículo 43º de la Constitución española, relativo al derecho a la cultura física y el deporte, mencionado en los párrafos anteriores, es el siguiente:

- Ubicación en el texto constitucional: El artículo 43º se encuentra en el Capítulo III "De los principios rectores de la política social y económica" del Título I "De los derechos y deberes fundamentales".
- Eficacia y exigibilidad de los principios rectores: El artículo 53.3 de la Constitución establece que el reconocimiento, respeto y protección de los principios recogidos en el Capítulo III "informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos". Sin embargo, este mismo artículo señala que los principios rectores sólo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo a lo que dispongan las leyes que los desarrollen.
- Debate sobre la eficacia directa o indirecta del precepto constitucional: Existe un debate sobre si el artículo 43º reconoce un derecho de crédito de los ciudadanos frente a los poderes públicos, que les permita exigir conductas específicas. Según el profesor Ferrer, los principios rectores obligan a los poderes públicos en beneficio de los ciudadanos, pero no permiten que estos exijan por sí solos conductas concretas, tales derechos de crédito solo podrán

ser reclamados cuando se hayan desarrollado y conformado en la ley. (Casero, 1923, p. 1284-1288)

La interpretación sistemática del texto constitucional, nos permite afirmar que el artículo 43^o, que reconoce el derecho a la cultura física y el deporte, forma parte del "derecho de protección a la salud" en el contexto constitucional español. A ello, cabe agregar, la Interpretación realizada por el Tribunal Supremo, mismo que, en una sentencia del 23 de marzo de 1988, estableció que el artículo 43.3 de la Constitución española no consagra ciertamente un derecho al deporte, sino únicamente establece su fomento público.

Ambas interpretaciones, concluyen en que el artículo 43.3 tiene una eficacia indirecta, en el sentido de que no consagra un derecho subjetivo al deporte, sino que impone a los poderes públicos la obligación de promover y fomentar la práctica deportiva; los ciudadanos no pueden exigir conductas específicas de forma directa, sino que dependen del desarrollo normativo que realicen los poderes públicos.

En ese orden de ideas, si bien el ordenamiento constitucional español no consagra un derecho subjetivo al deporte, exigible directamente por los ciudadanos, la inclusión del deporte en la Constitución tiene importantes implicaciones jurídicas y ha influido en la conformación del ordenamiento jurídico-deportivo, en línea con los principios constitucionales.

Finalmente, podemos hacer las siguientes observaciones sobre el término "deporte" y las diferentes manifestaciones que engloba, dentro de la normativa española; en primer lugar, existe una duda sobre si los poderes públicos deben fomentar todas las manifestaciones del deporte (deporte popular, federado, profesional, etc.) o si están limitados a solo algunas de ellas; de igual forma, existe una

Controversia en torno al deporte espectáculo, es decir, aquel deporte que tiene un carácter más profesionalizado y comercial.

Ahora bien, debido a una interpretación más amplia del artículo 43.3 de la Constitución española, la doctrina ha entendido que la Constitución española engloba todo el deporte dentro de dicho artículo, sin hacer distinciones o matices; esto se justifica en que todo tipo de manifestación deportiva contiene elementos que justifican la intervención del poder público.

Por lo tanto, el fomento del Estado debería estar asociado a garantizar un piso mínimo para que las personas puedan desarrollar actividad deportiva y aportar positivamente a su salud, lo cual se relaciona más con el deporte popular.

2.2.2.2.4.2. Cuba

En los párrafos siguientes, cuando se haga referencia a "la Constitución cubana", se entenderá que se está hablando de la Constitución de 1976, a menos que se indique expresamente que se trata de la Constitución de 2019.

Así pues, procedemos a analizar la Constitución de la República de Cuba de 1976, reformada en 1978, 1992 y 2002, que ya no se encuentra vigente, y a hacer una breve mención de la nueva Constitución de 2019 y sus principales innovaciones en relación con el tratamiento del derecho al deporte.

La Constitución de 1976 es de gran trascendencia histórica, ya que fue uno de los primeros textos constitucionales a nivel mundial en consagrar el derecho al deporte. Si bien esta Constitución ya no se encuentra vigente, es relevante analizarla debido a su importancia en el desarrollo del reconocimiento constitucional del derecho al deporte.

Posteriormente, se hará una breve alusión a la nueva Constitución cubana de 2019, haciendo énfasis en sus principales innovaciones en la materia tratada en este trabajo, con el fin de identificar las mejoras que presenta respecto del texto original de 1976.

La consagración del deporte en la Constitución cubana es bastante particular, ya que dicho texto constitucional no define específicamente lo que se entiende por servicio público; esto es relevante, dado que las prestaciones deportivas y recreativas podrían ser consideradas dentro de la categoría de servicios públicos, entendidos como actividades de la Administración Pública para alcanzar sus fines.

El autor Yomisel Galindo (2017) señala acertadamente que cuando las constituciones contemplan directamente a los servicios públicos, se genera una mayor calidad en dichas prestaciones, estableciéndose un mínimo exigible por los ciudadanos y la obligatoriedad estatal de cumplir a cabalidad con dicho nivel de prestación, de esta manera, los servicios públicos se convierten en una garantía respecto de los derechos de los ciudadanos. (p.45)

Si bien la legislación cubana no contiene una definición expresa de servicio público como tal, es posible inferir su existencia a partir de los artículos 14º, 15º y 17º de la normativa aplicable. Atendiendo a los elementos y características de determinadas actividades, se puede clasificar la actividad deportiva como un servicio público.

En Cuba, el deporte y la actividad física son considerados de interés público, sin importar si son ofrecidos por entidades estatales, particulares o empresas privadas. Esto se debe a que la práctica deportiva es fundamental para mejorar la salud física y mental de las personas, y se reconoce como una necesidad social.

La Constitución de la República de Cuba, en su artículo 9º inciso b), establece que el Estado, como representante del pueblo y a su servicio, garantiza el acceso universal a la educación, la cultura y el deporte. Asimismo, define la titularidad estatal sobre los centros científicos, sociales, culturales y deportivos, tal como se indica en el artículo 15º inciso b) y se reafirma en el artículo 39º inciso c). Este último es particularmente importante, ya que aborda la responsabilidad del Estado cubano de promover la educación patriótica y la formación comunista, integrando la educación general con modalidades como la educación física y el deporte. Además, el artículo 39º inciso h) reafirma la obligación del Estado de guiar, fomentar y promover la cultura física y deportiva para garantizar una formación integral de los ciudadanos.

Por último, el artículo 43º establece la igualdad de acceso de todos los ciudadanos, sin distinción de raza, color de piel, creencias religiosas, origen nacional o cualquier otra condición, a los balnearios, playas, parques, círculos sociales y demás centros de cultura, deportes, recreación y descanso, reafirmando así la propiedad estatal sobre estos espacios.

Lo destacado de la regulación constitucional cubana es que, si bien no contiene una definición expresa de servicio público, la Constitución de 1976 fue pionera en reconocer explícitamente el derecho al deporte como un derecho genuino y autónomo, concretamente, el artículo 51º (posteriormente artículo 52º) señala que: "Todos tienen derecho a la educación física, al deporte y la recreación".

Este reconocimiento constitucional del derecho al deporte como un derecho independiente y autónomo marcó un precedente histórico a nivel mundial. Después de Cuba, otros países como Portugal, Nicaragua, Brasil, Mozambique, Colombia, Cabo Verde, Venezuela, Ecuador, Bolivia, República Dominicana y México (Pachot, 2016,

p. 119-150), incluyeron disposiciones similares en sus respectivas Constituciones, reconociendo también el derecho al deporte como un derecho fundamental de los ciudadanos.

Queda claro que el derecho al deporte en la Constitución cubana se enmarca dentro de la categoría de los derechos sociales, económicos y culturales, puesto que, este derecho promueve el desarrollo integral de las personas, aspecto que también se reconoce en otras constituciones, como las de Perú y Venezuela, al incluir el derecho al deporte dentro del conjunto de los derechos culturales.

Al clasificarse como un derecho cultural, el derecho al deporte en la Constitución cubana se considera un derecho de carácter prestacional, esto significa que requiere una intervención activa por parte del Estado para asegurar, promover y satisfacer las necesidades relacionadas con el ejercicio de este derecho, principalmente a través de una política económica que permita la creación de las condiciones materiales mínimas necesarias.

Esto se traduce, por ejemplo, en la construcción de infraestructura deportiva adecuada, el establecimiento de un sistema educativo completo que incluya la formación en el ámbito deportivo, y la creación de instituciones gubernamentales especializadas en el deporte, entre otras medidas; por lo tanto, la realización plena del derecho al deporte en Cuba se encuentra directamente vinculada a la implementación de políticas públicas que garanticen las condiciones materiales necesarias para su ejercicio efectivo.

En la nueva Constitución de la República de Cuba, vigente desde abril de 2019, el deporte se aborda en tres ocasiones; la primera de ellas se encuentra en el artículo 32º, inciso e), donde se establece que el Estado debe orientar, fomentar y promover

el deporte en todas sus manifestaciones, como un medio de educación y contribución a la formación integral de las personas. De esto se desprende que la nueva Constitución cubana considera al deporte como un principio rector del Estado, con dos dimensiones clave: El deporte es un fin en sí mismo, al ser indispensable para el desarrollo humano integral de los ciudadanos; y el deporte se encuentra estrechamente vinculado con la educación, de modo que el Estado tiene la obligación de promoverlo como parte de los esfuerzos por brindar una formación completa a la población.

En el artículo 46º de la nueva Constitución cubana de 2019, se establece que "todas las personas tienen derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, la salud, la educación, la cultura, la recreación, el deporte y a su desarrollo integral".

Es decir, la Constitución incluye expresamente al deporte dentro del catálogo de derechos individuales y sociales esenciales que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos; esto implica que el deporte se reconoce como un derecho autónomo, con la misma jerarquía e importancia que otros derechos fundamentales como la vida, la salud y la educación.

Asimismo, en el artículo 74º de la nueva Constitución, se establece que "las personas tienen derecho a la educación física, al deporte y a la recreación como elementos esenciales de su calidad de vida". Este artículo forma parte del conjunto de disposiciones que regulan de manera específica cada uno de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución cubana; dentro de este marco, el derecho al deporte se aborda de manera autónoma, lo que revela que es considerado un derecho fundamental en sí mismo.

Después de analizar tanto la Constitución cubana de 1976 como la de 2019, y haber revisado brevemente la historia del deporte en este país, se puede concluir que Cuba no solo fue pionera en incluir el derecho al deporte dentro del conjunto de derechos fundamentales, sino que lo hizo de manera integral y completa a lo largo de su texto constitucional, tanto en la Constitución de 1976 como en la de 2019.

Es decir, Cuba no solo reconoció explícitamente el derecho al deporte como un derecho autónomo e independiente, sino que lo hizo de forma exhaustiva y detallada dentro de su marco constitucional, sentando así un precedente histórico a nivel mundial en cuanto al reconocimiento y protección del derecho al deporte como un derecho fundamental de los ciudadanos.

2.2.2.2.4.3. México

En México existieron dos intentos por incorporar el derecho al deporte en la Constitución; el primero, en 1917, durante el Constituyente de Querétaro, se hizo un primer intento por incluir este derecho en el texto constitucional. Sin embargo, esta iniciativa no prosperó y no se reconoció constitucionalmente el derecho humano a la práctica del deporte. Posteriormente, en 1999, el senador Mario Saucedo Pérez presentó una iniciativa de decreto en el Senado, con el objetivo de adicionar un párrafo al artículo 4 de la Constitución Mexicana. La redacción propuesta era la siguiente: "Toda persona tiene derecho a la práctica del deporte. Le corresponde al Estado fomentar su práctica y difusión. La ley definirá las bases y modalidades para el ejercicio de este derecho conforme a lo dispuesto en la fracción 39 J del artículo 73 de la Constitución.". No obstante, a pesar de estos dos intentos, el derecho al deporte no fue reconocido en la Constitución Mexicana en ese momento.

Antes de la reforma constitucional de 2011 en México, el tema del deporte no se encontraba expresamente reconocido en la Constitución, sin embargo, de manera tácita, el derecho al deporte podía considerarse incluido en el artículo 3º, el cual establece que: “(...)La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano (todas las facultades del ser humano son las mentales, las físicas, las intelectuales, las de solidaridad humana, las de conciencia existencial).” Además, este artículo señala que la educación debe contribuir a la mejor convivencia humana, y el deporte es un elemento que contribuye a la formación integral de la persona y al logro de estas aspiraciones.

La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 en México tuvo un impacto profundo en el sistema jurídico, considerándose como una de las modificaciones más trascendentales a la Constitución en este ámbito, equiparable a la incorporación de los derechos sociales en 1917. Dicha reforma planteó el reto de que los cambios se reflejaran en la vida cotidiana de las personas, dando lugar a un verdadero cambio de paradigma en el derecho mexicano.

Como resultado de las importantes reformas constitucionales previamente mencionadas, el 12 de octubre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que adicionó un párrafo décimo al artículo 4º y reformó la fracción XXIX-J del artículo 73º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La adición al artículo 4º consistió en reconocer el derecho que toda persona tiene a la cultura física y a la práctica del deporte, estableciendo que corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo, conforme a las leyes en la materia. Con esta incorporación, el derecho al deporte pasó a ser considerado un derecho fundamental en México, lo cual representa un avance significativo en el reconocimiento y protección de este derecho a nivel constitucional.

2.2.2.2.4.4. Chile.

Según el análisis del profesor Gamero (2012), el modelo deportivo chileno se enmarca en un modelo más bien abstencionista, pero no del todo. Si bien el Estado interviene en el deporte, lo hace de manera subsidiaria. Los principales entes encargados de promocionar, fomentar y desarrollar las políticas deportivas en Chile son las instituciones privadas, no el Estado directamente; esto se encuentra establecido expresamente en el artículo 3º, párrafo final, de la Ley N. ° 19.712, que señala: "La política nacional del deporte deberá velar por la autonomía de las organizaciones deportivas y la libertad de asociación, fundada en los principios de descentralización y de acción subsidiaria del Estado."

Es decir, la legislación chilena establece que la política deportiva nacional debe respetar la autonomía de las entidades deportivas privadas y su libertad de asociación, basándose en los principios de descentralización y acción subsidiaria del Estado.

La piedra angular de la legislación deportiva en Chile es la Ley N. ° 19.712, también conocida como la "Ley del Deporte", promulgada en el año 2001, esta ley ha sido objeto de algunas modificaciones recientes, en el 2016, se incorporó de manera expresa el deporte adaptado y paraolímpico dentro de su marco normativo y en el 2020, se especificaron con mayor detalle las funciones de desarrollo integral del deporte en cuanto a integración social, salud y recreación; además, en esta última modificación, la ley sanciona todo tipo de conducta discriminatoria o de abuso relacionada con el deporte.

Luego de una revisión detallada de la normativa chilena, hemos a la conclusión de que la palabra deporte solo aparece en la Constitución de Chile para

hacer referencia a la opción que tienen las municipalidades de constituir corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro, con el objetivo de promocionar y difundir el deporte, sin embargo, ni las palabras recreación ni actividad física siquiera son consideradas en la Constitución.

Es decir, la actividad deportiva y sus derivados no se encuentran incluidos dentro del catálogo de derechos y deberes constitucionales del Capítulo III de la Carta Fundamental, ni tampoco se consagra como parte de las bases de la institucionalidad del Capítulo I, ni como un principio de la Nacionalidad y Ciudadanía del Capítulo II.

A diferencia de la Constitución Chilena, donde la mención del deporte es muy limitada, en la Constitución de Cuba la palabra deporte aparece integrada en seis oportunidades, como ya se indicó en párrafos anteriores; estas menciones están relacionadas con diversos aspectos fundamentales, como los principios básicos de la institucionalidad cubana, así como también como parte de la educación y salud de todos los ciudadanos cubanos.

La carencia de una consideración más amplia del deporte en el derecho constitucional chileno puede ser entendida como la causa de las alarmantes cifras y estadísticas en torno a la salud física y mental de los chilenos; asimismo, la nula referencia constitucional al deporte en Chile acarrea otras consecuencias negativas, como la malversación de fondos, la inequidad y discriminación en el acceso a deportes de alto rendimiento, la falta de apoyo económico a las selecciones deportivas nacionales, y la segregación del acceso al deporte escolar de acuerdo a los ingresos municipales.

2.2.2.2.4.5. Breves referencias normativas a los países sudamericanos.

Algunas de las constituciones de América Latina en las que se reconoce el derecho al deporte son: La Constitución brasileña establece en su artículo 217º que es deber del Estado fomentar las prácticas deportivas, tanto formales como no formales, considerándolas un derecho de cada ciudadano.

Dentro de este marco, la Constitución establece los siguientes principios: Autonomía de las entidades deportivas dirigentes y de las asociaciones en lo referente a su organización y funcionamiento; prioridad en la asignación de recursos públicos para la promoción del deporte escolar y, en casos específicos, para el deporte de alta competición; tratamiento diferenciado entre el deporte profesional y el deporte no profesional y la protección e incentivo a las manifestaciones deportivas de creación nacional.

Además, esta Constitución establece que el Poder Judicial sólo admitirá acciones relativas a la disciplina y a las competencias deportivas una vez agotadas las instancias de la justicia deportiva, la cual tiene un plazo máximo de 60 días para dictar una resolución final.

Por otro lado, La Constitución colombiana de 1991 reconoce en su artículo 52º el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre; Además, establece que el ejercicio del deporte, en sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas, tiene como función la formación integral de las personas y la preservación y desarrollo de una mejor salud en el ser humano. Por lo tanto, la Constitución considera al deporte y la recreación como parte de la educación y los define como un gasto público social.

En este sentido, el Estado colombiano tiene la obligación de fomentar estas actividades deportivas y recreativas en sus diversas formas. Asimismo, el Estado debe inspeccionar, vigilar y controlar a las organizaciones deportivas y recreativas, cuya estructura y propiedad deben ser democráticas.

Por su parte, sobre el tratamiento del deporte en la Constitución Política del Ecuador de 2008, refiere en el Título II, Capítulo Segundo, denominado "Derechos del Buen Vivir", específicamente en su artículo 24º, que las personas tienen derecho a la recreación, al esparcimiento y a la práctica del deporte, así como al tiempo libre.

Además, en el Capítulo Tercero sobre "Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria", el artículo 39º señala que el Estado garantizará a los jóvenes sus derechos a la recreación, al deporte y al tiempo libre. Esto implica que el Estado deberá implementar políticas, programas e instituciones que aseguren y mantengan la participación e inclusión de los jóvenes en estos ámbitos. Más aún, la Constitución reconoce a los jóvenes como actores estratégicos para el desarrollo del país, por lo que les garantiza, entre otros derechos, los relacionados con la educación, la salud, la vivienda, la recreación, el deporte y el tiempo libre.

En otro orden de ideas, en el artículo 84 de la Constitución paraguaya de 1992, se establece que "El Estado promoverá los deportes, en especial los de carácter no profesional, que estimulen la educación física, brindando apoyo económico y exenciones impositivas a establecerse en la ley. Igualmente, estimulará la participación nacional en competencias internacionales".

Esto significa que la Constitución paraguaya encomienda al Estado la promoción y fomento de las actividades deportivas, con un énfasis particular en los

deportes de carácter no profesional, aquellos que contribuyen a la educación física de la población.

Para ello, dicha constitución ordena al Estado brindar apoyo económico y otorgar exenciones impositivas a través de las leyes correspondientes. Asimismo, establece que el Estado debe estimular y promover la participación de atletas y equipos nacionales en competencias internacionales.

Capítulo III

Análisis y resultados

3.1. Investigaciones realizadas

Conforme al diseño establecido para la observación, se deberá seguir la ruta trazada por el instrumento de revisión previsto para este tipo de información. En ese sentido, se ha contemplado la utilización de una guía de observación de la legislación nacional e internacional, la cual se ha estructurado bajo el único y exclusivo criterio de realizar reconocer la necesidad de la Institucionalización del derecho deportivo en el Perú; en razón de ello, tenemos como primera sentencia relevante del Tribunal Constitucional la del **Expediente N. ° 03574-2007-PA/TC**, la cual, en su fundamento 17, señaló lo siguiente: “A criterio de este Tribunal, la promoción del deporte constituye un deber primordial del Estado social y democrático de Derecho, establecido en el artículo 44° de la Constitución. De ahí el deber que asume el Estado, en relación con el deporte, se manifiesta en tres aspectos: en primer lugar, el Estado debe respetar, por mandato constitucional, todas aquellas manifestaciones deportivas de los individuos o de grupos de ellos que constituyan la expresión de su derecho a la libertad de asociación (artículo 2°, inciso 13, de la Constitución)(...)”. De igual forma, la sentencia, que declara fundada la demanda de amparo que dio origen al **Expediente N.º 01396-2017-PA/TC**, en su fundamento n.º 13, señala que: “(...)la promoción y democratización del deporte es una ineludible obligación estatal que justifica la intervención estatal y, más concretamente, la existencia de subsidios cruzados, en aras de promover el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad de quienes decidan realizar actividades deportivas de manera profesional o recreativa(...)”. Finalmente, como última sentencia analizada, tenemos la Sentencia 350/2023 , referente a la Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley n.º 31279, que dio origen al Expediente n.º 00002-2022-PI/TC, en la cual, el fundamento n.º 07 de la misma, señala que: “(...)conforme ordena el artículo 14° de

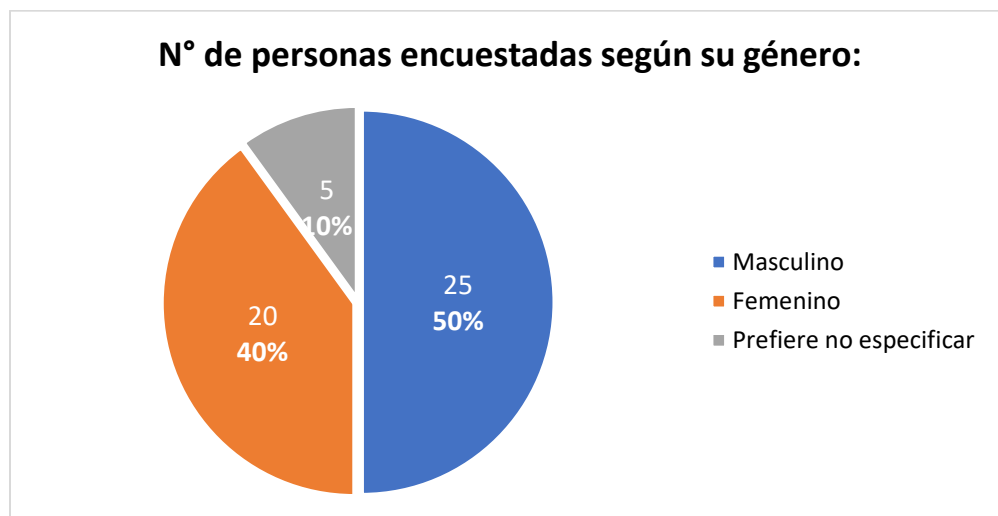
la Constitución, el Estado tiene el deber de promover el deporte con el propósito de contribuir en el desarrollo integral de las personas(...)”.

Seguidamente, se realizó una encuesta constituida de 10 preguntas con la finalidad de identificar el grado de conocimiento que tienen las personas (deportistas y abogados) sobre la importancia del deporte y la actividad física en la vida de las personas, así como el deporte como derecho fundamental y la necesidad de contar con un marco jurídico específico relacionado al deporte. La encuesta fue aplicada a la muestra constituida por 50 personas de 18 a 40 años de la ciudad de Chiclayo, entre los cuales tenemos a 20 futbolistas profesionales del Club Piratas FC, 10 deportistas amateurs de diversas disciplinas, 10 abogados con conocimiento en derecho constitucional/administrativo y 10 personas que trabajan en clubes profesionales de fútbol.

3.2. Resultados del análisis sobre la muestra

Tomando en consideración que, la investigación, ha planteado como objetivo general, determinar la necesidad de la institucionalización del derecho deportivo a través de la autonomía del derecho al deporte, la población y la muestra, se diseñó con la intención de verificar el primer aspecto de la propuesta, determinar la necesidad de la institucionalización del derecho deportivo en la legislación peruana.; por tanto, en atención al análisis de la jurisprudencia descrita, se optó por la elaboración de una encuesta, la cuál obtuvo como resultados, los que a continuación procederemos a describir.

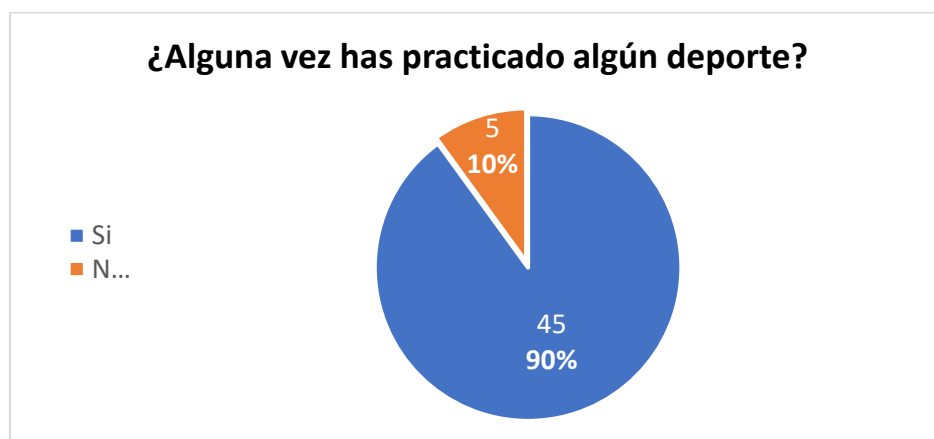
Figura n.º 01



Elaborado por el autor

Nota: El mayor porcentaje de encuestados es representado por un 50% del sexo masculino, lo que equivale a 25 personas, mientras que el 40% de encuestados es femenino, equivale a 20 personas y finalmente, el 10% restante equivale a un grupo de 05 personas que prefiere no especificar su sexo.

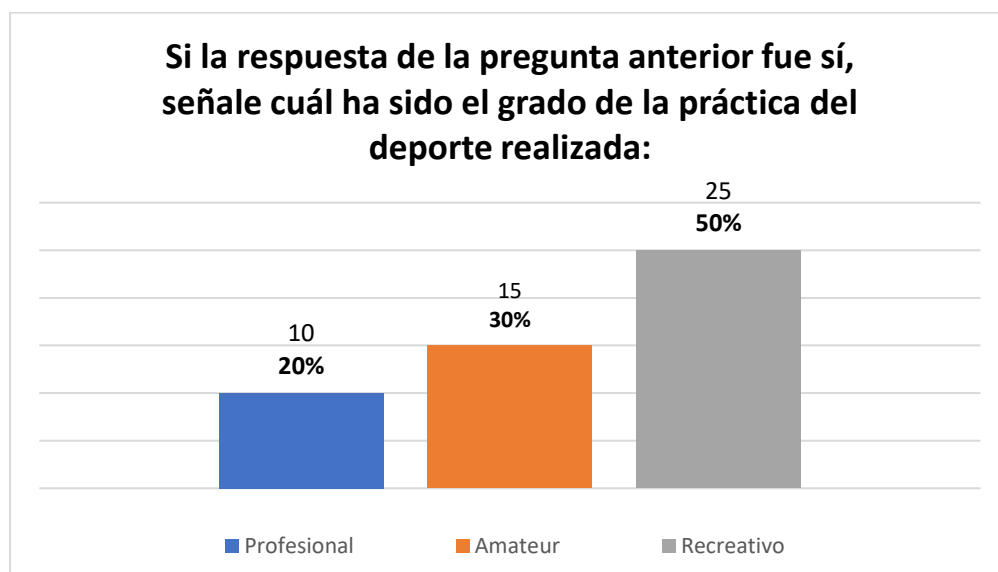
Figura n.º 02



Elaborado por el autor

Nota: En la figura n.º 02 podemos apreciar que el 90% de los encuestados señalan que sí han practicado algún deporte alguna vez en su vida, mientras que un 5% señala que, no ha practicado ningún deporte.

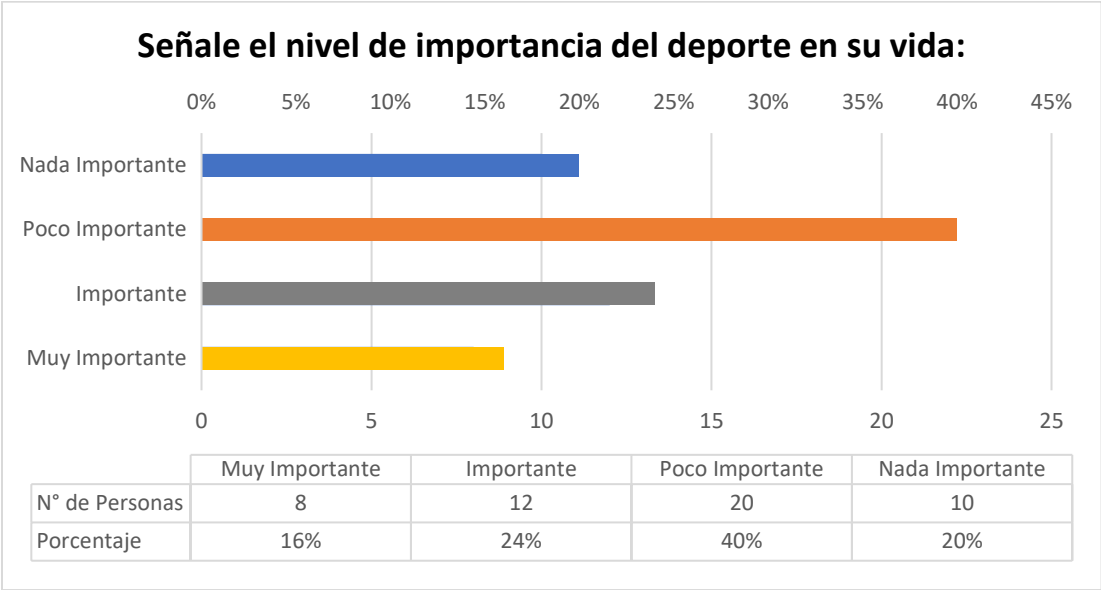
Figura n.º 03



Elaborado por el autor

Nota: En la figura n.º 03, el 50% de los encuestados señalan que han practicado algún deporte de manera recreativa, eso equivale a 25 personas; el 30% señala que, ha practicado deportes de manera amateur, ello equivale a 15 personas encuestadas y finalmente, 10 personas encuestadas, señalan que, han practicado algún deporte a nivel profesional, eso equivale al 20% del total de encuestados.

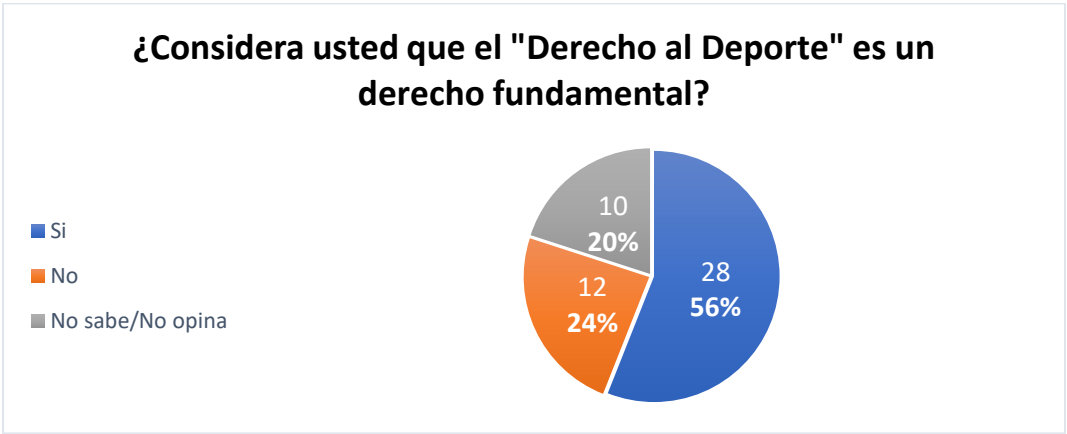
Figura n.º 04



Elaborado por el autor

Nota: En la figura n.º 04, apreciamos que, 08 personas del total encuestado, equivalente al 16%, señalan que, el deporte, tiene el nivel de “muy importante” en su vida; el 24% señala que, el deporte es “importante” en su vida; apreciamos también que, el mayor porcentaje de los encuestados (40%), señala que, el deporte es “poco importante” en el desarrollo de su vida; por último, 20% de los encuestados, señala que, el deporte tiene el nivel de “nada importante”.

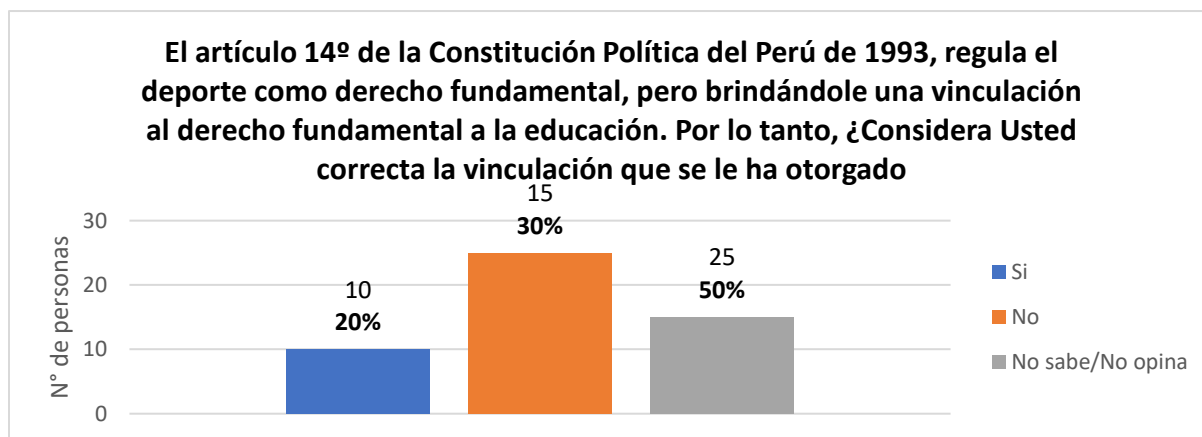
Figura n.º 05



Elaborado por el autor

Nota: Con respecto a la interrogante planteada, se puede constatar que, el 56% de los encuestados, aseguran que, el deporte un derecho fundamental; por su parte, el 24% señala que no lo es y el 10% restante, no sabría cómo definir al deporte, por tanto, no emite opinión alguna.

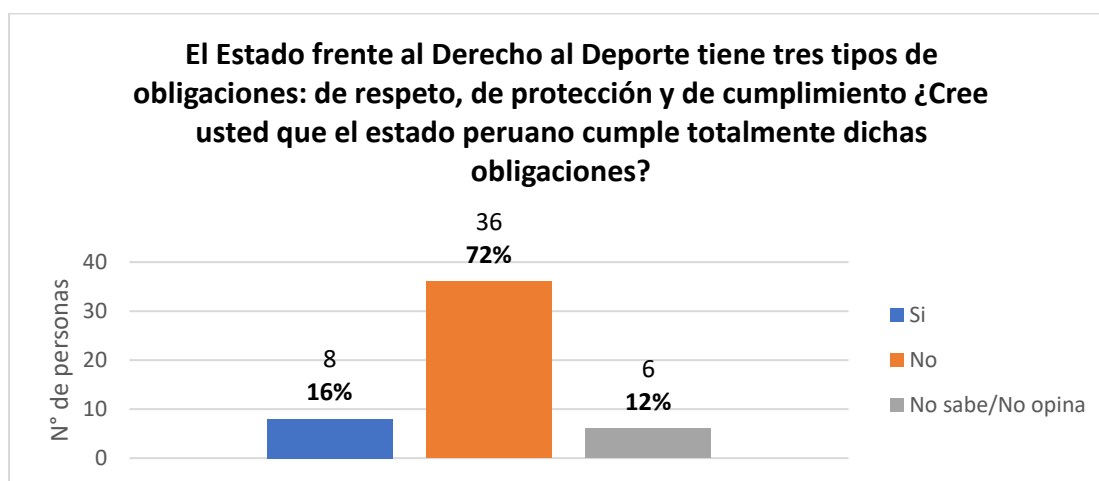
Figura n.º 06



Elaborado por el autor

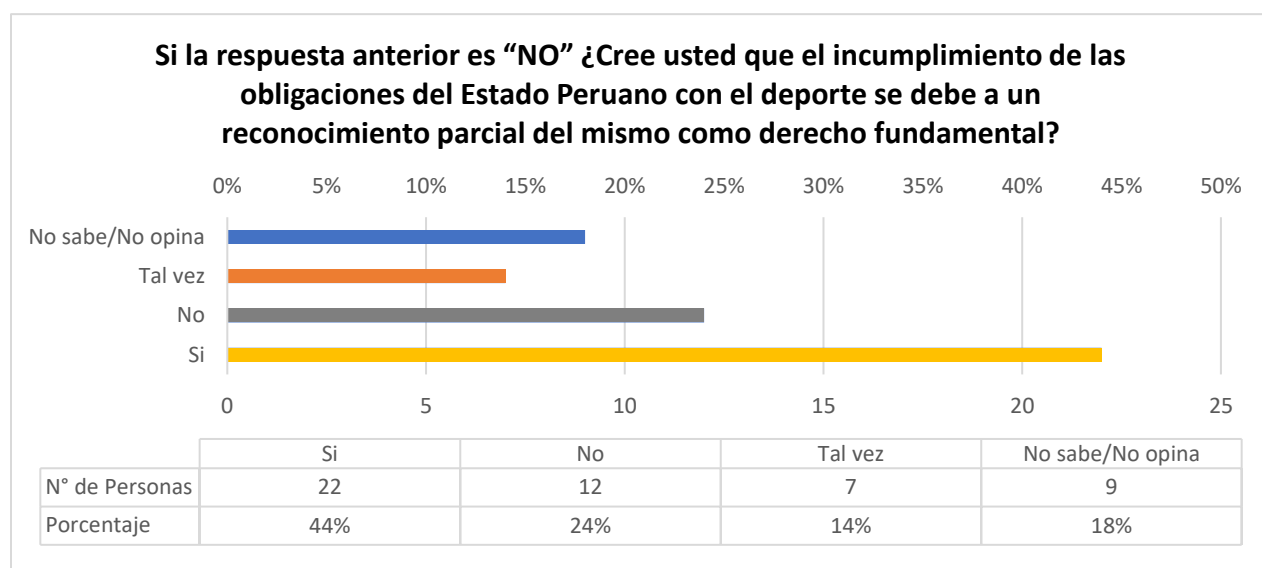
Nota: Teniendo en cuenta lo declarado por el 30% de los encuestados, se logra asegurar que, es incorrecta la vinculación que se le ha brindado al deporte con el derecho a la educación; por su parte, el 20 %, señala que, la Constitución Política del Perú de 1993, ha realizado una correcta vinculación entre el derecho al deporte y el derecho a la educación.

Figura n.º 07



Nota: Con respecto al resultado del gráfico número 07, el 16% de los encuestados señala que, el estado peruano si cumple totalmente con sus obligaciones respecto al deporte; asimismo, el 72% de los participantes, indica que, el estado no cumple con dichas obligaciones; finalmente, el 12%, optó por no brindar una opinión al respecto.

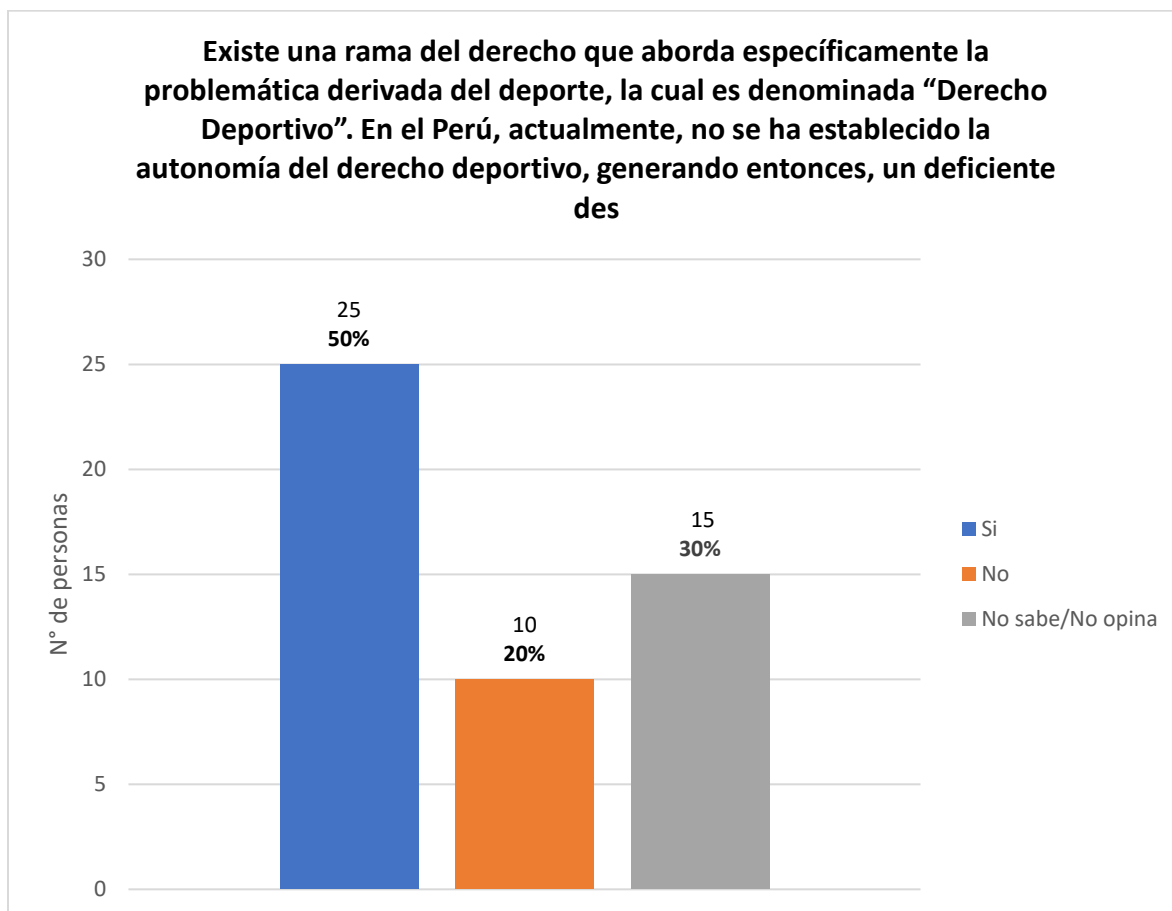
Figura n.º 08



Elaborado por el autor

Nota: De acuerdo al resultado obtenido, la figura n.º 08, nos permite evidenciar que, 44% de las personas encuestadas, piensan que, el reconocimiento parcial del deporte como derecho fundamental, es una de las causas por las cuales, el estado peruano, no cumple con sus obligaciones respecto al deporte; por su parte, un 24% de los mismo, opina que, el incumplimiento de obligaciones de dichas obligaciones, no tiene relación con el reconocimiento parcial del deporte como derecho fundamental.

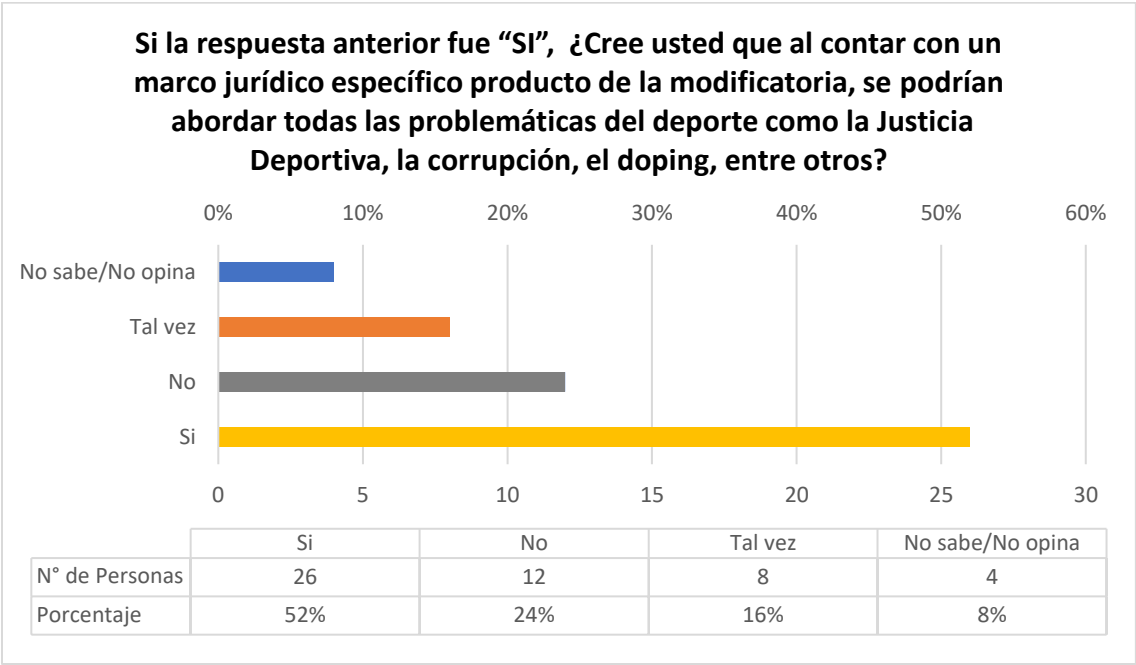
Figura n.º 09



Elaborado por el autor

Nota: De acuerdo al resultado obtenido, la figura n.º 09, nos permite evidenciar que, 50% de las personas encuestadas, piensan que, en el Perú, actualmente, no se ha establecido la autonomía del derecho deportivo, generando entonces, un deficiente desarrollo normativo de la materia. Por tal razón ¿Considera necesario plantear una modificatoria a nuestra legislación nacional respecto a ello?

Figura n.º 10



Elaborado por el autor

Nota: De acuerdo al resultado obtenido, la figura n.º 10, nos permite evidenciar que, 52% de las personas encuestadas, piensan que, contar con un marco jurídico específico, producto de la modificatoria, se podrán abordar todas las problemáticas del deporte.

Capítulo IV

Contrastación de la Hipótesis

4.1. Discusión de los resultados

En este apartado de la investigación se desarrolla la respectiva contrastación de los resultados, para ello se tuvo en cuenta el objetivo general del presente trabajo, el cual era determinar la necesidad de la institucionalización del derecho deportivo a través de la autonomía del derecho al deporte; para ello, se tuvo como respaldo, lo obtenido en el gráfico n.º 09, donde el 50% de los encuestados aseguran que, el no establecimiento de la autonomía del derecho deportivo, genera un deficiente desarrollo normativo en el Perú, sin embargo, existe un 20% de los encuestados que señalan, no ser necesario plantear una modificatoria de la legislación nacional en cuanto al derecho deportivo; es importante indicar que, el análisis de la normativa deportiva en nuestro país pone en evidencia la necesidad de perfeccionarla y actualizarla, atendiendo a los principios teóricos derivados de la consagración constitucional del derecho al deporte, esto implica que los elementos constitutivos de este derecho fundamental deben estar vigentes y reflejados en el marco normativo correspondiente; esto a su vez conduce a la imperiosa tarea de sistematizar y armonizar dicha normativa, teniendo como pilar fundamental el reconocimiento autónomo del derecho al deporte.

Ante la ausencia de una ley general de ordenación del deporte, la propuesta inicial se orienta hacia la modificación del artículo 14º de la Constitución Política del Perú; esto permitiría contar con un marco constitucional que facilite la actualización y sistematización de las disposiciones legales vigentes en esta materia.

La modificación constitucional propuesta debe establecer, orientar y ordenar los lineamientos generales respecto al derecho al deporte y su desarrollo normativo, tomando en cuenta la dogmática teórica particular de este derecho y sus elementos constitutivos; de este modo, se logrará la necesaria coherencia y armonía del conjunto de normas relacionadas con el ámbito deportivo.

Continuando con la contrastación de resultados, se tuvo en consideración, el primer objetivo específico, el cual busca reconocer la necesidad de la Institucionalización del derecho deportivo en el Perú; cabe mencionar que, dicho objetivo tiene como respaldo, lo obtenido en el gráfico n.º 10, donde se evidencia que, el 52% de los encuestados aseguran que, el contar con un marco jurídico específico producto de la modificatoria, permitirá abordar todas las problemáticas del deporte y que son tratadas por el derecho deportivo, como son, la Justicia Deportiva, la corrupción, el doping, entre otros; es preocupante, observar, el evidente desconocimiento, tanto de los deportistas, como los profesionales relacionados a la materia, puesto que, el 24% de los encuestados señaló que, contar con un marco jurídico específico relacionado al deporte, no permitiría encargarnos de problemas vinculados a este, mencionados en líneas anteriores.

Respecto a todo ello, es preciso señalar que, el deporte, si bien conlleva múltiples beneficios para las personas y la sociedad, también se ve rodeado de diversas problemáticas que deben ser adecuadamente reguladas, esto con el fin de asegurar el debido ejercicio y la garantía del deporte como un derecho humano. En este sentido, resulta necesario explicar brevemente algunos de los principales problemas y desafíos que conciernen al ámbito deportivo. Estos incluyen:

- a) Gobernanza de organizaciones deportivas: En el Perú, existe una falta de transparencia en la administración de federaciones, ligas y clubes deportivos, puesto que, se evidencia la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y control.
- b) Protección de los derechos de los atletas: Existe una insuficiente regulación de las relaciones contractuales entre atletas y clubes/federaciones, así como, problemas recurrentes relacionados a incumplimiento de pagos, abuso de la posición de poder y falta de garantías laborales.

Los atletas en el Perú, carecen de suficiente resguardo legal sobre el uso de su imagen y datos personales por parte de organizaciones deportivas y medios, al igual que, la falta de claridad sobre los derechos de propiedad intelectual y comercialización de la imagen de los deportistas.

Por tanto, se genera una necesidad de establecer un régimen contractual especializado que equipare los derechos de los atletas con los de otros trabajadores.

- c) Dopaje y seguridad médica: Debemos precisar que, la normativa antidopaje en el Perú se encuentra dispersa y carece de una regulación integral, puesto que, no existe un código o ley nacional de dopaje que armonice los procedimientos y sanciones con los estándares internacionales. De igual forma, no se cuenta con un organismo público autónomo especializado en la lucha contra el dopaje.

Es preciso señalar también que, existe un insuficiente control y monitoreo, es decir que, es limitada la capacidad de las federaciones deportivas y la Comisión Nacional Antidopaje (CONAD) para realizar controles efectivos debido a una escasez de recursos, laboratorios acreditados y personal capacitado para las pruebas antidopaje.

Por otro lado, respecto a la protección de la salud de los atletas, tenemos una ausencia de protocolos y programas robustos para la prevención, atención y

rehabilitación de lesiones deportivas, de igual forma, falta de regulación sobre el uso de tratamientos, suplementos y procedimientos médicos en el deporte.

- d) Financiamiento y sostenibilidad del deporte: El presupuesto estatal destinado al fomento y desarrollo del deporte en el Perú es notoriamente bajo, representando menos del 0.1% del gasto público total, es decir que, existe una distribución inequitativa de los recursos públicos, con una concentración excesiva en algunas disciplinas y regiones.

Es por ello que, en nuestro país, no se cuenta con una política nacional de financiamiento deportivo que garantice la sostenibilidad a largo plazo, generando ello, barreras legales y fiscales. La normativa actual presenta obstáculos para la captación de patrocinios, donaciones y otras formas de financiamiento privado del deporte; de igual manera, existen vacíos legales y problemas de interpretación en materia tributaria que desincentivan las inversiones en el ámbito deportivo.

- e) Por lo tanto, el Perú requiere una reforma jurídica y de políticas públicas que permita incrementar la inversión, generar incentivos y facilitar el financiamiento sostenible del deporte a nivel nacional, regional y local; esto sentaría las bases para un desarrollo integral y equitativo del ecosistema deportivo.
- f) Corrupción: La institucionalización del derecho deportivo en el Perú puede ser una herramienta fundamental para combatir la corrupción en el ámbito del deporte; la creación de una ley o código de derecho deportivo, devenida de una modificatoria del artículo 14º de la constitución política del país, brindaría un marco normativo integral que regule de manera clara y detallada las diferentes actividades y relaciones dentro del sistema jurídico deportivo, permitiendo establecer principios, procedimientos y sanciones específicos para prevenir y sancionar actos de corrupción.

Continuando con la contrastación de los resultados obtenidos, se tuvo en cuenta al segundo objetivo específico, el cual era determinar que el deporte es un derecho autónomo en la Constitución Política del Perú, para lo cual, se tuvo como respaldo, lo obtenido en el Gráfico N.º 06, donde se aprecia que, el 30% de los encuestados, describe como incorrecta la vinculación que se le ha brindado al deporte con el derecho a la educación; por su parte, el 20 % de los encuestados, señala que, la Constitución Política del Perú de 1993, ha realizado una correcta vinculación entre el derecho al deporte y el derecho a la educación; respecto a ello, es importante resaltar que, actualmente, el tratamiento constitucional del deporte no es muy prominente en la Constitución de 1993, el deporte se encuentra integrado dentro de las materias relacionadas con la educación., específicamente, el artículo 14º de la Constitución establece que la educación debe promover el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de diferentes ámbitos, incluyendo las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte; la función de la educación es preparar a las personas para la vida y el trabajo, fomentando además la solidaridad. El texto constitucional no aborda al deporte como un tema independiente y de gran relevancia, sino que lo enmarca dentro de los objetivos y ámbitos generales de la educación, la Constitución no le otorga un tratamiento especial o destacado al deporte, sino que lo integra como parte de la formación integral que debe brindar el sistema educativo.

Mientras que, para la Constitución de 1979, se estableció que “El Estado promueve la educación física y el deporte, especialmente el que no tiene fines de lucro. Le asigna recursos para difundir su práctica”; como se puede apreciar la norma anterior considera que el deporte tiene autonomía propia, mientras que para la norma actual el deporte estaría incluido o vinculado en el ámbito de la educación.

Así pues, se busca que, la Constitución peruana consagre el derecho fundamental a la práctica del deporte, lo cual es concordante con la tendencia constitucional

que se observa en diversos países; estos países no solo reconocen al deporte como un derecho fundamental de carácter social, sino que también le otorgan un marco de garantías de naturaleza procesal e institucional. Dichas garantías implican tanto acciones positivas (de acción) como obligaciones de abstención por parte de los Estados; es decir, los Estados tienen el deber de promover, facilitar y proteger el ejercicio efectivo del derecho al deporte, así como también de abstenerse de intervenir u obstaculizar indebidamente el acceso y la práctica deportiva de los ciudadanos.

Por otro lado, se tiene al tercer objetivo específico, el cual buscaba realizar un estudio de legislación de los países de mayor desarrollo normativo en el plano deportivo a nivel internacional; si bien es cierto, dentro de las interrogantes de la encuesta, no se ha formulado una pregunta directamente relacionada con la legislación comparada, debido al tratamiento normativo complejo que existe en ciertos países, se buscó aproximar a los encuestados con dicho objetivo, así pues, de acuerdo al gráfico N.º 08, el 44% de los encuestados, afirma que, el incumplimiento de las obligaciones del Estado Peruano con el deporte (de respeto, de protección y de cumplimiento) se debe a un reconocimiento parcial del mismo como derecho fundamental; este reconocimiento parcial del deporte como derecho fundamental, no se evidencia en países como Brasil, Cuba (pionero a nivel latinoamericano), Argentina o Chile; esta consagración constitucional del deporte como un derecho fundamental en dichos países, se debe a su elevado desarrollo del marco de garantías procesales e institucionales, por medio del cual, los dichos estados tienen la obligación de garantizar y promover el ejercicio efectivo de este derecho, a través de acciones y políticas concretas.

Estas garantías estatales están orientadas a favorecer y proteger el acceso y la práctica del deporte por parte de todas las personas, sin distinción ni discriminación alguna, de esta manera, el reconocimiento constitucional del derecho al

deporte como fundamental contribuirá a asegurar su goce y ejercicio por parte de la población en general.

Así pues, la iniciativa de reforma constitucional que se plantea en la presente investigación, tiene como objetivo incorporar el derecho al deporte en la Constitución Política del Perú, como un derecho autónomo y no adscrito al derecho a la educación; esta propuesta de incluir el derecho al deporte a nivel constitucional no contraviene ni contradice ningún tratado internacional de derechos humanos, ni tampoco transgrede otras normas de rango constitucional vigentes en el país.

En otras palabras, la iniciativa de reconocer el derecho al deporte en la Constitución peruana se enmarca dentro del ordenamiento jurídico nacional e internacional, sin entrar en conflicto con otros derechos o disposiciones constitucionales establecidas; es decir, se busca elevar el deporte a la categoría de derecho fundamental, sin que ello implique una contradicción o incompatibilidad con el sistema legal y de derechos humanos ya existente.

Dado el imperativo de fortalecer y dar mayor relevancia al fomento del deporte en la sociedad, la propuesta de configurar el derecho al deporte como un derecho fundamental en la Constitución se encuentra plenamente justificada.

Dicho ello, se propone valorar la posibilidad de establecer un sistema interno de defensa jurídica del derecho al deporte, que se estructuraría dentro del propio Instituto Peruano del Deporte; este sistema se vertebraría en torno a un procedimiento especial, ante el cual se sustanciarían las acciones u omisiones provenientes tanto de autoridades públicas como de particulares, que lesionen o amenacen el ejercicio del derecho al deporte.

Además, este procedimiento especial también atendería otras diferencias y conflictos que puedan surgir entre los titulares del derecho al deporte, en el marco de su ejercicio, y la Administración Pública o las organizaciones deportivas; el marco institucional de este sistema de defensa jurídica bien podría estar conformado por Comités o Comisiones Especiales, que tendrían como sustento teórico los presupuestos de la Justicia Deportiva de carácter administrativo; estas instancias podrían establecerse a nivel distrital, provincial, regional y nacional, con el fin de garantizar la protección y defensa efectiva del derecho al deporte en todo el territorio.

Finalmente, es crucial destacar que los distintos resultados obtenidos revelan que, a nivel nacional, no hay un concepto claro sobre la consolidación del derecho deportivo. Esta situación solo podrá resolverse a través de una reforma legal y constitucional sólida, que funcionará como un mecanismo esencial para prevenir, identificar y sancionar eficazmente los principales problemas y desafíos que aún enfrenta el deporte en el país. Una reforma de este tipo contribuiría a la integridad, credibilidad y desarrollo sostenible de esta actividad fundamental

CONCLUSIONES

1. La Constitución Política del Perú no ha institucionalizado el deporte como un derecho dependiente del derecho a la educación y la cultura. No obstante, se ha evidenciado que el contenido de este derecho ha adquirido una gran amplitud, superando los estándares meramente educativos y culturales, para abarcar una dimensión más extensa y particular.
2. El tratamiento de la constitucionalización del derecho al deporte requiere de un análisis más profundo y detallado, pese a ello, somos conscientes de la actualidad y vigencia de este derecho en nuestros tiempos, así como de la necesidad de dotarlo de un marco jurídico propio, con el fin de contribuir al desarrollo de una legislación específica en la materia: el derecho deportivo.
3. El reconocimiento constitucional expreso del derecho al deporte y su desarrollo normativo es fundamental para lograr la necesaria coherencia y armonía del conjunto de normas relacionadas con el ámbito deportivo, esto permitirá abordar de manera integral las diversas problemáticas que afectan al deporte en el Perú. La legislación comparada coincide en reconocer el rol fundamental que tiene el deporte en el desarrollo de la persona humana, y están dispuestos a poner en acción todo el aparato estatal para que los ciudadanos integren la actividad física como parte esencial de su vida; de esta progresiva regulación constitucional del deporte, se puede entender la adopción de una nueva valoración de su importancia y relevancia social.
4. Existe una necesidad imperiosa de institucionalizar el derecho deportivo en el Perú a través de la autonomía del derecho al deporte; esto se sustenta en la evidencia de las diversas problemáticas que rodean al ámbito deportivo nacional, las cuales requieren una regulación jurídica integral y especializada.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda la modificación del artículo 14° de la Constitución Política del Perú, a fin de establecer el reconocimiento autónomo del derecho al deporte, así como los lineamientos generales para su desarrollo normativo.
2. Crear un organismo público autónomo especializado en la gobernanza, regulación y promoción del deporte a nivel nacional, el cual cuente con las capacidades técnicas y recursos suficientes para el cumplimiento de sus funciones.
3. Fortalecer las políticas y programas de financiamiento público para el deporte, garantizando una asignación presupuestaria adecuada y equitativa a nivel nacional, regional y local.
4. Implementar mecanismos efectivos de rendición de cuentas y control en la gestión de las organizaciones deportivas, a fin de asegurar la transparencia y el respeto de los derechos de los atletas.

REFERENCIAS

- Agirreazkuenaga, I. (1998). *Intervención pública en el deporte*. Editorial Civitas.
- Aguirre-Loaiza, H. H., Ayala, C. F., & Bermúdez, S. R. (2015). La atención-concentración en el deporte de rendimiento. *Educación física y deporte*, 34(2), p. 409-428.
- Arévalo, A. y Marazuela, A. (2002). El Consejo de Europa y el deporte. En Palomar Olmeda, A. (Coord.), *El modelo europeo del deporte* (pp. 17-76). J.M. Bosch Editor.
- Arévalo Navarro, G. (2002). Economía y Crisis del deporte en el Perú. El caso del Fútbol. *Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor De San Marcos*, (21), 187-199. https://economia.unmsm.edu.pe/publ/arch_rev-fce/RevistaFCE_21.pdf.
- Barrachina Juan, Eduardo (2001). *Derecho del Deporte*. Editorial PPU.
- Borda, G. (1985). *Manual de Derecho Civil. Parte General*. (12ª ed.). Editorial Abeledo Perrot.
- Barbieri, P. (2005). *Fútbol y Derecho*. (2ª ed.). Editorial Universidad.
- Beals, A. R. y Siegel, B. J. (1966). *Divisiveness and social conflict: An anthropological approach*. Editorial Stanford University Press.
- Bermejo, J. (1989). Constitución y ordenamiento deportivo. *Revista española de Derecho Administrativo*, (63), 337-364.
- Bernales, E. (1999). *La constitución de 1993. Análisis comentado*. (5ª ed.). Editorial RAO S.R.L.
- Bielsa, J. (2003). *Público y privado en el deporte*. Editorial Bosch.
- Blanco, E., Barranco, R. y Bermejo, J. (2002). *Las Leyes del Deporte de la Democracia: Bases para una Ley Siglo XXI*. Editorial Dykinson.
- Blanco Pereira, E. (2006). *Manual de la Organización Institucional Del Deporte: El deporte en la Constitución de 1978*. Editorial Paidotribo.
- Camps, A. (1996). *Las Federaciones deportivas. Su régimen jurídico*. Editorial Civitas.

- Capcha, O. (2013). Comentario al artículo 14. En *Gaceta Jurídica, LA CONSTITUCIÓN COMENTADA. Análisis artículo por artículo. Tomo I* (2 ed.). Lima: Gaceta Jurídica S.A.
- Carreño, L. (2009). Constructivismo y Educación. [*Reseña de Constructivismo y Educación de Mario Carretero*]. (32), 112-113.
- Carretero, J. (2015). *La fiscalidad del patrocinio deportivo*. (1ª ed.). Editorial Reus.
- Casero, R. (1983). La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de educación física y deporte. *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, (2), 1284-1288.
- Castilla, K. (2015). El derecho humano a la práctica del deporte. Una propuesta desde y para la Constitución mexicana. *Fair Play. Revista de Filosofía, Ética y Derecho del Deporte*, (6), 97-103. Obtenido en: <https://raco.cat/index.php/FairPlay/article/view/299641/389109>
- Castillo, L. (2009). El Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. Estudios y Jurisprudencia del Código Procesal Constitucional. Análisis de los procesos constitucionales y jurisprudencia artículo por artículo. *Revista Gaceta Jurídica*, 11(67), p.12-13.
- Cazorla, L. (2013). *Deporte y Estado*. Editorial Aranzadi.
- Cifuentes, S. (1988). *Elementos de Derecho Civil. Parte General*. Editorial Astrea.
- Clerc, C. (2012). Derecho del deporte o derecho deportivo. Su autonomía. *Revista de Derecho de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile*, (2), 17–34. Obtenido en: <https://doi.org/10.5354/rdep.voi2.31001>
- Colomer, A. (2001). *Cultura de Paz y medidas para Garantizarlas*. Editorial Nomos.
- Colomer, A. (2015). Tendencias del Constitucionalismo en el Siglo XXI: Cuestionamientos e innovaciones constitucionales. *Revista Teoría y realidad constitucional*, (36), 329-351. Obtenido en: <https://dialnet.unirioja.es/download/articulo/5288967.pdf>
- Cornescu, A. (2009). *The Generatins of Human's Rights. Dny práva – 2009 – Days of Law: The Conference Proceedings*. (1ª ed.). Brno: Masaryk University.

- Crespillo Perea, G. M. (2023). El complejo control jurisdiccional de la revocación y suspensión de licencias deportivas en la nueva ley del deporte: entre su publicación y su carácter privado. *Derecho deportivo 2023*, (1), 217-232.
- Crespo, D. y Frega Navia, R. (2006). La materia jurídico-deportiva. Sujetos, fuentes y principios de interpretación del Derecho deportivo. *Cuadernos de Derecho Deportivo*, (6/7), 19.
- Decreto Supremo N.º 014-2022-MINEDU de 2022 [Ministerio de Educación]. Por medio del cual se aprueba la Política Nacional de Actividad Física, Recreación, Deporte y Educación Física – PARDEF. 16 de setiembre de 2022. El Peruano.
- De Fierro, M. C. A. y Manrique, E. F. (2003). La hipertrofia legislativa. *Revista Jurídica Piélagus*, (2), 3-5.
- Del Giudice, F. y Emanuele, P. (2016). *Compendio di Diritto Costituzionale*. (20ª ed.). Edizioni Simone.
- De Trazegnies, F. (1985). *La Responsabilidad extracontractual*. (7ª ed., Vol. 4, Tomo 1). Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- El-Hodiri, M. y Quirk, J. (1976). An economic model of profesional sports league. *The journal of political economy*, 79(06), 1302–1319.
- Espartero Casado, J. (2000). *Deporte, asociacionismo deportivo y derecho de asociación (Las federaciones deportivas)*. Editor Universidad de León.
- Espartero Casado, J. (2009). *Introducción al Derecho del Deporte*. (2ª ed.). Editorial Dyckinson.
- Frega, R. (2005). Presentación. *Cuadernos de Derecho Deportivo*, (2), 13.
- Freixes, T. y Remotti, J. (2002). *El futuro de Europa: Constitución y derechos fundamentales*. Mínim Ediciones.
- Galindo, Y. (2017). La Constitución, el Deporte y los Servicios Públicos en Cuba. En: Pachot, K. El Derecho del Deporte en Iberoamérica: Desafíos y Experiencias Nacionales en el Siglo XXI. La Habana, Cuba, Editorial Unijuris. p. 45

- Gamero, E. (2012). *Fundamentos de derecho deportivo (Adaptado a estudios no jurídicos)*. Editorial Tecnos.
- García, V. (1998). *Análisis sistemático de la Constitución peruana de 1993. (Tomo 1)*. Editores Universidad de Lima y Fondo de desarrollo editorial.
- García, E. (2011). Un acercamiento al deporte y al fútbol como negocio y al funcionamiento, problemática y mejora del fútbol peruano. *Revista Journal of Business de la Universidad del Pacífico (Lima, Perú)*, 3(2), 79-107. Obtenido en: <http://dx.doi.org/10.21678/2078-9424.03.2>
- Gil, A. (2001). El derecho al deporte y el derecho del deporte. *Cuadernos de Derecho Deportivo*, (1), 34.
- Gil, R. (2012). Una aproximación a la Teoría Crítica del Conflicto Social de Karl Marx. *Revista Filosofía, política y economía en el Laberinto*, 37(1), pp. 33-43. Obtenido en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4134492.pdf>.
- Goodhart, P. y Chataway, C. (1968). *War without weapons*. Editorial WH Allen.
- Guzmán, J. (1999). *La Definición Constitucional en la Constitución Política de la República de Chile*. Fundación Jaime Guzmán.
- Hauriou, M. (2020). *La teoría de la institución y de la fundación, Ensayo del Vitalismo Social*. Ediciones Jurídicas Olejnik.
- Hernández, R. (2005). *Gestión y Administración de las organizaciones Deportivas* (Vol. 26). Editorial Paidotribo.
- Huizinga, J. (2020). *Homo ludens*. Editora Perspectiva SA.
- Kresalja, B. (2006). *Gestión y Justicia deportiva*. Editorial La República.
- Landa, C. (2017). *Los derechos fundamentales (1a ed.)*. Editorial Fondo.
- Loewenstein, K. (1982). *Teoría de la Constitución*. Editorial Ariel.
- Loupe, J. (1930). *Les Sports et le droit*. Editorial Librairie Dalloz.
- Lyra, J. (1952). *Introdução ao Direito Desportivo*. Irmaos Pongetti Editores.

- Melo, Á. (1998). *Lei Pelé Comentários à Lei Nº 9. 615/98*. (1ª ed.). Editora Brasilia Jurídica.
- Millán, A. (2015). *Cuestiones actuales de Derecho del Deporte*. Editorial Reus.
- Monge, A. (1987). *Aspectos básicos del Ordenamiento Jurídico Deportivo*. Editor Diputación General de Aragón, Dirección General de Deportes.
- Montoro, A. (1997). *Introdução a Ciencia do Direito*. (24ª ed.). Editora Revista Dos Tribunais.
- Morgan, W. (1994). *Leftiest Theories of Sport: A critique and reconstruction*. University of Illinois. *X Jornadas Unisport sobre Derecho Deportivo*, 31-39.
- Musso, A. (1999) La "ley" y el deporte de competencia. *Revista Ius et Veritas*, (18), 276-281.
<https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/15839/16271>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO. (2018). *Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte*.
Obtenido en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235409_spa
- Osterling, F. y Castillo, M. (2003). *Tratado de las Obligaciones. Cuarta Parte*. (Vol. 16, Tomo 12). Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Pachot, K. (2016). El Derecho Constitucional al Deporte en la Doctrina y el Derecho Comparado. *Revista Mexicana de Derecho Constitucional*, (35), 119-150. Obtenido en: <https://www.scielo.org.mx/pdf/cconst/n35/1405-9193-cconst-35-00119.pdf>.
- Palomino, J. (2007). Constitución, supremacía constitucional y teoría de las fuentes del Derecho: Una visión desde el Perú. *Cuadernos constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol*, 58(59), p. 227-242.
- Pérez, C. (2017). ¿Un Derecho internacional del deporte? Reflexiones en torno a una rama del Derecho internacional in statu nascendi. *Revista española de derecho internacional*, 69(1), 195-217. <https://www.revista-redi.es/redic/article/view/705/697>
- Perry, V. (2002). Introducción al Derecho Deportivo. *Revista de IBDD*, Editorial OAB, (3), 19-20.

- Piñeiro, J. (2008). *Responsabilidad civil y Deporte*. [Tesis doctoral, Universidad Pompeu Fabra]. Repositorio institucional de la Universidad Pompeu Fabra. Obtenido en: <http://hdl.handle.net/10803/7310>.
- Real, G. (1989). *Principios y fundamentos del Derecho Público del Deporte*. [Tesis doctoral, Universidad de Alicante]. Repositorio institucional de la Universidad de Alicante Obtenido en: <https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/3899/1/Real-Ferrer-Gabriel-t-1.pdf>.
- Real, G. (1990). *Bases y Principios del Derecho del Deporte*. Universidad de Lleida.
- Real, G. y Martín, R. (1991). *Derecho Público del Deporte*. Editores Civitas, Universitat d'Alacant y Servicio de Publicaciones.
- Renson R. (2009). *Fair Play: Its origins and meanings in sport and society*. Faculty of Kinesiology and Rehabilitation Sciences of Ku Leuven.
- Reyes-Bossio, M. (2006). Política deportiva: factores reales del sistema deportivo. *Liberabit Revista Peruana de Psicología*, 12, 87-94.
- Reyes, F. (1999). *Reforma al régimen de sociedades y concursos*. Editorial Temis S.A.
- Rubio, M. (1999). *Estudio de la Constitución política de 1993*. (1ª ed., Tomo 2). Fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. <https://andrescusi.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/05/estudio-de-la-constitucion-politica-de-1993-marcial-rubio-tomo-2.pdf>.
- Sagardoy, J. A., Guerrero, J. M., & Alonso Olea, M. (1991). *El contrato de trabajo del deportista profesional*. Editorial Civitas.
- Salazar, M. (2005). Comentario al artículo 14. En *Gaceta Jurídica, La Constitución Comentada*. Tomo I (1 ed.). Lima: Gaceta Jurídica S.A.
- Sánchez, F. (2000). *Análisis del deporte en edad escolar. Una alternativa para el futuro*. En libro del I Congreso Nacional de Deporte en edad escolar. Noviembre 2000. Patronato Municipal de Dos Hermanas.

- Simmel, G. (2023). *Soziologie der Geselligkeit*. Editorial Springer Fachmedien Wiesbaden. (p. 141-153).
- Sancho, J., Piqueres, J. y Manzano, M. (2002). *La gestión deportiva: clubes y federaciones* (Vol. 607). INDE Publicaciones.
- Schelsky, H. (1973), *Friede auf Zeit: die Zukunft der Olympischen Spiele*, Editorial A. Fromm.
- Varsi-Rospigliosi, E. (2006). La constitucionalización del deporte. *Jurídica: Suplemento de Análisis Legal de El Peruano*. Obtenido en: https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12724/7805/Varsi_Enrique_deporte.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Varsi-Rospigliosi, E. (2008). *Derecho deportivo en el Perú*. (1^a ed.). Fondo editorial de la Universidad de Lima.
- Weissbrodt, D. y Hicks, P. L. (1993). Implementation of human rights and humanitarian law in situations of armed conflict. *International Review of the Red Cross*, (293), 120-138. Obtenido en: <https://international-review.icrc.org/sites/default/files/S0020860400071540a.pdf>

ANEXOS
ENCUESTA PARA TRABAJO DE TESIS

La presente encuesta tiene como objetivo, determinar, a través de sus resultados, la necesidad de la institucionalización del derecho deportivo a través de la autonomía del derecho al deporte en la legislación peruana.

1. Identifique su género:
 - a) Hombre.
 - b) Mujer.
 - c) Prefiere no especificar.
2. Alguna vez has practicado algún deporte:
 - a) Sí.
 - b) No
3. Si la respuesta de la pregunta anterior fue sí, señale cuál ha sido el grado de la práctica del deporte realizada.
 - a) Profesional.
 - b) Amateur.
 - c) Recreativo.
4. Señale el nivel de importancia del deporte en su vida
 - a) Muy importante.
 - b) Importante.
 - c) Poco importante.
 - d) Nada importante.
5. ¿Considera usted que el deporte al deporte es un derecho fundamental?
 - a) Sí.
 - b) No.
 - c) No sabe/No opina.
6. El artículo 14º de la Constitución Política del Perú de 1993, regula el deporte como derecho fundamental, pero brindándole una vinculación al derecho fundamental a la educación. Por tanto, ¿Considera correcta la vinculación que se le ha otorgado al deporte con la educación? Fundamente su respuesta
 - a) Sí.
 - b) No.
 - c) No sabe/No opina.
7. El Estado frente al derecho al deporte tiene tres tipos de obligaciones; de respeto, de protección y de cumplimiento; cree usted que el estado peruano, cumple totalmente estas obligaciones con el deporte:
 - a) Sí.

- b) No.
 - c) No sabe/No opina.
8. Si la respuesta anterior es “NO” ¿Cree usted que el incumplimiento de las obligaciones del Estado Peruano con el deporte se debe a un reconocimiento parcial del deporte como derecho fundamental?
- a) Sí.
 - b) No.
 - c) Tal vez.
 - d) No sabe/ No opina.
9. Existe una rama del derecho que aborda específicamente la problemática derivada del deporte, la cual es denominada “DERECHO DEPORTIVO”; en el Perú, actualmente, no se ha establecido la autonomía del derecho deportivo, generando entonces, un deficiente desarrollo normativo de la materia. Por tal razón ¿Considera necesario plantear una modificatoria a nuestra legislación nacional respecto a ello?
- a) Sí.
 - b) No.
 - c) No sabe/ No opina.
10. Si la respuesta anterior fue “SI”, ¿Cree usted que, al contar con un marco jurídico específico producto de la modificatoria, se podrán abordar todas las problemáticas del deporte (La Justicia Deportiva, corrupción, doping, entre otros)?
- a) Sí.
 - b) No.
 - c) Tal vez.
 - d) No sabe/ No opina.